**Orden del Día de la Décima Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**6 de noviembre del año 2019.**

**1.-** Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.

**2.-** Declaratoria de apertura de la Sesión.

**3.-** Lectura, Discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día propuesto para el desarrollo de la Sesión.

**4.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Minuta de la Sesión anterior.

**5.-** Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.

**6.-** Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron en la sesión del día 30 de octubre de 2019.

**7.-** Lectura de Iniciativas de Reforma Constitucional:

**A.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 146, 148 y 153, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.En relación al nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.

**B.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, relativas a las facultades del titular del Poder Ejecutivo del Estado, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, de la Fracción Parlamentaria Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

**8.-** Lectura de Iniciativas de Diputadas y Diputados:

**A.-** Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso H de la fracción II del artículo 2-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de incluir en los actos o actividades en los que el IVA se calcula aplicando la tasa del 0% dentro de sus supuestos de la prestación de servicios independientes al agua destinada para el uso de riego agrícola, que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz.

**B.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 313 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”. En relación a la usurpación de profesión.

**C**.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan y modifican diversas disposiciones del Código Municipal, a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, que presenta el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor,conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario "Brigido Ramiro Moreno Hernández", del Partido Unidad Democrática de Coahuila, en materia de ciudades amigables con adultos mayores.

**D.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud, que presenta el Diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria “General Francisco L. Urquizo”.En relación a impulsar políticas públicas que propicien en la sociedad, la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, diabetes y otros trastornos de la conducta alimentaria.

**E.-** Propuesta deIniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria Elvia Carrillo Puerto”, del Partido de la Revolución Democrática, conjuntamente con las Diputadas que suscriben este documento, en materia atención a la salud menstrual.

**F.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”,por el que se adiciona la fracción VII al artículo 2º de la Ley que Crea el Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la Región Centro del Estado de Coahuila, en materia de desarrollo económico regional

**G.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derecho Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de establecer términos y condiciones en las medidas especiales de protección y restitución de derechos, que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María Esperanza Chapa García

**H.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que adiciona un segundo párrafo al numeral 7 de la fracción V del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.

**I.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 244 Bis y se modifica el artículo 245 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, **c**onjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor**,** del Grupo Parlamentario "Brigido Ramiro Moreno Hernández" del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**J.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7° y 88 de la Ley Estatal de Educación, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria Elvia Carrillo Puerto”, del Partido de la Revolución Democrática, conjuntamente con las Diputadas que suscriben este documento, en materia de gestión de conflictos entre profesores, padres de familia y alumnos.

**K.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto a fin de reformar el artículo 399 y adicionar los artículos 399 Bis y 399 Bis 1, al Código Penal del Estado, que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, en materia de delitos contra la fe pública

**L.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifican y agregan diversas disposiciones legales a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, y a la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de plasmar el término movilidad en la norma y establecer acciones referentes al mejoramiento de la infraestructura urbana y vial en el Estado, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.

**M.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 6 de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incorporar el principio de autosuficiencia en la observancia, interpretación y aplicación de la ley y los programas sociales, que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona.

**9.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes en cartera:

**A.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís.

**B.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Materia de Justicia Laboral, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís.

**C.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un párrafo final al Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

**D.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa de Decreto por el que se propone adicionar un nuevo párrafo cuarto al Artículo 173 de la Constitución Política del Estado, recorriéndose el que actualmente ocupa ese lugar a la quinta posición y haciéndose lo propio con los subsecuentes párrafos, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**E.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el tercer párrafo del artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

**F.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el Artículo 7 a la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, del Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.

**G.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 48 Bis, a la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila, en materia de reparación integral del daño, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**H.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de decreto por la que se propone adicionar una fracción X al artículo 285 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita conjuntamente las Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, por conducto del Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno.

**I.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto a través de la cual se realizan diversas reformas y adiciones a los artículos 56 y 58 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés. S. Viesca.” Del Partido Revolucionario Institucional.

**J.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar el inciso R a la fracción I del artículo 6 de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona,del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**K.-** Dictamen presentado por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 156 y se modifica el contenido del inciso B, del artículo 164, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que lo suscriben.

**L.-** Dictamen presentado por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 19, 25 fracción I, 88 fracción XXIV y 112 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, planteada por las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal.

**M.-** Dictamen presentado por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan las fracciones II y III al artículo 137 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a fin de publicar en la página electrónica del Poder Legislativo la relación de los exhortos y solicitudes emitidas, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**N.-** Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Social, con relación a la iniciativa con proyecto de decreto en la que se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 13 de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila.

**Ñ.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea el artículo 279 Bis; y el Título Décimo “Del Parlamento Abierto”, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**O.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual plantea una reforma a la Fracción Sexta del artículo 20 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**P.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se plantea una reforma a diversos artículos de la Ley Estatal de Educación para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**Q.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se plantea una reforma a los artículos 200, 259, 326 y 330 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**R.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**S.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa popular con proyecto de Decreto mediante la cual se plantea una reforma a los artículos 259, 330 y 331 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**T.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa popular con proyecto de Decreto mediante la cual se plantea una reforma a diversos artículos del Código Municipal, Constitución Política y al Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza,, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**U.-** Acuerdo de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, en conjunto con las y los Diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, “Con el objeto de que esta Legislatura, exhorte al Ejecutivo Federal, al Presidente López Obrador, a que busque invertir estratégicamente en los sectores que garanticen un incremento sostenido y oportunidades de desarrollo para todos.

**10.-** Proposiciones de Grupos Parlamentarios, Fracción Parlamentaria y Diputadas y Diputados:

**A.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Diana Patricia González Soto, “Mediante el cual se solicita de la manera más atenta a los 38 Ayuntamientos del Estado, intensifiquen y fortalezcan campañas de difusión, concientización y sensibilización entre su población sobre las alternativas con las que se podrá sustituir las bolsas de plástico, a dos meses que entre en vigor la prohibición de estos materiales no biodegradables”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**B.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta elDiputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, “Con objeto de que esta Sexagésima Primera Legislatura, exhorte al Gobierno Federal para que como parte de las acciones de coordinación con la Iniciativa Privada para fomentar la participación en el Buen Fin, se adelante parte de la prestación del aguinaldo a los trabajadores de la Administración Pública Federal, con el objeto de ayudar a reactivar la economía del país”.

**C.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que solicita información sobre la compra de terrenos para la construcción del aeropuerto de Saltillo en el Municipio de Ramos Arizpe, así como los argumentos y justificaciones para la suspensión de vuelos”.

**D.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, **“**Con objeto de que se exhorte atentamente a los 38 Ayuntamientos del Estado a que, en coordinación con las instancias respectivas, pongan en práctica o reanuden, según sea el caso, campañas de desarme de la sociedad civil, en aras de contribuir a que prevalezca en el país la ley y el orden”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**E.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, “Solicitando se lleve a cabo una investigación y se sanción en una serie de irregularidades que se han ejecutado en el Municipio de Parras de la Fuente, por parte de las autoridades municipales”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**F.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, de la Fracción Parlamentaria Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, “Para los efectos de que el Congreso del Estado, solicite al Lic. Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón, informe a esta Soberanía, las circunstancias en que dos menores resultaron atropellados por una patrulla de la policía municipal, los hechos que derivaron en la quema de la patrulla y, en su caso, las responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos y los particulares involucrados en estos hechos”.

**G.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Josefina Garza Barrera, **“**Con objeto de exhortar a la Secretaría de Salud Federal, para que de manera coordinada con la Secretaría de Salud Estatal, realicen las acciones necesarias para garantizar la aplicación de vacunas contra influenza y reforzar las campañas informativas sobre los cuidados requeridos en la temporada invernal”.

**H.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, “Mediante el cual se solicita a esta Honorable Asamblea, apruebe su dirija comunicación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para hacerle saber que el similar aprobado el pasado 16 de octubre de manera unánime por este Congreso, a instancias del Diputado Jaime Bueno Zertche, para que dicha Comisión legislativa al aprobarse el Presupuesto de Egresos de 2020, considere el destino de mayores recursos para la Universidad Autónoma de Coahuila, deja de tener el apoyo de los nueve Diputados del Partido Acción Nacional”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**I.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que se exhorta a las autoridades educativas a ampliar el personal de psicólogos que atienden los diversos centros escolares y el presupuesto para la operación de los USAERS en todo el Estado y la Región Carbonífera”.

**J.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerro”, del Partido de la Revolución Democrática, “A través de la que se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nuevo León a reconsiderar la pertinencia de la reforma al Artículo 48 fracción IV de la Ley Estatal de Salud de esa Entidad Federativa”.

**11.-** Agenda Política:

**A.-** Pronunciamiento que presentan las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral**.** Andrés S. Viesca**”,** del Partido Revolucionario Institucional, “Sobre los resultados del estudio realizado por el IMCO sobre el índice de información presupuestal estatal, que coloca a Coahuila entre los mejor evaluados del país”.

**12.-** Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima Sesión

**MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 10 HORAS, CON 27 MINUTOS, DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, DIO INICIO LA SESIÓN ESTANDO PRESENTES 24 DE 25 DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA, INFORMANDO LA PRESIDENCIA QUE EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS DIO AVISO QUE NO ASISTIRÍA A LA SESIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA. PASADO LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DECLARÓ VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TRATARÍAN.

**1.-** SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDA.

**2.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y LOS TÉRMINOS QUE FUE PRESENTADA LA MINUTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DISPENSÁNDOSE SU LECTURA.

**3.-** SE DIO LECTURA DEL INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**4.-** SE DISPENSO LA LECTURA DEL INFORME SOBRE EL TRÁMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO QUE SE PRESENTARON EN LA SESIÓN ANTERIOR.

**5.-** SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, CONJUNTAMENTE CON LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**6.-** SE HIZO UNA EXPOSICIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR Y DE PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTARON CONJUNTAMENTE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, COORDINADOR DE DICHA COMISIÓN, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE REGLAMENTEMOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS, PARA EFECTO DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**7.-** SE HIZO UNA EXPOSICIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO A FIN DE REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIA Y ACTIVIDADES CÍVICAS PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO DICTAMEN.

**8.-** SE HIZO UNA EXPOSICIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 104 Y SE MODIFICA TAMBIÉN EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA, CONJUNTAMENTE CON LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**9.-** SE HIZO UNA EXPOSICIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN POR MODIFICACIÓN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 20 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR,CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ" DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, EN MATERIA DE EQUIDAD LABORAL, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**10.-** SE HIZO UNA EXPOSICIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA, DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO”, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**11.-** SE HIZO UNA EXPOSICIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA, DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA ELVIA CARRILLO PUERTO”, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN COORDINACIÓN CON PAOLA AGUIRRE PRAGA, LETICIA ESPINOZA MÉNDEZ Y ABRIL MARTÍNEZ ÁVALOS, DE LA ORGANIZACIÓN CIVIL PROYECTO DE MUJERES, EN MATERIA ATENCIÓN A LA SALUD MENSTRUAL, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA, PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**12.-** SE HIZO UNA EXPOSICIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE DAR UN CORRECTO SENTIDO Y ALCANCE AL IMPEDIMENTO DE LOS MAGISTRADOS PARA CONOCER SOBRE ALGÚN ASUNTO, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**13.-** SE HIZO UNA EXPOSICIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO QUINTO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 188 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS PARA EFECTO DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**14.-** SE HIZO UNA EXPOSICIÓN GENERAL DE LA SE HIZO UNA EXPOSICIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3, LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 11 Y LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 25, DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN MATERIA DE ARBORIZACIÓN, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES, **C**ONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**,** DEL GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ" DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA, PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**15.-** INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 4, PASANDO LA ACTUAL A SER LA FRACCIÓN XXIV Y LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 29, PASANDO LA ACTUAL A SER LA FRACCIÓN XII, SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 Y LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 33, DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, CON EL OBJETO DE QUE LAS MUJERES AFECTADAS POR EL CÁNCER DE MAMA, TENGAN ACCESO A MAMO PLASTIA RECONSTRUCTIVA, SEGÚN SEA EL CASO, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**16.-** POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE DISPENSÓ LA LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 89 BIS Y UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO, RECORRIENDO EL SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ" DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, Y FUE TURNADA A LAS COMISIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA ESPECIAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS, PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN, POR LO QUE DICHA SOLICITUD SE SOMETE A CONSIDERACIÓN.

**17.-** SE HIZO UNA EXPOSICIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ESTATAL DE SALUD, CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA CULTURA DE LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS CON FINES DE TRASPLANTE, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**18.-** POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE DISPENSÓ LA LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO A FIN DE REFORMAR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 276 DE LA LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE COAHUILA, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, EN MATERIA DE ALIMENTOS Y DERECHOS FAMILIARES, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN, POR LO QUE DICHA SOLICITUD SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN.

**19.-** POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE DISPENSÓ LA LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, CON EL OBJETO DE REFORZAR LA OBLIGATORIEDAD DE LA ENTREGA RECEPCIÓN, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**20.-** A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, SOLICITÓ RETIRAR DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO, EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A DIVERSAS INICIATIVAS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, SUSCRITAS POR INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**21.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 175 Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 176 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL.

**22.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR EL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONJUNTAMENTE CON LAS DEMÁS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE LA SUSCRIBEN.

**23.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA DE DECRETO PLANTEADA POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE SE AUTORICE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), UN LOTE DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 10,000.00 M2., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAHUILA DE ZARAGOZA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS FINES QUE A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL CONVENGAN.

**24.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO PLANTEADA POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, CON EL FIN DE QUE SE AUTORICE LA ABROGACIÓN DEL DECRETO NÚMERO 212, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ DESINCORPORAR DEL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO, UN TERRENO DE SU PROPIEDAD CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 10,001.11 M2, QUE FORMA PARTE DE UN PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA ALAMEDA DE LA COLONIA SATÉLITE, EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA Y SE PROCEDIÓ A ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE.

**25.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA VALIDACIÓN DE UN ACUERDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO, PARA PERMUTAR DOS FRACCIONES DE TERRENO; LA PRIMERA CON UNA SUPERFICIE DE 194.36 M2., Y LA SEGUNDA CON UNA SUPERFICIE DE 202.57 M2., UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO “BUGAMBILIAS” DE ESA CIUDAD, A FAVOR DE LOS C.C. OSCAR ELIHUD GARIBAY DE HOYOS Y FEDERICO JAVIER REYES VILLARREAL CON OBJETO DE COMPENSAR A LOS PARTICULARES QUE FUERON AFECTADOS EN SUS PREDIOS, EN VIRTUD DE LAS OBRAS REALIZADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE AGUAS PLUVIALES, LOS CUALES FUERON DESINCORPORADOS CON DECRETO NÚMERO 96, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018.

**26.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIA Y ACTIVIDADES CÍVICAS, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DEL ACOSO ESCOLAR PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**27.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLII AL ARTÍCULO 6, SE ADICIONA UN NUEVO CONTENIDO A LA FRACCIÓN XXVI, RECORRIENDO EL ACTUAL A LA FRACCIÓN XXVII, QUE SE CREA, DEL ARTÍCULO 36; Y, SE ADICIONA TAMBIÉN UN NUEVO CONTENIDO A LA FRACCIÓN XIX, RECORRIENDO EL ACTUAL A LA FRACCIÓN XX, QUE SE CREA, DEL ARTÍCULO 55, DE LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; A FIN DE ESTABLECER LA CREACIÓN DE APLICACIONES DIGITALES QUE PERMITAN A LOS CIUDADANOS ACCEDER A LA INFORMACIÓN PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA LAS MUJERES; PLANTEADA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE, CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL “PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.

**28.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO EL DICTAMEN DE LA LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS, CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PLANTEADA CONJUNTAMENTE POR EL DIPUTADO EDGAR SÁNCHEZ GARZA, DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO”, Y EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE DENUNCIAN ACTOS DE NEPOTISMO, CONFLICTO DE INTERESES Y OTRAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.

**29.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL ACUERDODE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA POPULAR POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 7°, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR LA CIUDADANA ADA BERENICE CANO PADILLA.

**30.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL ACUERDODE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA POPULAR MEDIANTE LA CUAL SE PLANTEA LA ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA; SUSCRITA POR LOS C.C. ILIANA ELIZABETH VARGAS DEL ÁNGEL, JUAN MANUEL GONZÁLEZ ZAPATA, MANUEL HORACIO JIMÉNEZ HIDALGO Y ALBERTO GONZÁLEZ DELGADO.

**31.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA POPULAR MEDIANTE LA CUAL SE PLANTEA UNA REFORMA AL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR LOS C.C. GUADALUPE OLVERA PATENA Y FRANCISCO BOTELLO MEDELLÍN.

**32.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA POPULAR MEDIANTE LA CUAL SE PLANTEA UNA REFORMA A LA LEY PARA LA FAMILIA DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR EL C. AGUSTÍN JAVIER DURÓN PÉREZ.

**SE CONOCIÓ Y RESOLVIÓ SOBRE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO:**

**33.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR A LA COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, PUBLICACIONES Y LIBRERÍAS DEL ESTADO, COORDINEN ACCIONES CON LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DEL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES, EQUIPO Y ACERVO DE LAS PRINCIPALES BIBLIOTECAS, ADEMÁS DE IMPLEMENTAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS”, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA JOSEFINA GARZA BARRERA.

**34.-** EN VIRTUD, DE QUE POR MAYORÍA DE VOTOS NO SE CALIFICÓ COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN “INVITAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, A COMPARECER ANTE ESTE PLENO O ANTE LAS COMISIONES UNIDAS RELACIONADAS CON EL TEMA, PARA EL EFECTO DE QUE EXPONGA LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE LE SEA REQUERIDA EN RELACIÓN CON LAS PRESIONES FINANCIERAS QUE ESTÁ RESINTIENDO LA INSTITUCIÓN Y POR LAS CUALES HA SOLICITADO LA INTERVENCIÓN DE ESTA LEGISLATURA, A FIN DE DOTAR DE MÁS RECURSOS A LA CASA DE ESTUDIOS, EN PARTICULAR RESPECTO A LA REMUNERACIÓN DE PLAZAS LABORALES QUE HAN SIDO OBJETO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA, CONJUNTAMENTE CON LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL “PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”, Y FUE TURNADA PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO.

**35.-** POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APROBÓ “EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL DELEGADO DEL GOBIERNO FEDERAL EN COAHUILA, PARA QUE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PERMANEZCAN EN ACUÑA, COAHUILA Y NO SEAN TRASLADADAS A PIEDRAS NEGRAS Y ASÍ GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A LOS CIUDADANOS ACÚÑENSES”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRÍGIDO MORENO HERNÁNDEZ", DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA.

**36.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE ANALICE LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO ETIQUETADO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE ESTA IMPORTANTE CASA DE ESTUDIOS”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA, DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERRO”, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

**37.-** EN VIRTUD, DE QUE NO FUE PRESENTADA COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN “EXHORTAR A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, PARA QUE COORDINE LAS ACCIONES NECESARIAS CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, CON LA FINALIDAD DE ESCRIBIR EN EL PADRÓN ACTIVO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES, A AQUELLOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN RESIDIENDO DE MANERA PERMANENTE EN LOS ASILOS DE ANCIANOS, Y QUE SE LES GARANTICE LA RECEPCIÓN DE DICHO APOYO DE MANERA OPORTUNA”, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA, LA PRESIDENCIA LA TURNÓ PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

**38.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE DENTRO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020, SE MODIFIQUEN LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES DICTADAS CONTRA LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, CONJUNTAMENTE CON LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL “PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.

**39.-** EN VIRTUD, DE QUE NO FUE PRESENTADA COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN “EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y ESTATAL, A QUE EFECTÚEN LAS ACCIONES PERTINENTES PARA ABASTECER DE MEDICAMENTOS A LAS FARMACIAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A LAS SUBDELEGACIONES UBICADAS EN CIUDAD ACUÑA, MONCLOVA, PIEDRAS NEGRAS, SALTILLO, SABINAS Y TORREÓN; Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SOBRE TODO AQUELLOS FÁRMACOS QUE SE UTILIZAN PARA TRATAR ENFERMEDADES GRAVES COMO CÁNCER Y DIABETES, PADECIMIENTOS QUE SE HAN INCREMENTADO EN COAHUILA, ESPECIALMENTE EN LA REGIÓN LAGUNERA”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS, CONJUNTAMENTE CON LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL “PARTIDO ACCIÓN NACIONAL” Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA, PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES.

**40.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, PARA QUE ATIENDA LA GRAVE PROBLEMÁTICA QUE SE VIVE EN LAS OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 5, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, ANTE LA PLAGA DE ROEDORES QUE REPRESENTAN UN FOCO DE INFECCIÓN PARA LOS PACIENTES, SUS FAMILIARES, EL PERSONAL, LOS MEDICAMENTOS Y EL EQUIPO MÉDICO”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA**,** CONJUNTAMENTE CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

**AGENDA POLÍTICA:**

**41.-** SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, “EN RECONOCIMIENTO A QUIENES INTEGRAN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE COAHUILA, POR POSICIONAR A COAHUILA COMO UNO DE LOS ESTADOS CON MENOS PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN TERRITORIO NACIONAL”.

**42.-** A SOLICITUD DE LA DIPUTADA GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN, SOLCITO A LA PRESIDENCIA QUE SU PRONUNCIAMIENTOQUE PRESENTÓ CONJUNTAMENTE CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL “PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”, “SOBRE FEDERALISMO FISCAL Y MANIFESTACIÓN DE UN GRUPO DE ALCALDES QUE ASISTIERON A PALACIO NACIONAL BUSCANDO HABLAR CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”, SE INSCRIBIERA ÍNTEGRAMENTE EN EL DIARIO DE LOS DEBATES.

LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR DIÓ POR CONCLUIDA LA SESIÓN, SIENDO LAS 14:00 HORAS, CON 29 MINUTOS, DEL MISMO DÍA, CITANDO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS A SESIONAR A LA NOVENA SESIÓN, QUE SE CELEBRARÁ A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE.**

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE.**  **SECRETARIO** | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA.**  **SECRETARIO** |

**MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 10 HORAS, CON 18 MINUTOS, DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, DIO INICIO LA SESIÓN ESTANDO PRESENTES 23 DE 25 DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA, INFORMANDO LA PRESIDENCIA QUE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, DIO AVISO QUE NO ASISTIRÍA A LA SESIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA. PASADO LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DECLARÓ VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TRATARÍAN.

**1.-** SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDA.

**2.-** SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, CON RELACIÓN AL EXPEDIENTE FORMADO CON EL OFICIO ENVIADO POR EL INGENIERO MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOMETIÓ A LA APROBACIÓN DE ESTE CONGRESO, LA DESIGNACIÓN DE SEIS MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUA A CONTINUACIÓN DE MENCIONAN LOS C. LICENCIADOS CARLOS DE LARA MC GRATH, LUIS EFRÉN RÍOS VEGA, JOSÉ IGNACIO MÁYNEZ VARELA, MARÍA DEL CARMEN GALVÁN TELLO, MANUEL ALBERTO FLORES HERNÁNDEZ Y VLADIMIR KAICEROS BARRANCO.

**3.-** ACTO SEGUIDO, Y APROBADO LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA LLEVO A CABO LATOMA DE PROTESTA DE LOS SEIS MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA ANTES MENCIONADOS.

LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR DIÓ POR CONCLUIDA LA SESIÓN, SIENDO LAS 10:00 HORAS, CON 57 MINUTOS, DEL MISMO DÍA, CITANDO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS A SESIONAR A LA DECIMA SESIÓN, QUE SE CELEBRARÁ A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE.**

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES.**  **SECRETARIA** | **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA.**  **SECRETARIO** |

**INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

**RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO**

**6 DE NOVIEMBRE DE 2019**

**1.-** INFORMES DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019, DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES:

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA.

- PODER JUDICIAL.

- TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

- INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAS DE LA FUENTE.

- RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

- COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA.

- INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA.

- COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS.

- COMISIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MORELOS.

- SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS.

- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE.

- FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

-COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

- DIRECCIÓN DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS.

- INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN.

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA.

- INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO.

- AGUAS DE SALTILLO.

- PROMOTORA PARA EL DESARROLLO MINERO DE COAHUILA.

- INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACIÓN TERRITORIAL.

- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA.

- INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS.

- INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE COAHUILA.

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA.

- CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE COAHUILA.

- FIDEICOMISO DEL FONDO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN LAGUNA DE COAHUILA.

- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO.

- RADIO COAHUILA.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CANDELA.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SAN BUENAVENTURA.

- CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y EL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE COAHUILA.

- DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

- FONDO DE GARANTÍA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA DEL ESTADO DE COAHUILA.

- COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA.

- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD MÚZQUIZ.

- TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA.

- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS.

- INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA.

- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

- COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA.

- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO.

- SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS.

- SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

- HOSPITAL MUNICIPAL DE TORREÓN.

- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA-FRONTERA.

- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES.

- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TORREÓN.

- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREÓN.

- INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE TORREÓN.

- CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREÓN.

- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREÓN.

- SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREÓN.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS.

- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE TORREÓN.

- COMISIÓN COAHUILENSE DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO.

- DIRECCIÓN DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE GENERAL CEPEDA.

- PROMOTORA PARA EL DESARROLLO RURAL DE COAHUILA.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO.

- AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA.

- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO.

- PODER LEGISLATIVO.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS.

- SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MÚZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS Y SABINAS.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ARTEAGA.

- SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA.

- DIRECCIÓN DE PENSIONES DE MONCLOVA.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CASTAÑOS.

- COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA.

- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VIESCA.

- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO.

- INSTITUTO DE MÚSICA DE TORREÓN.

- SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA.

- INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA.

- PROMOTORA INMOBILIARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE COAHUILA.

- PROCURADURÍA PARA NIÑOS, NIÑAS Y LA FAMILIA.

- PODER EJECUTIVO.

- DIRECCIÓN DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CUATRO CIÉNEGAS.

- INSTITUTO MUNICIPAL DEL TRANSPORTE DE SALTILLO.

- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO.

- SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SALTILLO.

- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

- INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.

- INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE SALTILLO.

- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SALTILLO.

**SE TURNARON A LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

**2.-** INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019, DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

JIMÉNEZ, OCAMPO, NAVA, LAMADRID, CUATRO CIÉNEGAS, TORREÓN, ZARAGOZA, FRONTERA, VILLA UNIÓN, ARTEAGA, MORELOS, SACRAMENTO, SAN BUENAVENTURA, JUÁREZ, SABINAS, PROGRESO, MATAMOROS, PIEDRAS NEGRAS, ABASOLO, ALLENDE, MÚZQUIZ, GENERAL CEPEDA, SALTILLO, SIERRA MOJADA, CANDELA, RAMOS ARIZPE, VIESCA, MONCLOVA, ACUÑA, HIDALGO, ESCOBEDO, GUERRERO, CASTAÑOS, FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE SABINAS, SAN PEDRO, PARRAS Y NADADORES.

**SE TURNARON A LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

**3.-** OFICIO DE LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO”, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE LA INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA, DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO”, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, REGISTRADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DEL 26 DE JUNIO DE 2018 Y TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

**4.-** OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LA DESIGNACIÓN DEL MAGISTRADO MIGUEL FELIPE MERY AYUP COMO PRESIDENTE DE DICHO TRIBUNAL PARA EL PERÍODO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

**DE ENTERADO**

**5.-** OFICIO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BUENAVENTURA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EN SESIÓN DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 FUERON APROBADOS EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DICHO MUNICIPIO.

**DE ENTERADO**

**6.-** OFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE UN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 3,209.15 M2, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO RINCÓN LA MERCED, CON EL FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE COMODATO POR 30 AÑOS A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “DIMENSIÓN FAMILIAR”, A.C., PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTALACIONES.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**7.-** OFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE UN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 520.16 M2, IDENTIFICADO COMO CENTRO COMUNITARIO DEL FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN MORELOS, CON EL FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE COMODATO CON VIGENCIA HASTA EL AÑO 2030 A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA”.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**8.-** OFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE DICHO MUNICIPIO, PARA LA ENAJENACIÓN A TÍTULO ONEROSO Y GRATUITO DE DIVERSOS INMUEBLES, EN VIRTUD, DE QUE LOS DECRETOS AUTORIZADOS PARA ESTE FIN QUEDARON SIN VIGENCIA UN INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA, A FAVOR DE SUS ACTUALES POSEEDORES.

**SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**9.-** OFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE DICHO MUNICIPIO, PARA ENAJENAR A TÍTULO ONEROSO UN INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA SAN JOSÉ (SAN ÁNGEL TELEVISA II), A FAVOR DEL CIUDADANO SANTOS OVIEDO GUZMÁN.

**SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**10.-** OFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA UN ADENDUM QUE ADICIONA Y MODIFICA CONCEPTOS DE COBRO DE LOS ARTÍCULOS 17, 18, 19, 20, 24 Y 25, DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DE DICHO MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA.**

**11.-** OFICIO DE LA DOCTORA IRMA ARACELY BELTRAN GONZÁLEZ, PRIMERA SÍNDICA DE MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PARRAS, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2020 Y LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA.**

**12.-** OFICIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE JUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE ESTE CONGRESO ANTE QUIEN CORRESPONDA PARA QUE SE LE AUTORICE EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL EN LAS FINCAS DE RECREACIÓN EN EL ÁREA FEDERAL DE LA PRESA VENUSTIANO CARRANZA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA.**

**13.-** ESCRITO DEL LICENCIADO APOLINAR RODRÍGUEZ ROCHA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA A ESTE CONGRESO LA DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN INTEGRADA POR MIEMBROS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LA AUDITORÍA SUPERIOR DL ESTADO Y CIUDADANOS COAHUILENSES PARA QUE ESTÉN PRESENTES EN TODO EL PROCESO QUE SE LE SIGUE AL EX GOBERNADOR DE COAHUILA JORGE TORRES LÓPEZ EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DEL ESTADO DE TEXAS, ASÍ COMO, QUE RINDAN UN INFORME DIRECTAMENTE A ESTE CONGRESO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

**14.-** ESCRITO QUE PRESENTAN LOS CIUDADANOS ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, MA. DEL REFUGIO PICHARDO SOCKERT Y JUAN CARLOS SALAZAR GARCÍA, MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DEL MAGISTRADO DE LA SALA COLEGIADA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE DOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL, ASÍ COMO, DEL ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL**

**15.-** ESCRITO DEL CIUDADANO TOMAS RODRÍGUEZ RUIZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE LE APOYE JURÍDICAMENTE POR EL DESPIDO DEL CARGO DE VELADOR EN EL AYUNTAMIENTO DE NAVA, COAHUILA.

**TÚRNESE AL COMITÉ DE GESTORÍA Y QUEJAS**

**16.-** ESCRITO DE LA SÍNDICO DE MAYORÍA, SÍNDICO DE PRIMERA MINORÍA, SEXTA REGIDORA Y SEGUNDO REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE VIESCA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA INTERVENCIÓN DE ESTE CONGRESO, PARA QUE LA INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑAN SE PROPONGA COMO PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE SE REVISE Y AUDITE A LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE DICHO MUNICIPIO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

**17.-** INICIATIVA POPULAR PRESENTADA POR EL CIUDADANO INGENIERO ERICK RODRIGO VALDEZ RANGEL, MEDIANTE LA CUAL PLANTEA UNA REFORMA A LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON EL TRÁMITE DE DICHA INICIATIVA, CONFORME A LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**18.-** INICIATIVA POPULAR PRESENTADA POR EL CIUDADANO INGENIERO ERICK RODRIGO VALDEZ RANGEL, MEDIANTE LA CUAL PLANTEA UNA REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON EL TRÁMITE DE DICHA INICIATIVA, CONFORME A LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**19.-** INICIATIVA POPULAR PRESENTADA POR EL CIUDADANO INGENIERO ERICK RODRIGO VALDEZ RANGEL, MEDIANTE LA CUAL PLANTEA UNA REFORMA AL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON EL TRÁMITE DE DICHA INICIATIVA, CONFORME A LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**20.-** ESCRITO QUE SUSCRIBE MAURO RAYMUNDO MARTÍNEZ PACHECO, MEDIANTE EL CUAL HACE COMENTARIOS RESPECTO A ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS EN SU PERJUICIO Y DE SU ESPOSA POR UN EX FUNCIONARIO PÚBLICO ESTATAL.

**TÚRNESE AL COMITÉ DE GESTORÍA Y QUEJAS**

**INFORME SOBRE EL TRÁMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADAS EN LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DEL CONGRESO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019.**

Sobre el trámite realizado respecto a las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron en la sesión celebrada el 30 de octubre de 2019, el Pleno del Congreso informa lo siguiente:

**1.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado, el Punto de Acuerdo planteado por las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Josefina Garza Barrera, “Con el objeto de exhortar a la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado, coordinen acciones con los principales Municipios del Estado, con la finalidad de supervisar la conservación de las instalaciones, equipo y acervo de las principales bibliotecas, además de implementar campañas permanentes de difusión de los servicios que ofrecen las bibliotecas públicas”, para los efectos procedentes.

**2.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Presupuesto, el Punto de Acuerdo planteado por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, “Mediante el cual se solicita a esta H. Asamblea Legislativa, invite al Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, a comparecer ante este Pleno o ante las Comisiones Unidas relacionadas con el tema, para el efecto de que exponga la información adicional que le sea requerida en relación con las presiones financieras que está resintiendo la institución y por las cuales ha solicitado la intervención de esta Legislatura, a fin de dotar de más recursos a la Casa de Estudios, en particular respecto a la remuneración de plazas laborales que han sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado”, para los efectos procedentes.

**3.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se enviaron respetuosamente a la Fiscalía General de la República y al Delegado del Gobierno Federal en Coahuila, el Punto de Acuerdo planteado por el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández", del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por medio del cual se exhorta a la Fiscalía General de la República y al Delegado del Gobierno Federal en Coahuila, para que las oficinas del Ministerio Público Federal permanezcan en Acuña, Coahuila y no sean trasladadas a Piedras Negras y así garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos Acúñenses”, para los efectos procedentes.

**4.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se enviaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Secretaría de Finanzas del Estado, el Punto de Acuerdo planteado por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerro”, del Partido de la Revolución Democrática, “A través de la que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Congreso de la Unión a que analice la posibilidad de incrementar el presupuesto etiquetado para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro con el fin de garantizar la operatividad de esta importante casa de estudios”, para los efectos procedentes.

**5.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, el Punto de Acuerdo planteado por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María Esperanza Chapa García, **“**Con objeto de enviar un atento exhorto a la Secretaría del Bienestar, para que coordine las acciones necesarias con las Dependencias Estatales de Atención al Adulto Mayor, con la finalidad de escribir en el padrón activo de beneficiarios del programa pensión para adultos mayores, a aquellos adultos mayores que se encuentran residiendo de manera permanente en los asilos de ancianos, y que se les garantice la recepción de dicho apoyo de manera oportuna”, para los efectos procedentes.

**6.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Punto de Acuerdo planteado por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, “Con objeto de que esta Legislatura, exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, se modifiquen las restricciones presupuestales dictadas contra las Presidencias Municipales”, para los efectos procedentes.

**7.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Secretaría de Salud Estatal y Federal, el Punto de Acuerdo planteado por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, “Por la que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y Estatal, a que efectúen las acciones pertinentes para abastecer de medicamentos a las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social, a las Subdelegaciones Ubicadas en Ciudad Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo, Sabinas y Torreón; y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre todo aquellos fármacos que se utilizan para tratar enfermedades graves como cáncer y diabetes, padecimientos que se han incrementado en Coahuila, especialmente en la Región Lagunera”, para los efectos procedentes.

**8.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Secretaría de Salud Estatal, el Punto de Acuerdo planteado por la Diputada Rosa Nilda González Noriega**,** conjuntamente con las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a la Secretaría de Salud del Estado, para que atienda la grave problemática que se vive en las oficinas de la jurisdicción sanitaria número 5, ubicada en el Municipio de Cuatro Ciénegas, ante la plaga de roedores que representan un foco de infección para los pacientes, sus familiares, el personal, los medicamentos y el equipo médico”, para los efectos procedentes.

**A T E N T A M E N T E.**

**SALTILLO, COAHUILA, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

**EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA**

**JAIME BUENO ZERTUCHE.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PRESENTE.-**

**JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA, en mi carácter de diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, conjuntamente con los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 59, fracción I, 65 y 67 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y en ejercicio del derecho al que hacen referencia los artículos 21, fracción IV, 152, fracción I, y 159 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 146, 148 y 153 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El artículo 3°, en su fracción I, de la Constitución Política de Coahuila, dispone que la “Soberanía del Estado se ejerce por el Gobierno Estatal a través de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en el ámbito de sus respectivas competencias”.

Lo anterior significa que nuestro estado ha adoptado la clásica división tripartita del Poder Público, en armonía con lo que sobre el punto instituye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 116 establece que “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

El mismo artículo 116 constitucional ordena que los gobernadores, titulares del Poder Ejecutivo local, emanarán de elecciones populares (fracción I) y que las legislaturas estatales “se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes” (fracción II). En otras palabras, quienes conforman los Poderes Ejecutivo y Legislativo tienen su origen en la voluntad popular expresada a través del voto público.

Pero sobre el punto la Constitución General de la República nada expresamente señala por cuanto hace a la integración por la vía electoral del otro de los Poderes, es decir, del Judicial en los estados.

Aunque la Ley Fundamental de la federación sí ordena que “Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica” (Artículo 116, fracción II, cuarto párrafo).

En consonancia con lo establecido por la Constitución General de la República, la local de Coahuila en su artículo 27 dispone que “la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como de los ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”. Pero no hace referencia a que esta misma vía sea aplicable al Poder Judicial.

El procedimiento previsto por el marco constitucional para hacer los nombramientos de quienes conforman este Poder, en particular su órgano de mayor jerarquía, el Tribunal Superior de Justicia, no es precisamente el del voto público sino un procedimiento relativamente complejo, con la participación de los tres Poderes.

Cabe señalar, sin embargo, que en algunas etapas de la historia de Coahuila los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sí fueron designados por elección popular.

Así, en la Constitución Política del Estado de Nuevo León-Coahuila, de 1857, su artículo 94 disponía que “los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán nombrados popularmente”; y la Constitución Política de Coahuila aprobada después de la Intervención, en 1869, disponía, también en el artículo 94, que:

“la elección de los ministros (magistrados del Tribunal Superior de Justicia) será popular directa en primer grado; tendrá lugar el mismo día en que se verifique la de gobernador, los electos serán declarados juntamente con éste por el Congreso, y durarán en su respectivo encargo cuatro años”.

Por su parte, la Constitución vigente, en su versión original al ser promulgada en 1918, establecía un procedimiento diferente al ahora aplicable. El texto inicial del artículo 136 decía:

“**Artículo 136.** El Supremo Tribunal de Justicia se compondrá de tres magistrados y seis supernumerarios, electos cada cuatro años, por el Congreso del Estado, a propuesta de los Ayuntamientos”.

A partir de 1984, previa reforma a la Constitución local, ya no son los ayuntamientos los que proponen a los candidatos a magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Ahora esta fase corre a cargo del Consejo de la Judicatura, órgano que forma parte del Poder Judicial según lo dispone el artículo 135 de la Constitución local.

El Consejo de la Judicatura turna una lista de candidatos al gobernador, quien de entre los propuestos nombra al magistrado que ocupará la vacante. El nombramiento del Ejecutivo se perfecciona al aprobarlo, por mayoría simple, el Congreso del Estado.

En la integración del órgano de mayor jerarquía del Poder Judicial del estado intervienen pues, sucesivamente, los tres Poderes: El Judicial para proponer, el Ejecutivo para nombrar y el Legislativo para aprobar. El diseño parece interesante. El problema está en que su desarrollo se caracteriza, entre otros aspectos negativos, por los siguientes: es opaco, excluyente, sumario, subrepticio (casi clandestino), proclive a la simulación, saturado de lagunas jurídicas y falto de reglas claras y precisas.

El proceso se inicia, al presentarse una vacante, con la formulación y envío de una lista de candidatos que el Consejo de la Judicatura remite al gobernador del estado, según dispone el artículo 146 de la Constitución Política de Coahuila. Pero no se indica cuándo ni en qué tiempo ha de formularse esa lista (por ejemplo para los nombramientos más recientes se esperó a que en varios meses se acumularan seis vacantes), cómo se reciben las propuestas para seleccionar a los que habrán de ser incluidos en la misma y con cuántos nombres se ha de formar dicha lista, entre otros aspectos importantes que la Constitución local no previene y tampoco encuentran respuesta en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado ni en el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura.

Por cuanto hace a la participación del Congreso, que consiste en la aprobación de los nombramientos hechos por el gobernador, se hace notar que la Legislatura absurdamente dispone de un término perentorio para resolver, pues comprende escasamente cinco días naturales y en caso contrario –como si se tratara de un castigo- aplica la afirmativa ficta; no indica que la aprobación sea por cada nombramiento, aunque es obvio que así debe entenderse, sino que arbitrariamente cuando se trata de más de un nombramiento su aprobación se somete en paquete a la aprobación de los diputados; absurdamente el ejercicio de esta facultad tan importante se deja en los recesos legislativos al órgano de recambio denominado Diputación Permanente; amén de que la aprobación se decide por mayoría simple de los diputados presentes, cuando que debe ser, como sucede en el caso de los ministros de la Suprema Corte por el Senado y en una gran mayoría de los Congresos locales (en 21 de 32) los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia requieren la aprobación de la mayoría calificada, es decir, del voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes al votarse cada nombramiento.

Se propone también reformar el artículo 158 de la Constitución local, para hacer su contenido congruente con la proclamada austeridad republicana que se trata de implantar y evitar situaciones de inadmisible privilegio sólo para una parte de los servidores públicos.

Por lo expuesto, se propone a esta honorable asamblea y al Constituyente Permanente local la aprobación de la presente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**PRIMERO.** Se reforma el primer párrafo del artículo 146 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo contenido quedará en dos párrafos; el segundo párrafo pasará a ser tercero, y se reforman asimismo los últimos tres párrafos de este numeral, para quedar como sigue:

**Artículo 146.** **Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán hechos por el Gobernador del Estado, de entre la terna de candidatos que por cada vacante definitiva le presentará el Consejo de la Judicatura. Las ternas las integrará éste de entre las proposiciones que reciba de instituciones académicas de alto nivel y de asociaciones de juristas de reconocido prestigio, las que sujetará a riguroso análisis y escrutinio.**

**Cada nombramiento será sometido a la aprobación del Congreso por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, previa comparecencia del magistrado nombrado. El otorgamiento o negación de la aprobación por el Congreso deberá ocurrir a más tardar tres semanas después de recibida la notificación del Gobernador del Estado. En caso de no emitirse resolución en el término señalado, se tendrá por no aprobado el nombramiento.**

**……..**

**La terna de candidatos podrá ser rechazada por el Ejecutivo una sola vez, en cuyo caso el Consejo de la Judicatura someterá a su consideración otra diferente para que formule nombramiento.**

**Cuando el Congreso no resuelva dentro del término señalado o no apruebe el nombramiento, el Consejo de la Judicatura hará llegar otra terna al Gobernador del Estado para que haga nuevo nombramiento. Éste se regirá por los mismos tiempos del primero.**

**En el caso de que el Congreso tampoco apruebe el nuevo nombramiento, el Gobernador del Estado hará la designación definitiva de entre las seis propuestas que hubiere recibido del Consejo de la Judicatura.**

**SEGUNDO.** Se reforman los artículos 148 y el segundo párrafo del artículo 153, para quedar como sigue:

**Artículo 148.** **Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al iniciar el ejercicio de su cargo, rendirán la protesta de ley ante el Congreso del Estado.**

**Artículo 153. ……**

**En los casos de pensión, jubilación, retiro obligatorio o incapacidad declarada, dicha remuneración les será cubierta en los términos que establezcan las leyes.**

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Se deroga todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Saltillo, Coahuila, a 06 de noviembre de 2019.

**ATENTAMENTE**

*“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA*

*Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”*

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS | DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN |
| DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DE LA FRACCION PARLAMENTARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, RELATIVAS A LAS FACULTADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.**

Honorable Asamblea Legislativa:

Con fundamento en el artículo 196, fracción I, de la Constitución Política del Estado, la suscrita, DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), respetuosamente comparezco para presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado relativas a las facultades del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Sustento mi Iniciativa al tenor de la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Actualmente la fracción XIX del artículo 82 establece que es facultad del Gobernador (y cito) “Organizar y disciplinar la Guardia Nacional y demás fuerzas del Estado y ejercer, respecto de unas y otras, las atribuciones que determinen las leyes y reglamentos respectivos.”

Con la reforma a la Constitución Federal que permitió la creación de la Guardia Nacional, la disposición anterior ya no tiene aplicación, por lo que se propone derogarla.

Ahora bien, la fracción XXIX del mismo artículo establece (y cito) “Emitir lineamientos y normatividad aplicable a la contabilidad gubernamental.”

Esta disposición debe ser reformada pues con la expedición de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos y la normatividad aplicable en materia de contabilidad gubernamental ya no es una facultad discrecional del Titular del Poder Ejecutivo, sino que debe sujetarse a lo que disponen estas leyes.

Así las cosas, se propone reformar esa fracción para señalar que esa facultad se ejercerá en los términos que dispongan las leyes federales y locales en la materia.

Por otro lado, se propone reformar las fracciones I y X del artículo 84, relativas a los deberes del Gobernador con el objeto de actualizar la terminología vigente. En el primer caso, la fracción I dispone: “Llevar las relaciones entre el Estado y los Gobiernos General y de los Estados.” Se propone sustituir el término “General” por el de “Federal”, pues un Gobierno General es más propio de un sistema centralista que de una República Federal.

En el segundo caso, relativo a la fracción X, se propone sustituir la porción normativa que dice “haciendo respetar las garantías individuales,” para sustituirla por “garantizando el respeto de los derechos humanos.”

Finalmente, se propone derogar las fracciones VII y XXV del artículo 82 pues, en nuestra opinión, estas disposiciones que tienen cien años ya no resultan aplicables. En el primer caso, la fracción VII establece, como facultades del Gobernador “nombrar, cuando lo crea conveniente, personas de su confianza para que informen si en los pueblos del Estado se observan la Constitución y las leyes.”

La anterior disposición tenía sentido cuando las vías de comunicación eran escasas y los medios de comunicación eran rudimentarios, pero eso ha sido superado, por lo que no existe ninguna razón ni fundamento para que el Ejecutivo, de manera discrecional y utilizando “personas de su confianza· pueda expedir tales nombramientos.

En el segundo caso, relativo a la fracción XXV, se establece como facultad del Gobernador (y cito) “Ejercer la superior inspección en todos los ramos de la Administración Pública y de la Beneficencia Privada.” Por principio de cuentas, el titular del Poder Ejecutivo es responsable de todos los ramos de la Administración Pública Estatal, como lo señalan diversas normas de rango constitucional, por lo que resulta innecesario reiterarlo. Por otro lado, la referencia a la Beneficencia Privada resulta obsoleta.

Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta honorable asamblea, a efecto de que se le dé el trámite que corresponda, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO:** Se reforman los artículos 82, fracción XXIX y 84, fracciones I y X, y se derogan las fracciones VII, XIX y XXV del artículo 82, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 82.** - - - - - -

**I** a la **VI** - - - - - -

**VII. Derogada**

**VIII** a la **XVIII.** - - - - - -

**XIX. Derogada**

**XX** a la **XXIV.** - - - - - -

**XXV. Derogada**

**XXVI** a la **XXVIII.** - - - - - -

**XXIX.** Emitir lineamientos y normatividad aplicable a la contabilidad gubernamental **en los términos que dispongan las leyes federales y locales en la materia.**

**XXX.** - - - - - - -

**Artículo 84.** - - - - - -

**I.** Llevar las relaciones entre el Estado y los Gobiernos **Federal** y de los Estados.

**II** a la **IX** - - - - - -

**X.** Proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos, y al efecto, mantener el orden, paz y tranquilidad pública en todo el Estado, **garantizando el respeto de los derechos humanos.**

**XI** a la **XX** - - - - - -

**TRANSITORIOS**

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y

**Segundo.** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 6 de noviembre de 2019.

**DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ**

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO “ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2ºA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON EL OBJETO DE INCLUIR EN LOS ACTOS O ACTIVIDADES EN LOS QUE EL IVA SE CALCULA APLICANDO LA TASA DEL 0%, DENTRO DE SUPUESTOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, AL AGUA DESTINADA PARA EL USO DE RIEGO AGRÍCOLA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.**

La suscrita Diputada Graciela Fernández Almaraz, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Andrés S. Viesca” del Partido de Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta Soberanía la siguiente Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h) de la fracción II del artículo 2ºA de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de incluir en los actos o actividades en los que el IVA se calcula aplicando la tasa del 0%, dentro de supuestos de la prestación de servicios independientes, al agua destinada para el uso de riego agrícola; conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Como todos sabemos, el Impuesto al Valor Agregado mejor conocido como IVA, es una carga fiscal indirecta que se aplica al costo final de diversos bienes y servicios, cuya obligación de pago es, en principio, de forma igualitaria para todos los mexicanos con algunas excepciones dependiendo de la región donde vivamos o bien el tipo de producto o servicio que se adquiera y utilice.

El Impuesto al Valor Agregado, fue implementado por primera vez en México en 1980, bajo el gobierno del entonces presidente José López Portillo[[1]](#footnote-1), sustituyendo al impuesto general sobre ingresos mercantiles que desde 1947 se aplicaba a la compraventa de bienes, así como los impuestos estatales sobre giros comerciales y patentes. El efectuar un impuesto único al costo de los bienes y servicios, contribuyó de manera importante a modernizar el sistema fiscal mexicano, permitiendo una mayor y mejor recaudación de impuestos. [[2]](#footnote-2)

Hoy, a casi cuarenta años de su creación, el IVA sigue siendo una de las principales fuentes de recaudación fiscal en México y uno de los pilares sobre el cual descansa el sistema financiero mexicano. No obstante, los tiempos cambian y las necesidades económicas de las y los ciudadanos lo hacen también, sobre todo en aquellos que se encuentran en una situación de desventaja social como lo es el caso de las y los campesinos.

En la actualidad el sector agrícola de nuestro país y con ello nuestra soberanía alimentaria atraviesa por un período complejo debido a la disminución del campesinado mexicano, pues mientras que en 1957, más del 50% de la población se dedicaba a actividades agrícolas, en el 2010 se estimaba que era menos del 23%, de acuerdo a datos del INEGI y sigue en decremento esa cifra.

Esto ha afectado de manera directa la producción agrícola nacional, al grado de que más del 70% de las unidades de producción rural actualmente es atendido por pequeños productores, o por campesinos que poseen superficies de apenas cinco hectáreas o menos, esto sin contar que gran parte de su producción lo utilizan a satisfacer sus necesidades básicas de consumo.

Desafortunadamente se tienen cifras de que un 6% de los productores agrícolas son empresarios que consiguen introducir su producción en el mercado nacional e internacional; lo que obviamente no favorece a las necesidades de consumo que tiene el país, tanto de productos alimentarios como de insumos o materias primas provenientes de la agroindustria.

Además, las diferencias tecnológicas, económicas y de estímulos fiscales que los agricultores mexicanos tienen frente a sus pares extranjeros, en especial los de los Estados Unidos de América, hacen muy difíciles las condiciones de competencia con los productos que vienen desde el exterior, provocando aún más que miles de campesinos abandonen su actividad económica para buscar una mejor vida en las ciudades nacionales o incluso en el extranjero.

Lo anterior, nos obliga a buscar medidas idóneas para fortalecer nuestra producción agrícola y establecer mejores condiciones para las y los campesinos a través de políticas públicas que protejan e impulsen de manera efectiva el campo mexicano y nuestra soberanía alimentaria.

De ahí que la propuesta que hoy traemos a su consideración busque equilibrar las condiciones para el sector campesino del país, a través de una reducción a tasa del 0% del impuesto al valor agregado para suministro de agua para riego, equiparándolo a la tasa que ya se tiene para el suministro de agua para uso doméstico.

Cabe mencionar que la reducción del IVA como política legislativa para incentivar el crecimiento y el desarrollo económico ya se ha utilizado con anterioridad por la actual administración, como lo ha sido la reducción del IVA al 8% en la franja fronteriza, y recientemente el Senado de la República ha aprobado reducirlo también en los estados del Pacífico Sur (Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas) como incentivo para impulsar la economía.[[3]](#footnote-3)

Desde esa perspectiva, creemos conveniente realizar una medida legislativa similar a las antes mencionadas para permitir que el sector agrícola continúe desarrollándose de forma positiva evitando cualquier acción que pueda poner en riesgo el crecimiento de un sector tan importante en nuestro país como lo es la producción agropecuaria.

Por estas razones con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma el inciso h de la fracción II del artículo 2º A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

**Artículo 2o.-A.-** …:

I.- …:

II.- …:

a).- al g).- …

**h*).-*** *Los de suministro de agua para uso doméstico* ***y para riego agrícola.***

III.- a la IV.- …

...

**T R A N S I T O R I O S.**

**ÚNICO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos respetuosamente ante esta Soberanía que la presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto, en virtud de que trata una materia de carácter federal, sea analizada con el propósito de que, previo dictamen, sean presentadas a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos legales conducentes.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, noviembre de 2019.**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL INCISO H) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2ºA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON EL OBJETO DE INCLUIR EN LOS ACTOS O ACTIVIDADES EN LOS QUE EL IVA SE CALCULA APLICANDO LA TASA DEL 0%, DENTRO DE SUPUESTOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, AL AGUA DESTINADA PARA EL USO DE RIEGO AGRÍCOLA.

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 313 DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A CARGO DEL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.**

El que suscribe, **Marcelo de Jesús Torres Cofiño,** Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**,** en ejercicio de la facultad legislativa que concede el artículo 59 fracción I, 65 y 67 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, someto a consideración del pleno de ésta Honorable Representación iniciativa con proyecto de decreto por virtud de la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 313 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La protección de la salud y la vida de los ciudadanos es una de las tareas fundamentales del Estado, así está consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo 1° de la Ley de Salud del Estado de Coahuila. Es, por tanto, obligación del Estado, el vigilar que la atención médica sea llevada a cabo por profesionales debidamente acreditados en el área respectiva.

Sin embargo, hemos visto cómo muchas veces los medios de comunicación y las redes sociales, dan cuenta sobre la detención de personas que practican la medicina sin titulación médica, en clínicas clandestinas que se encuentran en condiciones sanitarias deplorables, contando tan sólo con un diploma de naturista.

Estas conductas intrusas en la actividad médica, las definía el jurista Alberto Crespi como “*El ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello”.* Se trata pues, de un fenómeno que tiene una repercusión social importante y que, en virtud de la falta de reglamentación, es tierra fértil para que se presenten los casos de prácticas intrusas en la actividad médica en general, que el mismo Crespi la definía como *“aquella actividad que se orienta de forma directa a eliminar o paliar una patología del cuerpo o de la mente de una persona,*

*o bien a mejorar el aspecto externo de la misma (intervenciones estéticas, cosméticas y de cirugía plástica reconstructiva) mediante procedimientos que, realizados conforme al conocimiento y estado de la ciencia y de la praxis médica, influyen de forma relevante en la integridad del cuerpo humano o en el decurso de su proceso biológico”.*

Nuestra legislación, particularmente la Ley General de Salud vigente, así como la Ley de Salud del Estado de Coahuila son claros al señalar los requisitos para ser considerado médico. Estos criterios y requisitos se pueden resumir de la siguiente manera:

1.Que la emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas.

2. Que, para llevar a cabo procedimientos médico-quirúrgicos de especialidad, se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas.

3. Que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) fue creado como organismo auxiliar de la Administración Pública Federal para supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y -en su caso- recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la medicina.

4. Que solo los Consejos de Especialidades Médicas reconocidos por el CONACEM pueden expedir certificados de su respectiva especialidad.

Lo que se pretende con esta iniciativa es evitar lo que hoy en día, gracias a los vacíos legales, ha dado pie a la proliferación de médicos que, con un mínimo de preparación, efectúan procedimientos para los que no están capacitados, poniendo a nuestra población en grave riesgo.

Con esta adición al Código Penal, buscamos castigar a aquellos que ejercen profesiones relacionadas con la salud individual, por el peligro que la impericia podría originar para la salud de los particulares. Se trata de proteger un bien jurídico fundamental como lo es, el de la salud personal. Todo en aras de salvaguardar la vida y la salud de la ciudadanía, garantizando una atención médica con la mayor calidad posible.

En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ÚNICO. -** Se **adiciona un segundo párrafo** al **artículo 313** del Código Penal de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:

**Artículo 313 (Usurpación de profesión)**

…

Se aumentará en un tanto el mínimo y el máximo de las penas previstas en el párrafo anterior, para quien realice actos propios de la profesión médica, sin tener el título que la ley exige para ejercerla, así como para el médico que practique un procedimiento médico quirúrgico de especialidad, y no cuente con los requisitos establecidos en la Ley General de Salud.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**ATENTAMENTE,**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**DIP. MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO**

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO TODAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES DEL GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ" DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA DE COAHUILA, EN MATERIA DE CIUDADES AMIGABLES CON ADULTOS MAYORES.**

**CON SU VENIA DIPUTADO PRESIDENTE.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 fracción I; 65 y 67 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, 162, 163y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona la fracción VIII al artículo 142 y, se adiciona un segundo párrafo al artículo 143, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; se modifica el contenido del artículo 3, se adiciona fracción V, recorriendo las subsecuentes al artículo 5 y, se adiciona fracción XVII, recorriendo la subsecuente al artículo 43 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza; y, se modifica el contenido de los artículos 5 fracción XXII; 32 segundo párrafo, 81 fracción X, 163 fracción II, 174, 192 fracción V inciso e), 193 fracción V inciso e), 194 fracción V inciso d), 195 fracción V inciso d), 196 fracción V inciso d), 197 fracción V inciso e), 198 fracción V inciso e) y, 285 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza,lo anterior conforme a lo siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El envejecimiento y la urbanización de la población son dos tendencias globales que, juntas, constituyen fuerzas importantes que caracterizan el siglo XXI. A medida que las ciudades crecen, su proporción de residentes de 60 años de edad y más va en aumento. Las personas mayores son un recurso para sus familias, comunidades y economías en entornos de vida sustentadores y facilitadores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el envejecimiento activo constituye un proceso que dura toda la vida y es afectado por varios factores que, por sí solos y en conjunto, favorecen la salud, la participación y la seguridad en la vida de los adultos mayores. Basada en este enfoque de la OMS hacia el envejecimiento activo, genera una guía para lograr que las ciudades se comprometan a ser más amigables con la edad, con el fin de aprovechar el potencial que representan las personas de edad para la humanidad.

Una ciudad amigable con los adultos mayores alienta el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen y fortalecen el respeto y la promoción de sus derechos.

En términos prácticos, una ciudad amigable con la edad adapta sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades.

El mundo está envejeciendo rápidamente, para el año 2050 el número de personas de 60 años de edad y más como proporción de la población global se habrá duplicado, de 11% en el 2006 a 22%. Para entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, habrá más personas mayores que niños (de 0–14 años de edad) en la población. Los países en desarrollo están envejeciendo a un ritmo mucho mayor que los países desarrollados, dentro de cinco décadas, poco más del 80% de las personas mayores del mundo vivirán en países en desarrollo, frente a 60% en el 2005.[[4]](#footnote-4)

IMSERSO es un organismo afiliado a la OMS, que coordina la Red de Ciudades y Comunidades amigables con las Personas Mayores. En la actualidad tiene 705 ciudades afiliadas en el mundo tales como La plata, Argentina, Río de Janeiro, Brasil, San José, Costa Rica, Londres, Suiza, solo por mencionar algunas. España es el país con más ciudades adheridas al proyecto, 156, en tanto que México tiene sólo una, que es Guadalajara.

De acuerdo al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) de las 112 millones 336 mil 528 personas que conforman el total de la Población en México, 10 millones 055 mil 379 personas tienen 60 años y más, y las Entidades con mayor proporción de personas adultas mayores son la Ciudad de México con el 11.3%, Oaxaca 10.7% y Veracruz con 10.4%.

Asimismo, los Estados con menor proporción de personas adultas mayores son Baja California con 6.8%, Baja California Sur con 6.6% y Quintana Roo con 4.8%.

Ahora bien, el INAPAM señala que la esperanza de vida a partir de los 60 años es de 22.9 años para las mujeres y de 20.9 años para los hombres, es decir, se prevé que las mujeres alcancen la edad de 83 años y los hombres de 81 años.

En proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), éste señala que la población de México completará la última fase de la transición demográfica encaminándose a un crecimiento más reducido y a un perfil envejecido.

En ese sentido estima que:

* La edad media pasará de 29 años en 2010 a 31 en 2020 y a 38 en 2050.
* La población menor de 15 años disminuirá de 33.9 millones de personas en 2010 a 32.7 millones en 2020 y a 28.9 millones en 2050.
* El grupo de adultos mayores (65 años y más), por su parte, aumentará su tamaño de 7.1 millones en 2010 a 9.8 millones en 2020 y a 23.1 millones en 2050.[[5]](#footnote-5)

Como todos sabemos el crecimiento urbano está asociado al desarrollo tecnológico y económico de un país, pero también a su enfoque de desarrollo social y por tanto a la atención de las personas.

Las ciudades, municipios y entidades de un país deben tener como prioridad en su planeación y desarrollo el mejoramiento de las condiciones de vida toda la población con un enfoque incluyente, ya que las ciudades son el centro de la actividad cultural, social y política.

Por tal razón las ciudades deben proveer estructuras y servicios que sostengan el bienestar y la productividad de sus residentes y particularmente de las personas mayores, que requieren de entornos de vida facilitadores y de apoyo para compensar los cambios físicos y sociales asociados al envejecimiento.

Una sociedad que no atiende a los abuelos y ancianos es una sociedad que no respeta los Derechos aquellos que forjaron su origen, y para evitar este descuido falta de sensibilidad, injusticia social y humana debemos seguir fortaleciendo mecanismos legales y operativos para lograr que las ciudades sean más amigables con los adultos mayores, como una respuesta necesaria y lógica para promover el bienestar y el aporte de los residentes urbanos de mayor edad.

Ahora bien, como lo marca la Ley de los derechos de adultos mayores, estos son, hombres y mujeres de 60 años o más, mientras que una persona con discapacidad es aquella que padece deficiencias, limitaciones a la actividad y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales), pero ésta se puede presentar en cualquier edad. Es importante diferenciar ambas definiciones para efectos de esta propuesta.

Recordemos lo dispuesto por nuestra Constitución Política Mexicana en su artículo Primero, que establece que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, **edad**, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros, para el ejercicio pleno de sus derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Aunado a ello recordemos también cada uno de los compromisos internacionales que México ha suscrito a favor de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores que se encuentran también en el rango constitucional.

Con todos estos antecedentes y la convicción plena de fortalecer los derechoso de los adultos mayores, el objetivo de esta iniciativa es generar las condiciones para el desarrollo de una vida digna y de calidad para nuestros adultos mayores, así como para promover entre los ciudadanos una cultura de responsabilidad y respeto a los derechos de los demás, propiciando un desarrollo urbano adecuado para respeto de nuestras normas cívicas y de convivencia.

Es en virtud de lo anteriormente fundado, es que sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su revisión, análisis y en su caso aprobación la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**PRIMERO. –** Se adiciona la fracción VIII al artículo 142 del Código Municipal del Estado de Coahuila De Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 142.-**

…

***VIII. Crear ciudades amigables para adultos mayores con la finalidad de generar condiciones para un envejecer activo, que promueva la movilidad segura, participación ciudadana e integración social.***

**SEGUNDO. -** Se adiciona segundo párrafo al artículo 143 del Código Municipal del Estado de Coahuila De Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 143.-**

…

***Previo diagnóstico que permita identificar las necesidades por cubrir de acuerdo al tipo de población con que cuenta en su territorio, deberá en todo momento considerar el establecimiento de políticas públicas que apoyen el transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión social, participación cívica y empleo, comunicación e información, servicios comunitarios y de salud, espacios al aire libre y edificios, para adultos mayores.***

**TERCERO.-** Se modifica el contenido del artículo 3, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

**Artículo 3.-**  Las dependencias y entidades encargadas de la aplicación, seguimiento y vigilancia de ésta Ley, en los términos de las disposiciones conducentes, organizarán, operarán, supervisarán y evaluarán la prestación de los servicios básicos de asistencia que se proporcionen a las personas adultas mayores, así como, en los términos previstos por esta Ley, aquellos que realicen las personas físicas o morales de los sectores social y privado, para lo cual deberán, en su caso, desarrollar programas de apoyo financiero y social***, adaptar la infraestructura urbana de los municipios que componen el Estado de Coahuila,*** así como fomentar la participación de la sociedad en acciones a favor de las personas adultas mayores.

**CUARTO.-** Se adiciona la fracción V, recorriendo las subsecuentes al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

**Artículo 5.-**

…

***V. Ciudades Amigables para adultos mayores: aquellas que alientan el envejecimiento activo mediante optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas mientras envejecen, proporcionando la infraestructura y servicios necesarios para la población de 60 años o más.***

**QUINTO.-** Se adiciona la fracción XVII, recorriendo la subsecuente al artículo 43 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

**Artículo 43.-**

…

***XVII. Promover que cada uno de los municipios del Estado de Coahuila se conviertan en ciudades amigables para adultos mayores y se establezcan los mecanismos de políticas públicas que apoyen el transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión social, participación cívica y empleo, comunicación e información, servicios comunitarios y de salud, espacios al aire libre y edificios.***

**SEXTO.-** Se reforma por adición la fracción XXII, del artículo 5 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.-** El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

…

**XXII.** El rescate, desarrollo y adecuación de los espacios públicos, la infraestructura, el equipamiento y los servicios en los centros de población, para que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con discapacidad ***y adultos mayores***, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad y ***a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ambas*** del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables en esta materia.

**SÉPTIMO.-** Se reforma por adición el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 32.-**

…

Asimismo, incluir las adecuaciones para otorgar facilidades urbanísticas y arquitectónicas conforme a las necesidades de las personas con discapacidad ***y para adultos mayores***, debiendo contemplar las directrices a que deban someterse los proyectos de construcciones o modificaciones respectivas, debiendo observarse las disposiciones aplicables en la materia.

**OCTAVO. -** Se reforma por adición la fracción X, del artículo 81 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 81.-** Las acciones de crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población se llevará a cabo mediante:

…

1. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad para toda la población, estableciendo los procedimientos de consulta ***a entidades públicas o privadas*** ***especialistas en atención a*** personas con discapacidad ***y adultos mayores*** sobre las características técnicas de los proyectos;

**NOVENO. -** Se reforma por adición la fracción II, del artículo 163 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 163.-** Las normas básicas para los conjuntos urbanos son las siguientes:

**…**

II. Los conjuntos urbanos deberán sujetarse a las normas y disposiciones en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad ***y adultos mayores***;

**DÉCIMO.-** Se reforma por adición el artículo 174 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 174.** Los fraccionamientos deberán sujetarse a las normas y disposiciones en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad ***y adultos mayores***.

**DÉCIMO PRIMERO.-** Se reforma por adición la fracción V inciso e) del artículo 192 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 192.** Los fraccionamientos habitacionales urbanos de densidad muy baja, estarán ubicados en las zonas conforme lo dispuesto en el plan director de desarrollo urbano del centro de población correspondiente y deberán tener, como mínimo, las siguientes características:

…

V.

1. Guarniciones y banquetas, debiendo cumplir con las normas de diseño para facilitar la circulación de personas con discapacidad ***y adultos mayores***;

…

**DÉCIMO SEGUNDO.-** Se reforma por adición la fracción V inciso e) del artículo 193 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 193.** Los fraccionamientos habitacionales de densidad baja, estarán ubicados en las zonas conforme lo dispuesto en el plan director de desarrollo urbano de los centros de población correspondiente y deberán tener, como mínimo, las siguientes características:

…

V.

…

e) Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad ***y adultos mayores***

…

**DÉCIMO TERCERO.-** Se reforma por adición la fracción V inciso d) del artículo 194 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 194.** Los fraccionamientos habitacionales de densidad media baja, estarán ubicados en las zonas que marque el plan director de desarrollo urbano del centro de población correspondiente y deberán tener como mínimo, las siguientes características:

…

V.

…

d) Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad ***y adultos mayores***

…

**DÉCIMO CUARTO.-** Se reforma por adición la fracción V inciso d) del artículo 195 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 195.** Los fraccionamientos habitacionales, de densidad intermedia, estarán ubicados en las zonas que marque el plan director de desarrollo urbano del centro de población correspondiente y deberán tener como mínimo, las siguientes características:

…

V.

…

d) Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad ***y adultos mayores***;

…

**DÉCIMO QUINTO.-** Se reforma por adición la fracción V inciso d) del artículo 196 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 196.** Los fraccionamientos habitacionales, de densidad media alta, estarán ubicados en las zonas que marque el plan director de desarrollo urbano del centro de población correspondiente y deberán tener como mínimo, las siguientes características:

…

V.

…

d) Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad ***y adultos mayores***;

…

**DÉCIMO SEXTO.-** Se reforma por adición la fracción V inciso e) del artículo 197 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 197.** Los fraccionamientos habitacionales de densidad alta, estarán ubicados en las zonas que marque el plan director de desarrollo urbano del centro de población correspondiente y deberán tener como mínimo, las siguientes características:

…

V.

…

e) Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad ***y adultos mayores***;

…

**DÉCIMO SÉPTIMO.-** Se reforma por adición la fracción V inciso e) del artículo 198 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 198.** Los fraccionamientos habitacionales de densidad muy alta, estarán ubicados en las zonas que marque el plan director de desarrollo urbano del centro de población correspondiente y deberán tener como mínimo, las siguientes características:

…

V.

…

e) Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad ***y adultos mayores;***

…

**DÉCIMO OCTAVO.-** Se reforma por adición el artículo 285 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 285.** En las construcciones destinadas a comercio, servicios, salud, educación, cultura, recreación, deportes y en general los equipamientos públicos y privados, así como en las banquetas en las vías públicas, deberán dejarse rampas para la circulación peatonal de personas con discapacidad ***y adultos mayores***, así como lugares especiales en los estacionamientos, conforme a las disposiciones que rigen en esta materia en el Estado.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicitamos que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**“POR UN GOBIERNO DE CONCERTACION DEMOCRATICA”**

**GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”**

**SALTILLO, COAHUILA A 06 DE NOVIEMBRE DE 2019**

**DIPUTADO**

**EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**DIPUTADA**

**ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**

**H. Pleno del Congreso del**

**Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.**

El que suscribe Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, 159 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, pongo a consideración de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud, al tenor de la siguiente:

**Exposición de Motivos**

La diabetes es una enfermedad crónico degenerativaque se origina porque**el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita,** es decir la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia.

La**insulina**es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el **mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre**. Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria.

Por otro lado, la obesidad y el sobrepeso, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud desde 1980, ha aumentado en mas del doble, siendo nuestro país uno de los que cuenta con más personas con sobrepeso o algun tipo de obesidad.

En esta misma tribuna, he presentado algunas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, con el fin de reducir en nuestro estado los altos índices de obesidad y sobrepeso, que de acuerdo a las estadísticas de diversas organizaciónes e instituciones como el INEGI, asi lo establecen.

Por su parte, la diabetes es una de las mayores crisis de salud mundial que afronta el siglo XXI, asi lo estima la Organización Mundial de la Salud, pues señala que el número de adultos en el mundo con este padecimiento casi se ha cuatruplicado, y por desgracia más de la mitad de esas personas no son concientes de su condición de enfermos, pues es una enfermedad que se detecta después de un buen tiempo de padecerla.

Por otro lado, los especialistas de la salud, señalan que aquellas personas que padecen obesidad es muy probable que también padezcan diabetes, siendo un doble riesgo para la salud, pues son dos afecciones que deben ser atendidas con un tratamiento correcto y oportuno, que suele ser prolongado y costoso para los sistemas se salud pública.

Por lo anterior, es que se preseta la presente iniciativa de ley, que reforma diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con el fin de que nuestras autoridades en materia de salud, promuevan e impulsen programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios y la prevención de la diabetes.

Así mismo, se pretende incorporar a la ley de salud, el que se diseñen y ejecuten políticas públicas que propicien en la sociedad, la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, diabetes y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Muy seguramente este tipo de acciones que hoy se presentan ya las lleva a cabo el gobierno estatal o los gobiernos municipales, pues son concientes que existen altos índices de obesidad y diabetes entre la población coahuilense, pero no se encuentran plasmados en nuestra legislación, de ahí que se presente esta iniciativa de ley, con el fin de exista esa obligación de prevenir y combatir esos dos grandes flajelos de la sociedad, en el ordenamiento legal de la materia.

En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente:

Iniciativa de Decreto por el que se modifican los artículos los artículos 4, 6, 7 y 29 de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:

**Artículo 4o.** En los términos de la Ley General de Salud y de la presente Ley, corresponde al Estado de Coahuila.

**A.** En materia de Salubridad General:

I a XII…..

XXIII. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios y la prevención de la diabetes;

XXIV. Las demás que establezca la Ley General de Salud y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 6o.** El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos:

I a VIII………

IX. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, diabetes y otros trastornos de la conducta alimentaria.

**Artículo 7o.** La coordinación del Sistema Estatal de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud del Estado, correspondiéndole lo siguiente:

I a XVII…….

**XVIII.** Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición, la activación física y la prevención de la diabetes, y

XIX. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal de Salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

**Artículo 29.** Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I a X………

**XI.** La prevención de la diabetes y la promoción de buenos hábitos alimenticios, y

XII. Las demás que establezca esta Ley o disposiciones legales aplicables.

**ARTÍCULO TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** Las presentes modificaciones a la Ley Estatal de Salud, entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 6 de Noviembre del 2019**

**Dip. Edgar Sánchez Garza**

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS QUE SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN MATERIA ATENCIÓN A LA SALUD MENSTRUAL.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de atención a la salud menstrual, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La menstruación es un proceso fisiológico natural en las mujeres que generalmente representa un síntoma de buena salud sexual y reproductiva. No obstante, y a pesar de los constantes avances médicos, el tema continua siendo un tabú en gran parte de la sociedad mexicana, debido a lo incomodo que resulta abordarlo y a la falta de sensibilización acrecentado por los prejuicios y los estigmas sociales que se imponen a la mujer menstruante.

Según la investigadora Phillipa Lysaght del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) las mujeres pasaremos en promedio 3000 días de nuestra vida menstruando y aproximadamente la mitad de la población femenina (equivalente a un 26% de la población total) en edad reproductiva, tiene menstruaciones que duran entre dos y siete días cada mes.[[6]](#footnote-6)

De ahí que los Estados tengan la obligación de implementar políticas públicas adecuadas que permitan una efectiva promoción y protección de la salud de las mujeres durante sus periodos de menstruación. La higiene menstrual es importante no solo para las mujeres y las niñas; sino también para la sociedad en general, pues su debida atención puede ayudar a romper mitos sobre el tema y generar una sociedad abierta que comprenda mejor la situación que vivimos prácticamente todas las mujeres.

En el aspecto educativo la salud menstrual es importante pues si las escuelas cuentan con las instalaciones y los materiales escolares adecuados, pueden ayudar a que las niñas lleven su menstruación con orgullo y dignidad y contribuir a mejorar la educación, la igualdad de género y los resultados médicos.

La educación referente a la salud menstrual también necesaria para los niños y los hombres pues una mejor comprensión sobre este tema ayuda a romper el silencio generalizado sobre la higiene menstrual, evitando las burlas o la violencia física o emocional que se puede generar en torno a las mujeres sobre todo en el caso de niñas y adolescentes

Por otro lado, resulta necesario generar políticas públicas que garanticen el acceso a elementos de gestión menstrual entre las personas de más escasos recursos pues según datos del Banco Interamericano para el Desarrollo, en la actualidad existen muchas niñas y mujeres que no se pueden permitir comprar compresas o tejidos higiénicos y, a menudo, deben utilizar materiales poco salubres que pueden causarles infecciones u otros daños graves en la salud.

Además no todas las mujeres disponen de acceso a instalaciones, productos y educación para la salud que son necesarios tanto dentro como fuera de sus, casas, escuelas y lugares de trabajo. Lo que genera un problema de discriminación por condición social.

Y la situación se complica aún más cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres privadas de su libertad, personas en situación de calle y las personas en instituciones de salud mental, pues en muchos casos se ven abandonadas a su suerte sin tener los recursos necesarios para cumplir con una necesidad tan básica como acceder a productos de higiene necesarios para sus periodos menstruales.

Es por estos motivos que la presente iniciativa tiene como objeto reformar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud para que se promueva y garantice la entrega gratuita de elementos de gestión menstrual a las personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad, esto con el fin de tutelar de manera efectiva su derecho a la higiene, salud y cuidado personal de miles de mujeres en situaciones de marginación.

Además la ley pretende generar mecanismos de concientización y sensibilización sobre el tema a través de un Programa Nacional de Atención a la Salud Menstrual, mismo que proponemos sea diseñado y operado por profesionales de la salud y que contribuya a derribar los diferentes mitos y tabúes que hasta la actualidad siguen vigentes en nuestra sociedad.

Cabe mencionar que este tipo de iniciativas son hoy una realidad en países como China, Japón Indonesia[[7]](#footnote-7) y Argentina[[8]](#footnote-8), en donde la atención prioritaria a la salud menstrual ha contribuido a fortalecer la conciencia social sobre el tema así como reducir de forma significativa los prejuicios y carencias de miles de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-**  Se adicionan los artículos 193 bis; 193 ter; y 193 quater todos de a la Ley General de Salud para quedar como siguen:

**CAPITULO V.**

**Programa Nacional de Atención a la Salud Menstrual.**

**Artículo 193 bis**. La prevención y atención de la salud menstrual, tendrá carácter prioritario. El Gobierno a través de la Secretaría de Salud así como las entidades federativas municipios garantizarán en el ámbito de sus competencias los servicios integrales de salud para la atención de la salud menstrual.

Para tal efecto, la Secretaría de Salud elaborará el Programa Nacional de Atención a la Salud Menstrual, y cuya ejecución corresponderá a ésta, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la federación, los estados y los municipios.

El Programa Nacional de Atención a la Salud Menstrual tendrá como finalidad promover la salud menstrual y garantizar el acceso a elementos para la gestión menstrual.

**Artículo 193 ter.** A los efectos de este título se entienden como elementos de gestión menstrual a las toallas higiénicas descartables y reutilizables, los tampones, las esponjas marinas menstruales, los paños absorbentes lavables, la ropa interior absorbente, las copas menstruales y a todo otro producto de contención que sea considerado apto para su utilización durante la menstruación.

**Artículo 193 quáter.** Son objetivos del Programa Nacional de Atención a la Salud Menstrual los siguientes:

1. Promover la entrega gratuita de elementos de gestión menstrual en establecimientos educativos públicos y privados, en albergues, asilos, y otras instituciones de alojamiento diurno y/o nocturno para personas en situación de calle y en espacios comunitarios, y
2. Garantizar de manera gratuita la entrega de elementos de gestión menstrual a entre personas que se privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios y en instituciones de internación de salud mental.
3. Respetar las elecciones personales de la población destinataria y encontrarse a disposición de quien lo requiera sin mediación alguna, debiendo garantizarse la protección del derecho a la identidad y a la confidencialidad de la persona en caso de que así lo solicite.
4. Promover la capacitación y asistencia a las mujeres menstruantes en lo relativo a la salud menstrual en especial en niñas y adolescentes.
5. Generar campañas de sensibilización, conocimiento y visibilización de la adecuada atención de la salud menstrual, que sea libre de estigmas, prejuicios y/o discriminación.
6. Disponer de un sistema de recepción de consultas y orientación para personas menstruantes relativo al cuidado y atención de la salud menstrual.
7. Brindar asesoramiento a los establecimientos enumerados en las fracciones I y II del presente artículo, para que garanticen instalaciones sanitarias que promuevan la salud menstrual, y cuenten con los dispositivos necesarios para la adecuada eliminación de los desechos.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-**Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicito que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 6 de noviembre de 2019.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA.**

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO **QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS, DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 2º DE LA LEY QUE CREA EL CONSEJO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO DE LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO DE COAHUILA, EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL, AL TENOR DE LA SIGUIENTE...**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Como coahuilense, no puedo mantenerme ajeno a la problemática que vive cada una de las regiones del Estado, sobre todo cuando alguna de ellas entra en crisis, como las que hemos vivido en los últimos años.

El impulso al desarrollo tiene qué ver, no sólo con la atracción de inversiones productivas y la creación de empleos, sino también con el fortalecimiento de la infraestructura urbana y de servicios. Todo esto, en su conjunto, determina el nivel de bienestar de la población.

Particularmente la Región Centro, conformada por los municipios de Monclova, Frontera, Castaños, San buenaventura, Nadadores, Abasolo, Candela y Escobedo, presenta hoy una situación de emergencia, derivada de los diversos factores que amenazan la estabilidad y futuro de la industria siderúrgica de la zona.

Las adversas circunstancias que giran en torno a este ramo industrial son motivo de preocupación, no únicamente para los habitantes del centro coahuilense, sino también para los de otras regiones del Estado, cuyas posibilidades de crecimiento están supeditadas en buena medida al desempeño de dicha industria.

De acuerdo con estimaciones de la iniciativa privada, las economías de las regiones Carbonífera y parte del Norte de la Entidad, dependen en un 38 por ciento del desempeño de Altos Hornos de México.

Así lo confirma, por ejemplo, el presidente del Grupo Industrial Monclova, Gerardo Benavides, quien sugiere que, ante los efectos que pudiésemos resentir con motivo de la crisis del acero y de una anunciada contracción económica internacional, es preciso aprovechar la capacidad instalada, pero también se debe optar por alternativas de inversión diferentes.

El fabricante de carros de ferrocarril y de instalaciones petroleras, recomienda la reactivación, por ejemplo, del comercio y la construcción, para compensar la baja en ventas de acero, derivada del conflicto arancelario.

Otros líderes empresariales, como Alberto Ramos, del Consejo Empresarial de Múzquiz, sienten la necesidad de detonar el desarrollo económico de la Región Carbonífera, pero a través de actividades que signifiquen “otras formas de empleo”.

La receta es clara: esta zona no puede depender casi exclusivamente del aprovechamiento del carbón, así como la economía de la Región Centro tampoco debe depender nada más de la producción acerera.

Lo dijo también, en una reciente visita a Sabinas, la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Guadalupe Oyervides Valdez: “...no podemos estar dependiendo de un solo factor económico en cada región, por eso estamos trabajando en la integración de una agenda para el 2020” que genere una dinámica tal “que la derrama local o interregional sea con mayor constancia”.

Rolando Rivero, presidente de la Canacintra de Monclova, es de la misma opinión, al señalar que “la región requiere empresas de diferentes ramos”, ya que “la mayor parte de la planta industrial --observó-- gira en torno a Altos Hornos de México”.

Y según el alcalde de Monclova, Jesús Alfredo Paredes López, pronto habrá buenas noticias para el municipio y la región, es decir, “para dar un sentido de diversificación a las empresas”. Mientras tanto, se seguirá dependiendo del acero.

En suma, estas expresiones y puntos de vista apuntan a la necesidad de diversificar la planta productiva en cada zona del estado, particularmente en la Región Centro, donde las dificultades de la actividad siderúrgica impactan por lo menos a un tercio de la economía de la Región Carbonífera y a una buena parte de la Región Norte.

A fin de proveer un mejor soporte legal, así mismo, contribuir a redireccionar las acciones de los sectores público y privado tendientes a impulsar el desarrollo del Estado, me permito plantear a este Honorable Pleno la incorporación de un elemento que no contempla una de las leyes en la materia y que, con motivo del contexto económico actual, se hace imprescindible.

Con base en todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presento ante este Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la siguiente Iniciativa con...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. - Se adiciona la fracción VII al artículo 2º de la Ley que Crea el Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la Región Centro del Estado de Coahuila, para quedar de la siguiente manera:**

ARTÍCULO 2º. El Consejo tiene por objeto:

I. ... a la VI. ...

**VII. Diseñar e impulsar, como parte de la planeación estratégica de largo plazo, la ejecución de proyectos que contribuyan a la diversificación económica de la Región Centro de Coahuila, como estrategia para reducir las desventajas y limitaciones que presupone una economía regional que gira mayormente en torno a un solo ramo industrial.**

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 06 de noviembre e de 2019**

***“Por el Camino de la Cuarta Transformación”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LAS MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada María Esperanza Chapa García, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este H. Pleno del Congreso del Estado, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 45 BIS, 50 BIS, 53 BIS, y se reforman el primer párrafo del artículo 54 y el segundo párrafo del artículo 59 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de establecer términos y condiciones en las medidas especiales de protección y restitución de derechos, bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

De acuerdo con cifras señaladas en un informe realizado por la UNICEF y la CONEVAL[[9]](#footnote-9), en el año 2017 en nuestro país, seis de cada diez niñas, niños y adolescentes entre las edades de 1 a 14 años han experimentado algún método de violencia de disciplina infantil en sus hogares, y uno de cada dos, sufrieron agresiones psicológicas; sin duda son cifras alarmantes que nos lleva a reflexionar sobre lo que está sucediendo en la población infantil y qué debemos hacer para evitar que esas cifras vayan en aumento.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a llevar una vida sin violencia, explotación o abuso de cualquier tipo. Desafortunadamente en nuestro país, por muchas décadas fue normal y aceptado el castigo corporal o agresiones psicológicas como un método disciplinario hacia los hijos, incluso hacia las mujeres.

Si bien es cierto, la forma que adquiere la violencia en la etapa infantil y de adolescencia son distintas dependiendo del contexto social y económico en el que viven y el grupo de edad, ésta se puede presentar tanto en el interior del hogar, en las escuelas o en la vía pública y puede provenir de padres, madres, cuidadores y otras figuras de autoridad[[10]](#footnote-10).

Siguiendo con las cifras de UNICEF México[[11]](#footnote-11), uno de cada quince niñas, niños y adolescentes han padecido alguna forma de castigo severo como método de disciplina.

La escuela y la vía pública son los entornos en los que ocurren ocho de cada diez agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre las edades de 10 a 17 años; mientras que el hogar es el tercer lugar en donde los niños están expuestos a la violencia.

Uno de cada diez niñas, niños y adolescentes entre las edades de 10 a 17 años, han sufrido algún tipo de egresión en el hogar, siendo las niñas y las adolescentes las más afectadas, pues siete de cada diez fueron víctimas de agresión en sus hogares en el 2017.

Ahora bien, a nivel federal se cuenta con la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en la que se establecen los principios generales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de no discriminación, prioridad, derecho a la vida y la supervivencia, participación e interés superior de la niñez, definiéndose tales principios como ejes rectores del sistema. Esta ley define el concepto de niño, niña y adolescente de manera general, sin perjuicio de lo que los tratados internacionales de derechos humanos contemplan y otras normas nacionales.

A nivel Estatal tenemos la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, la cual tiene por objeto proteger la organización y el desarrollo de la familia, así como establecer los mecanismos a través de los cuales se garantizan los derechos de las personas que la integren, para hacerlos efectivos y reales.

Así mismo la Ley del Sistema para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene como objeto:

1. *Reconocer a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;*
2. *Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;*
3. *Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños, y Niñas, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niños, niñas y adolescentes que hayan sido vulnerados;*
4. *Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política estatal en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre el estado y los municipios; así como la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos; y*
5. *Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.*

Habiendo hecho estas precisiones y analizando el contexto que vive la población infantil en nuestro país, es indispensable actuar para evitar que las cifras de violencia contra ellos aumente, por lo que analizando las medidas especiales de protección y restitución de derechos que se encuentran actualmente en la ley, se consideró adicionar y reformar algunos artículos en los cuales se establezca los tipos de medidas de protección que se deberá imponer y acatarse en su caso, tanto por niños, niñas y adolescentes, como por quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad, tutela, custodia o los tenga bajo su cuidado.

En ese sentido, y una vez que la autoridad competente imponga una o más medidas especiales de protección y restitución para proteger y garantizar los derechos del niño, niña o adolescente, es importante establecer en qué casos se produce la situación de desamparo, por lo que se propone adicionar un artículo en el que se establezcan varias fracciones, en las que se enumere las hipótesis es las que se produce la situación de desamparo.

Asimismo, cuando la autoridad tenga la información sobre un posible riesgo, amenaza, afectación, restricción o vulneración de los derechos de un niño, niña, o adolescentes, es necesario establecer un término de hasta treinta días hábiles para determinar si es procedente la declaratoria de situación de riesgo o desamparo, ya que solamente se establece el término de 72 horas para ratificar la medida compareciendo ante la autoridades judiciales, sin contar con un término para la declaratoria de situación de riesgo o desamparo, por lo que era necesario incluirlo en la ley.

En cuanto a la facultad de la Procuraduría de separar preventivamente al niño, niña y adolescente de la situación considerada como de riesgo, amenaza o afectación restricción o vulnerabilidad, no se establece en que caso se aplicará, dejando abierta cualquier posibilidad, pues está muy general el hecho de poder separar preventivamente al niño, niña y adolescentes, por lo que consideramos importante establecer que se aplicará cuando la conducta sea atribuible a quien vive con la persona menor de edad o adolescente, buscando en todo momento que se considere que se está alejando de su entorno familiar cualquiera que sea este a un niño o menor y que se debe considerar la situación mental, psicológica y emocional en la que se encuentran dichos menores y que en todo momento se debe considerar los tiempos para atender y aplicar lo que a derecho convenga a favor de los menores, pero sin dejar a un lado que mientras se resuelve y emite una decisión final, quien se encuentra en una situación de espera es el menor o adolescente.

Por último, pero no menos importante se considera establecer otro termino para solicitar a la autoridad judicial competente la pérdida o suspensión de la patria potestad, si la situación de riesgo, amenaza o afectación restricción o vulnerabilidad persiste durante 30 días posteriores a la ratificación de la medida en casos de afectaciones cometidas en contra de los menores los cuales se establece en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como los delitos tipificados en el Código Penal de Coahuila. Ya que es necesario que se establezca un término diferente como lo es de 30 días en estos supuestos, pues el termino de 90 días deberá ser solo para aquellos casos que no se encuentren enumerados dentro de un delito tipificado en nuestro código o en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pues no podemos actuar con los mismos términos o plazos en todos los casos, ya que estaríamos poniendo en igualdad de circunstancias a los menores afectados, considerando que dichos términos se podrán duplicar si es necesario y los menores se encuentran esperando una resolución judicial para estar en posibilidades de ser considerado en el procedimiento de adopción, por lo que el menor sigue esperando y esperando que se cumplan los términos legales y administrativos y su vida emocional y afectiva sigue estando vulnerable a los términos de la autoridad pasando sus días en espera de una resolución.

Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se adicionan los artículos 45 BIS, 50 BIS, 53 BIS, y se reforman el primer párrafo del artículo 54 y el segundo párrafo del artículo 59 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 45 BIS.- Las medidas de protección que se podrán imponer y que deberán acatarse, tanto por niños, niñas y adolescentes como por quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad, tutela, custodia o los tenga bajo su cuidado, son las siguientes:**

1. **Orientación, apoyo y seguimiento temporal.**
2. **Inclusión en programas oficiales de asistencia social.**
3. **Inclusión a programas que impliquen orientación y tratamiento de adicciones.**
4. **Incorporación al procedimiento de conciliación y mediación.**
5. **Rescate urgente o provisional cuando se encuentren en situación de desamparo, que podrá incluir la separación preventiva del niño, niña o adolescente de su lugar de residencia.**

**Artículo 50 BIS.- La situación de desamparo se produce de hecho a causa de incumplimiento, del inadecuado ejercicio de los deberes de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes, cuando estos quedan privados de la necesaria asistencia material, emocional o afectiva y opera cuando se actualice una o más de las siguientes hipótesis:**

1. **El abandono por parte de su familia, o por quienes ejerzan la guarda o custodia.**
2. **La ausencia habitual de escolarización.**
3. **La existencia de maltrato físico, psicológico, emocional o sexual.**
4. **La inducción a la mendicidad, delincuencia, prostitución, o cualquier otra forma de explotación.**
5. **La drogadicción o alcoholismos de niños, niños y adolescentes.**
6. **El trastorno mental de los padres o de quienes ejercen la guarda o custodia que impida el adecuado cumplimiento de sus obligaciones.**
7. **La drogadicción o alcoholismo, en las personas que integran la unidad familiar y en especial de los padres o de quienes ejerzan la guarda o custodia. Siempre que incida en el desarrollo y bienestar d niños, niñas y adolescentes.**
8. **La convivencia en un entorno socio- familiar que exponga o deteriore su integridad moral o perjudique el desarrollo de su personalidad.**
9. **La ausencia de personas a quienes conforme a la Ley corresponda ejercer la patria potestad.**
10. **El inadecuado cumplimiento de los deberes que implica el ejercicio de la patria potestad guarda o custodia y que represente un peligro para la seguridad o integridad de quienes estén sujetos a ellas.**

**Artículo 53 BIS.-**

**La procuraduría contará con un término de hasta treinta días hábiles contados a partir del aviso de riesgo, amenaza o afectación de derechos de niños, niñas o adolescentes, que les haya sido formulado, para determinar si resulta procedente declarar la situación de riesgo o desamparo y las correspondientes medidas de protección que habrán de aplicarse.**

**El término podrá prorrogarse por un plazo igual por alguna de las siguientes causas:**

1. **Para concluir con el desahogo de diligencias de la investigación.**
2. **Para continuar con las medidas especiales de protección.**
3. **Por no haber satisfecho los padres la medida de protección impuesta.**

**Artículo 54.-** La Procuraduría podrá, por acuerdo del Procurador o Procuradora o, en su caso, de quienes ocupen las Subprocuradurías Regionales o Procuradurías Municipales, separar preventivamente al niño, niña, o adolescente de la situación considerada como de riesgo, amenaza o afectación restricción o vulneración y, en su caso, de su hogar o de quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda y custodia legal o de hecho, cuando aparezcan motivos fundados que hagan presumir la existencia de un peligro inminente e inmediato a su integridad física o mental, aun cuando no se hayan concluido las investigaciones a que se refiere el artículo anterior. **La separación preventiva del seno familiar solo se aplicará cuando la conducta que la originó sea atribuible por acción u omisión a quien vive con la persona menor de edad y no exista otra alternativa.**

...

**Artículo 59.-** ...

Se podrá solicitar una prórroga por el mismo tiempo al juez competente cuando el caso y las circunstancias lo ameriten. **En los casos de delitos tipificados en contra de menores establecidos en el Código Penal de Coahuila, la Procuraduría contará con un término de hasta treinta días hábiles posteriores a la ratificación de la medida, para solicitar a la autoridad judicial competente la pérdida o suspensión de la patricia potestad.**

...

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, noviembre de 2019**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |  | **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LAS MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS.

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**La que suscribe la presente, diputada María Eugenia Cázares, conjuntamente con los diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción I y 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y con fundamento en los artículos 21 Fracción IV Y 152 Fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presentamos INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se adiciona un segundo párrafo al numeral 7 de la Fracción V del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con base en la siguiente:**

Exposición de motivos

La cuenta pública, dentro del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza se menciona más diez veces, destacando para los fines de la presente, los siguientes artículos:

*ARTÍCULO 102…..*

*….*

*En todo caso, los ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones siguientes:*

*…..*

*V. En materia de hacienda pública municipal:*

*…*

*7. Presentar al Congreso del Estado la cuenta pública anual de la hacienda municipal y los informes trimestrales de avance de gestión financiera, dentro de los plazos que establece la Ley de la materia, así como verificar la presentación de la cuenta pública del sector paramunicipal.*

*ARTÍCULO 104. El presidente municipal, será el órgano ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento y tendrá las siguientes competencias, facultades y obligaciones:*

*….*

*E). Hacienda Pública Municipal:*

*…*

*II. Vigilar la oportuna presentación de los estados financieros mensuales, los informes trimestrales de avance de gestión financiera y la cuenta pública anual, en los términos de la legislación aplicable.*

*ARTÍCULO 106. Son facultades, competencias y obligaciones de los síndicos:*

*IV. Vigilar que la cuenta pública municipal, se integre en la forma y términos previstos en las disposiciones aplicables y se remita en tiempo al Congreso del Estado.*

*ARTÍCULO 112. La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública tendrá además de las que se le señalen en el Reglamento Interior, las siguientes obligaciones y atribuciones:*

*….*

*IV. Analizar y dictaminar los informes trimestrales de avance de gestión financiera y la cuenta pública anual de la hacienda municipal para someterlos a la consideración del Ayuntamiento.*

*ARTÍCULO 129. Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal, además de las que le señalen el Reglamento Interior, las siguientes:*

*X. Presentar al Ayuntamiento, para su autorización y glosa, en forma pormenorizada, la cuenta pública anual y los informes trimestrales de avance de gestión financiera, incluyendo los documentos, libros de ingresos y egresos de la Tesorería, correspondientes de conformidad con los términos establecidos por la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila. Presentar a la Auditoría Superior o al Congreso del Estado las cuentas, informes contables y financieros que le soliciten en los términos de la ley.*

*ARTÍCULO 251. Para efectos de este código, la Cuenta Pública de los municipios, estará constituida por los estados contables y financieros y demás información, que muestre el registro de las operaciones de la recaudación de los ingresos y del ejercicio de los presupuestos de egresos, la incidencia de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la hacienda pública municipal, y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos, así como el resultado de las operaciones que verificaron los estados detallados de la deuda pública municipal.*

Ocioso resultaría explicar o tratar de detallar aquí lo que es la cuenta pública, ya que es algo que el grueso de la población conoce y entiende perfectamente, de manera general todos saben y sabemos que es un ejercicio de rendición de cuentas que todas las entidades públicas deben realizar por ley de forma anual, sin perjuicio de los llamados informes trimestrales que establece la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila y su similar federal.

De acuerdo a la ley y a los principios generales del derecho, todo acto de una autoridad genera consecuencias de derecho, resultados vinculantes para alguien, llámese autoridades o particulares.

En el mismo sentido, los actos que un cuerpo de autoridad legalmente constituido resuelve mediante una votación deben generar consecuencias legales, pues no se vota sin motivo. El voto tiene un fin: aprobar o desaprobar algo; y por ende, el resultado de dicha votación debe producir consecuencias legales.

Desde hade mucho tiempo, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza contempla la atribución del Cabildo de aprobar las cuentas públicas municipales antes de que se remitan al Congreso para continuar con el proceso ya conocido.

La redacción de este ordenamiento establece:

*ARTÍCULO 102…..*

*….*

*En todo caso, los ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones siguientes:*

*…..*

*V. En materia de hacienda pública municipal:*

*…*

*7. Presentar al Congreso del Estado la cuenta pública anual de la hacienda municipal y los informes trimestrales de avance de gestión financiera, dentro de los plazos que establece la Ley de la materia, así como verificar la presentación de la cuenta pública del sector paramunicipal.*

En los hechos, esta disposición ha generado una polémica durante los últimos años en nuestros municipios, misma que nunca ha sido resuelta, y nos referimos a lo siguiente:

Los cabildos votan la aprobación de la cuenta pública, previo a su envío al Congreso. Pero; ¿qué pasa si esta no se aprueba por mayoría de votos? La respuesta la sabemos todos: NADA.

No existe en realidad, ni de manera expresa o implícita un efecto vinculante por ser aprobada o desaprobada, es decir, se trata de una votación que se ha convertido a fuerza de costumbre en una especie de mero trámite, votar por “formalidad”, “votar para nada, pero creyendo que se vota por algo”.

Esto no es posible, entendemos, o suponemos que el acto de que la cuenta sea aprobada por mayoría de votos del cabildo, genera la convicción de que hay conformidad con ella de parte de la mayoría del cuerpo edilicio; que por mayoría, creen los ediles que todo está bien. Lo cual, a la vez, le debe generar un buen indicador, al menos figurado o supuesto al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior de la entidad.

Pero, ¿y si el voto es en contra? No pasa nada. La cuenta pública de todos modos es remitida por el ayuntamiento en cuestión al Congreso. Y, hasta donde se sabe y lo establece la ley, no existe efecto vinculante por venir votada de origen en contra por el Cabildo. La Auditoría Superior del Estado igualmente, la dictaminará en base a sus criterios y a lo establecido en las Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, así como en base a los demás ordenamientos aplicables.

Como ya lo señalamos antes, el voto de un cuerpo colegiado debe tener un significado, un alcance, una consecuencia.

La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, dispone:

*Artículo 4. Son elementos y requisitos del acto administrativo:*

*I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;*

*II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;*

*III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse distintos fines;*

*IV. Constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;*

*V. Estar fundado y motivado;*

*VI. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en ésta ley;*

*XII. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;*

*XIV. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.*

En el pasado, algunos expertos en derecho legislativo consideraban que en caso de que una cuenta pública se votara en contra en un cabildo debería procederse de una de las siguientes formas:

I.- Regresarse a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública para elaborar un nuevo dictamen.

II.- Reprogramarse una nueva sesión de Cabildo donde, por consenso de las dos facciones edilicias en pugna, se llegara a un acuerdo para su aprobación.

III.- Votarla de manera dividida, es decir, qué puntos o rubros a favor, y cuáles no. Y pasarla así al Congreso.

Desafortunadamente, ninguna de estas medidas cumple con los extremos de los principios de certeza, legalidad y de debido proceso legislativo; en el primer caso, sería un cuento de nunca acabar esperar a tener un dictamen que le agrade o le parezca bien a todos, retrasando días o semanas la entrega del expediente final al Congreso.

Lo mismo sucedería en el segundo caso, nadie sabe en cuántas sesiones se pondrían de acuerdo los ediles, o si nunca lo harían, más con las dos partes polarizadas políticamente.

En el tercer caso, existiría un despropósito enorme, al tener que separar las cuentas públicas por rubros, a gusto o conveniencia de las partes en pugna, esto generaría caos y rompería con la estructura de presentación que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

A la vez, tampoco puede pervivir la praxis actual, donde votar en contra la cuenta pública no tiene efectos vinculantes o consecuencias legales evidentes. Debe existir una solución.

Para hallar la solución idónea, basta con remitirnos a un principio elemental:

Las cuentas públicas son fiscalizadas por la autoridad designada para tal fin: La Auditoría Superior del Estado. Los poderes, los municipios, los organismos autónomos, descentralizados y paraestatales no “fiscalizan en sentido legal estricto las cuentas públicas. Sólo existe una autoridad para realizar dicha labor: la ASEC.

Esto no le quita mérito, utilidad ni autoridad a las autoridades antes mencionadas, quienes en efecto, realizan una fiscalización pero diferente, basada en supervisar el adecuado ejercicio y aplicación de los recursos públicos, registrando, documentando y, en su caso, denunciando antes las autoridades competentes los malos manejos, la violación o incumplimiento de las leyes y los actos de corrupción.

Además del trabajo que realizan los órganos de control de cada dependencia, organismo y poder en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El cabildo, en efecto, goza de las más amplias atribuciones en los términos descritos en los dos párrafos anteriores, y tiene todo el derecho de, en caso de votar en contra (por mayoría) una cuenta pública, que dicho voto genere consecuencias o potenciales efectos legales de acuerdo a los ARGUMENTOS, FUNDAMENTOS Y PRUEBAS QUE SE PRESENTEN, dependiendo, claro está, de la fiscalización especializada que realice la ASEC.

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

**ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo al numeral 7 de la Fracción V del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue**:

**ARTÍCULO 102….**

**….**

**….**

**…..**

**V……**

**…**

**7….**

**En caso de que la cuenta pública no sea aprobada, los ediles que hayan votado en contra expresarán en un informe los motivos y argumentos y, en su caso, de contar con ellas, adjuntarán las pruebas en que sustentan su voto; el cual deberá anexarse a la cuenta pública turnada al Congreso del Estado para que se valorado en su conjunto por la Auditoría Superior.**

**8….**

TRANSITORIOS

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo.- El informe a que hace referencia el párrafo segundo del numeral 7 de la fracción V del artículo 102 del presente ordenamiento, deberá presentarse en los casos en que proceda, a partir de la presentación de la cuenta pública 2019.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 06 de noviembre de 2019

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 7 DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**H. Pleno del Congreso del**

**Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.**

La que suscribe Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 59, fracción I; 65; 67, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los artículos 152, fracción I, 156 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, pongo a consideración de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, el presente proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 244 Bis y se modifica el artículo 245 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza.

**Exposición de Motivos**

Las etapas del embarazo, parto y puerperio, constituyen un proceso fisiológico y multidimensional de las mujeres, en el que se debe proteger su vida y su salud, así como respetar y garantizar su autonomía, dignidad y derechos humanos. Desde esta perspectiva, la maternidad además del aspecto médico, involucra las nociones de equidad y violencia de género.

De acuerdo con la Comisión de Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación General 31/2017, establece que la violencia obstétrica tiene uno de sus orígenes en las relaciones asimétricas de poder donde convergen el género, las jerarquías, la “lucha por la posesión del conocimiento legitimado”, la influencia del sexismo y el androcentrismo en el campo de la medicina, la preeminencia del parto medicalizado sobre el natural y el ejercicio de prácticas patriarcales y autoritarias sobre las decisiones y el cuerpo de la mujer.

La referida Recomendación tiene por objeto, describir el fenómeno de la violencia obstétrica y hacer visible la situación que en ocasiones experimentan las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio en las instituciones de salud, para contribuir en la identificación y eliminación de toda práctica que genere violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el contexto de la atención obstétrica.

Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 (ENDIREH 2016), por primera vez en nuestro país, realizó una encuesta nacional que incluye una sección para valorar la atención obstétrica que las mujeres recibieron durante el último parto por parte del personal que las atendió. De acuerdo con la metodología aplicada, se entrevistó un universo de 32.8 millones de mujeres que tienen entre 15 y 49 años de edad (70.7% del total).

Como resultado se obtuvo que, en los últimos 5 años, 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron en el mismo.

Entre otros datos que arroja la referida encuesta, dentro del rubro de situaciones que experimentaron las mujeres al ser atendidas durante el último parto, encontramos los datos siguientes: a) le colocaron algún método anticonceptivo o la operaron o esterilizaron para ya no tener hijos(as) sin preguntarle o avisarle (4.2%); b) se negaron a anestesiarla o a aplicarle un bloqueo para disminuir el dolor, sin darle explicaciones (4.8%); c) le dijeron cosas ofensivas o humillantes (7.0%); d) la obligaron a permanecer en una posición incómoda o molesta (9.2%); f) la presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo o la operaran para ya no tener hijos (9.2%); g) la ignoraban cuando preguntaba cosas sobre su parto o sobre su bebé (9.9%); h) se tardaron mucho tiempo en atenderla porque le dijeron que estaba gritando o quejándose mucho (10.3%); i) le gritaron o la regañaron (11.2%).

Asimismo, de las 3.7 millones de mujeres que tuvieron cesárea el 10.3% no fue informada de la razón de la misma, y el 9.7% no le pidieron su autorización para realizarla.

En este sentido, la ENDIREH 2016 señala que la Prevalencia Nacional de maltrato en los últimos 5 años es de 33.4%. Respecto a las entidades federativas, arroja los datos siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Estado** | **Proporción** |
| Estado de México | 39.5% |
| Ciudad de México | 39.2% |
| Tlaxcala | 37.7% |
| Morelos | 37.2% |
| Querétaro | 36.9% |
| Yucatán | 36.5% |
| Guanajuato | 36.2% |
| **Coahuila** | **36.1%** |

Estos datos revelan que el estado de Coahuila se encuentra en el sector de mayor proporción (de 36.0 a 39.5) de maltrato en la atención obstétrica en todo el país.

La CNDH, en la recomendación referida, menciona que, del análisis de diversos casos de violencia obstétrica permite llegar a la conclusión sobre los derechos humanos y las prácticas que frecuentemente los transgreden, señalando de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Derecho humano que afecta** | **Conductas y prácticas que constituyen violencia obstétrica** |
| **Derecho a una vida libre de violencia** | La agresión verbal, la degradación, crueldad y maltrato, son prácticas que deshumanizan y constituyen una forma de trato cruel e inhumano, además de ser reflejo de los prejuicios acerca de la sexualidad de la mujer; las actitudes groseras y despectivas por parte de los servidores públicos, son cometidos de manera cotidiana en el marco de la práctica gineco-obstetra, siendo las más frecuentes las críticas a la mujer por llorar o gritar durante el parto; impedirle hacer preguntas o manifestar sus miedos e inquietudes; burlarse, hacer comentarios irónicos y descalificarla; negarle la anestesia cuando está indicada y obstaculizar el apego precoz en ausencia de indicación médica. |
| **Derecho a la protección de la salud** | Subestimar las manifestaciones de dolor hechas por la paciente, la realización de maniobras de manera rutinaria sin estimar el caso en particular, la falta de supervisión de los residentes por los médicos de base, la mala infraestructura y equipamiento del hospital y el abuso de medicalización sin considerar los efectos que esto podría acarrear a la mujer o al producto de la gestación. |
| **Derecho a la información y al libre consentimiento informado** | Brindar información incompleta o sesgada sobre el estado de salud del paciente, no hacer de conocimiento de su estado de gravedad, o dándose el caso, el motivo de su deceso; realizar prácticas sin consultar previamente a la paciente, explicando en forma detallada el procedimiento a efectuar; no dar la información necesaria sobre los riesgos de salud. |
| **Derecho a la libertad y autonomía reproductiva** | No respetar la forma en que la gestante decide dar a luz, los procesos naturales del parto, acelerarlo mediante la aplicación de oxitocina, o realizar ruptura de membranas de manera artificial cuando no es necesario; del mismo modo se afecta el derecho a decidir libremente el método de planificación familiar y el número de hijos y espaciamiento entre ellos cuando se impone un método anticonceptivo distinto al elegido por la gestante, sin tener en cuenta el consentimiento de la interesada. |
| **Derecho a la igualdad y no discriminación** | Prácticas discriminatorias en contra de las mujeres por su origen y condición social, cuando el personal médico del nosocomio omite considerar las circunstancias particulares de la gestante, falta de intérpretes y traductores, ausencia de perspectiva intercultural. |
| **Derecho a la integridad personal** | Aplicación de episiotomías innecesarias, cesáreas que no están médicamente indicadas y la salpingoclasia (procedimiento quirúrgico para inhibir el embarazo), entre otros; prácticas que son invasivas y pueden causar un daño físico, siempre que en las mismas no medie solicitud expresa de la paciente y sean médicamente viables. |
| **Derecho a la vida** | Acciones u omisiones que tienen como consecuencia la pérdida de la vida de la mujer o del producto de la gestación, tales como: desestimar los padecimientos manifestados por la gestante, descuidar la vigilancia estrecha del binomio materno-infantil, abandonar a la paciente, la medicalización y patologización de los procesos naturales |

En este sentido, a partir de 2008 diversas entidades federativas incorporaron el concepto de violencia obstétrica en su orden jurídico, como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Campeche, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Así, en nuestro Estado, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza contiene el concepto de violencia obstétrica. En su artículo 8, fracción VII, la define como: “Es toda acción u omisión por parte del personal de salud, de tipo médico o administrativo, que dañe, lastime o denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia en su atención médica; se expresa en la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, un trato inhumano o degradante, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre sus cuerpos y los procesos reproductivos. Se caracteriza por:

**a)** Negar la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas;

**b)** Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios para la realización del parto humanizado;

**c)** Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle inmediatamente después de nacer;

**d)** Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;

**e)** Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; o

**f)** Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.

Por otro lado, uno de los mecanismos que se han adoptado para visibilizar, prevenir y sancionar la violencia obstétrica ha sido al de reformar las legislaciones penales para tipificarla como delito, con sanciones privativas de la libertad y multa para el personal de salud que incurra en estas prácticas.

Bajo esta lógica, por lo que respeta a los códigos penales, solo en los estados de Veracruz, Guerrero, Chiapas y Estado de México, esta conducta se encuentra tipificada como delito.

Por tal motivo, con el fin de prevenir, atender y erradicar la violencia obstétrica que se vive en el estado de Coahuila, proponemos tipificar esta conducta en el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, como una media disminuir la comisión de este tipo de conductas.

Estamos conscientes que, como bien explica el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), el fenómeno de la violencia obstétrica también requiere de medidas administrativas y políticas públicas que atiendan los problemas estructurales que subyacen en la perpetuación de dicha práctica y que, por lo tanto, refuercen el marco normativo y de derechos humanos para la atención obstétrica.

En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente:

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 244 Bis y se modifica el artículo 245 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar de la forma siguiente:

**Artículo 244 Bis (Violencia Obstétrica)**

**Se impondrán de tres a seis años de prisión y multa, a quien por acto u omisión impida u obstaculice la atención oportuna y eficaz en el embarazo, parto o puerperio o en emergencias obstétricas o altere sus procesos reproductivos sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, generando como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo, reproducción y sexualidad.**

**Artículo 245** (Modalidades agravantes por violencia o aprovechamiento en los delitos previstos en los artículos 240 a 244 **Bis** de este código)

Se aumentará en una tercera parte el mínimo y el máximo de las penas señaladas para los delitos previstos en los artículos 240, 241, 242 **y 244 Bis** cuando se realicen mediante violencia física, psicológica o moral contra la víctima o terceras personas, o aprovechándose de la ignorancia o pobreza extrema de la víctima.

Más si en virtud de la violencia física a que se refiere el párrafo precedente, se infiere a la víctima una o más lesiones de las previstas en las fracciones III a V del artículo 200 de este código, se aumentará una mitad al máximo de la pena de prisión señalada para los delitos previstos en este capítulo.

Y si debido a la violencia física a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se infiere a la víctima una o más lesiones de las previstas en las fracciones VI a VIII del artículo 200 de este código, se aumentará un tanto al máximo de la pena de prisión señalada para los delitos previstos en este capítulo.

Para determinar la punibilidad legal en atención a la gravedad de las lesiones ocasionadas mediante violencia física, no se tomará en cuenta la esterilización reproductiva irreversible ocasionada.

Para los delitos previstos en los artículos 243 y 244 se aumentará la pena en una tercera parte el mínimo y el máximo de las penas señaladas en esos artículos, en el supuesto de que el delito se realice con violencia física, psicológica o moral, aprovechándose de la ignorancia, extrema pobreza o cualquier otra circunstancia que hiciera vulnerable a la víctima, además, se impondrá la suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, la inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la destitución.

**ARTÍCULO TRANSITORIO**

**ÚNICO. -** La presente adición del artículo 244 Bis y modificación al artículo 245 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 02 de octubre de 2019**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**Integrantes del Grupo Parlamentario**

**“Brigido Ramiro Moreno Hernández”**

**Del Partido Unidad Democrática de Coahuila.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7º Y 88 DE LA LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA GESTIÓN DE CONFLICTOS ENTRE PROFESORES, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 7º y 88 de la Ley Estatal de Educación, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La educación de un país es sin duda una parte fundamental para el establecimiento de una sociedad y un estado más democrático, basado en los valores de la tolerancia, la pluralidad, pero sobre todo el respeto a las normas jurídicas y las figuras de autoridad que desde la niñez aportan gran parte de nuestra formación y lo que somos en el presente.

Durante muchos años, la figura de las y los maestros, profesores y educadores, constituyeron una fuente de inspiración y respeto, en medio de una sociedad que poco a poco se iba desarrollando e industrializando para convertirse en lo que hoy es México. El maestro siempre fue respetado por los alumnos y los padres de familia, pues se entendía la importancia de que las y los niños fueran formados con disciplina y orden, con el fin de que en un futuro se convirtieran en profesionistas exitosos y buenos ciudadanos.

Sin embargo y desgraciadamente, en la actualidad la figura del maestro ha sido duramente desprestigiada y atacada. El fenómeno de la llamada “hiperpaternidad” o sobreprotección de los hijos se ha convertido en uno de los principales problemas por los cuales los padres y alumnos amenazan y agreden a los docentes.[[12]](#footnote-12)

En los últimos años, las agresiones contra profesores se han incrementado de forma dramática, desde mensajes violentos y amenazas a través de redes sociales, hasta agresiones físicas y materiales como golpes, insultos y ataques contra la propiedad como sus autos, son situaciones que los maestros enfrentan diariamente sobre todo en zonas de marginación y de alto grado de conflictividad.[[13]](#footnote-13)

Tales situaciones afectan de manera muy negativa no solo al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también al profesorado, pues esa conflictividad llega a alcanzar cotas de la violencia real, de alta intensidad, que es necesario atender, si de verdad queremos mejorar el nivel educativo de este país.

Es cierto, existen algunos maestros que abusan de su poder para humillar y maltratar a los alumnos, sin embargo y afortunadamente estos no constituyen la regla sino la excepción, pues por lo general, los maestros son personas éticas, comprometidas con la enseñanza de sus alumnos, y contrario a lo que se piensa, a pesar de ser buenos en su trabajo, son víctimas de acoso constante por parte de padres de familia, de otros maestros, directivos y por parte de sus propios alumnos, generando problemas de ansiedad, depresión y desánimo.

Desde nuestra perspectiva, la cultura de la paz y la tolerancia deben permear en el sistema educativo mexicano, sin embargo, esta no debe ser entendida como una espiral en la que el padre de familia o el alumno siempre tienen la razón y el maestro se ve cada vez más debilitado, dejando de lado su papel de formador respetado y anulando cada vez más su autoridad dentro del aula.

Sostenemos que la educación se construye primordialmente en casa, y que el respeto hacia los otros es una responsabilidad de los padres de familia, cuyos valores se ven reflejados en el comportamiento de los hijos. Crememos también que la figura del maestro debe estar protegida sobre todo en casos de conflicto grave, pues sin esa mínima protección por parte de la autoridad el educador, difícilmente podrá cumplir con su misión de enseñar.

De ahí que la iniciativa de reforma que hoy proponemos busca generar condiciones de armonía, entre alumnos y maestros estableciendo obligaciones de respeto entre ellos, pero sobre todo estableciendo mecanismos para que las autoridades educativas estatales gestionen de la mejor manera la conflictividad entre alumnos docentes y padres de familia.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-**  Se reforman los artículos 7 y 88 de la Ley Estatal de Educación para quedar como siguen:

ARTICULO 7°.- La educación que impartan el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados, los órganos desconcentrados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines y criterios establecidos por el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, los siguientes:

***I…***

***VI…***

***VII. Fomentar las medidas necesarias para la protección y cuidados de las y los alumnos, personal docente, administrativo, directivo y/o manual, para preservar su integridad física, emocional psicológica y social, propensas a detectar, prevenir y evitar conductas violentas , que atente en contra del desarrollo y competencias individuales, sociales e integridad física de las y los alumnos. Así mismo preservar la integridad física, emocional, psicológica y social del personal docente, administrativo, directivo y/o manual para evitar situaciones que puedan afectar el desarrollo de su labor, la convivencia sana y armoniosa, sobre una base de respeto y dignidad.***

***VII. Promover, fomentar, impulsar en los educandos, madres y padres de familia una cultura de paz, a través de técnicas de mediación y prácticas restaurativas para la solución de conflictos derivados del ámbito escolar.***

ARTÍCULO 88.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o representación legal:

***I…***

***VII…***

**VIII.**  ***Deber de respeto hacia los docentes, directivos, administrativos y personal manual con el fin de tener un ambiente sano y armonioso entre el personal de la institución, los padres de familia y los alumnos.***

***IX. Las madres y padres de familia evitarán ser incitadores de problemáticas por cuestiones de inconformidad, desacuerdo, y otras sus análogas dentro y fuera de la institución, a través de mecanismos y vías no institucionales. En todo caso los problemas o conflictos se arreglarán con base en el diálogo con las autoridades correspondientes de cada plantel educativo sin emplear actividades que produzcan desprestigio para la institución, sus docentes, directivos, administrativos y/o manuales teniendo por consecuencia un ambiente insano para los alumnos y personal educativo.***

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-**Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicito que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 6 de noviembre de 2019.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, A FIN DE REFORMAR EL ARTICULO 399 Y ADICIONAR LOS ARTICULOS 399 BIS Y 399 BIS 1 AL CODIGO PENAL DEL ESTADO, EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

Las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los Artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este Honorable Pleno del Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 399 y adicionar los artículos 399 Bis y 399 Bis 1 al Código Penal del Estado, en materia de delitos contra la fe pública, bajo la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

La fe pública se define como la garantía que impone el Estado en determinados hechos que interesan al derecho; de ahí que deba considerarse como la seguridad jurídica que da quien ejerza dicha fe pública tanto al Estado como al particular, ya que al determinarse que un acto se otorgó conforme a derecho y sobre todo que lo relacionado con él es cierto, contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa y causa efectos.

Esta acción le corresponde al Ejecutivo del Estado, quien a su vez tiene la facultad de delegarla en profesionales del derecho en virtud de la patente de función notarial que les es otorgada, previa satisfacción de los requisitos legales establecidos, para reconocérseles como Notario Público.

La función notarial es un conjunto de actividades que el notario realiza para asegurar el mejor desempeño de las voluntades personales y garantizar la seguridad jurídica en el ejercicio de una función autenticadora; es decir, se le demanda autenticar actos y hechos jurídicos que así lo requieran por su naturaleza o por disposición de la Ley, señalando los principios, las obligaciones y prohibiciones a que está sujeta.

Por ejemplo, un documento autentificado por notario tiene la cualidad especial y privilegiada, la fuerza de la credibilidad, frente a otro que solo se encuentre efectuado sin función autenticadora. El notario otorga un valor al documento notarial, frente a autoridades, frente a terceros, y los efectos que produce para los actos jurídicos que se nos presentan durante la vida, ha tenido un significado relevante en el orden social. Combinando las anteriores, tenemos que la fe pública notarial se traduce en los actos autorizados por el Notario, en su carácter de funcionario facultado por el Estado para dotarlo de autenticidad y de legalidad.

La presente iniciativa tiene su particular fundamento en el estudio realizado con lo relativo a los alcances legales derivados del ejercicio de la fe pública, de los instrumentos, documentos o actos que los notarios realizan, comprueban, afirman y que en muchas ocasiones inclusive son declarados como prueba plena dentro de procedimientos contenciosos en términos de los reglamentos, códigos procesales y otras leyes vigentes en el Estado.

No podemos cegarnos e ignorar que la función pública puede generar y producir efectos negativos, o que incluso puede recaer en presunción de algún delito que pueda ser encuadrado tanto cometido por el Notario Público en el ejercicio de sus funciones, como el del usuario de un servicio notarial en situaciones que, por ejemplo, presente documentación apócrifa que pretenda que le sea "legalizada".

Todos llegamos a conocer o escuchar de hechos injustos y ventajosos que se suscitan por un abuso de la función notarial, cometida por quienes tienen a su cargo la misma.

Existen razones suficientes que consideramos para procurar y mejorar las condiciones que garanticen la profesionalidad, la independencia, la imparcialidad y autonomía del Notario en el ejercicio de la fe pública de que está investido. Asegurar que su actuar siempre será apegado a lo que la ley les mande realizar y que se abstengan a lo que la situación o los involucrados le presenten de manera irregular.

Consideramos que se deben de sancionar ciertas acciones que un Notario Público pudiese cometer como por ejemplo: que haga constar en escritura pública una propiedad a nombre de una persona física o moral, a sabiendas de que pertenece a otra; que haga constar un instrumento mediante el cual se materialice un pacto de usura o cualquier otro que llegase a implicar la comisión de un delito; al que a sabiendas, protocolice un acta constitutiva de una persona moral, que constituya simulación de actos jurídicos, o protocolice un acto que implique la violación a una ley; en fin, todas las malas prácticas que perjudiquen el ejercicio de la fe pública.

Se pretende adicionalmente blindar todos y cada uno de los actos jurídicos que son plasmados y protocolizados en los libros, para que así, lleguen a generarse documentos firmes e indubitables para todos los efectos contra terceros.

Tenemos que salvaguardar a toda costa el interés y bien público sobre cualquier interés privado ilegítimo. Los artículos 155 y 156 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila indican que “*Los Notarios serán responsables civil, penal y administrativamente de los daños y perjuicios que por ignorancia, negligencia, dolo o culpa ocasionen a las partes o a terceros en el ejercicio de su función*” … “*De la responsabilidad penal los Notarios son responsables por los delitos que cometan con motivo del ejercicio de su función. En consecuencia, quedarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades penales en todo lo concerniente a los actos y omisiones delictuosos en que incurran”.* En base a esto se propone tipificar como delitos acciones cometidas o que puedan cometer los notarios públicos en contra de personas físicas o morales.

Con esta propuesta buscamos establecer una tranquilidad social para las personas que tengan una interacción con el estado, con las leyes y con la justicia que todos buscamos cuando tenemos que atender un asunto jurídico legal con servidores públicos que de antemano tenemos que dotar de confianza y credibilidad.

Es por eso, Diputadas y Diputados que se presenta ante este Honorable recinto el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se reforma el primer párrafo del artículo 399 y se adicionan los artículos 399 Bis y 399 Bis 1 del Código Penal del Estado, para quedar como sigue:

**Artículo 399. (Usurpación de la calidad de notario público)**

Se impondrá de dos a siete años de prisión, de doscientos a cuatrocientos días multa, suspensión de tres a siete años del derecho de obtener patente de notario público, e inhabilitación de cuatro a ocho años para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en una entidad oficial del Estado o de sus municipios, a quien se ostente o se haga pasar como notario público y realice un acto propio de esa calidad, sin tenerla **o cuando la misma le hubiese sido revocada o suspendida temporalmente**, perjudicando a una o más personas **físicas o morales** en uno o más de sus bienes jurídicos.

….

**Artículo 399 Bis. (Delitos cometidos por notario público)**

**Se impondrán las mismas penas marcadas en el primer párrafo del artículo 399, al notario público que aunque no encuentre ningún beneficio económico:**

1. **Haga constar en escritura pública una propiedad o posesión a nombre de una persona física o moral, a sabiendas de que pertenece a otra;**
2. **Haga constar en un instrumento mediante el cual se materialice un pacto de usura desproporción económica;**
3. **Haga constar en un instrumento mediante el cual implique la violación de una ley o la comisión de un delito; y**
4. **Protocolice una simulación de actos jurídicos sin que existan o estén presentes ambos o alguno de los involucrados.**

**Artículo 399 Bis 1. (Delitos cometidos por particulares)**

**Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientos días multa, a quien proporcione a un notario público, documentación apócrifa, información o datos falsos para que se hagan constar en un instrumento público, sobre hechos o actos jurídicos destinados a crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones propios o de terceros.**

**T R A N S I T O R I O S.**

**PRIMERO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, noviembre del 2019.**

**DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL**

**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL**

**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS**

**DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA DIP. JESUS ANDRES LOYA CARDONA**

**DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZBURCIAGA**

**DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO DIP. JESÚS BERINO GRANADO**

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO A FIN DE REFORMAR EL ARTICULO 399 Y ADICIONAR LOS ARTICULOS 399 BIS Y 399 BIS 1 DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA, EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR LA QUE SE MODIFICAN Y AGREGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y A LA LEY DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON LA FINALIDAD DE PLASMAR EL TÉRMINO MOVILIDAD EN LA NORMA Y ESTABLECER ACCIONES REFERENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL EN EL ESTADO, Y**

**CONSIDERANDO**

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece que la movilidad voluntaria es un derecho que consiste en el libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura.

Que el fenómeno de movilidad no es exclusivo de las grandes ciudades, sino de cualquier ubicación geográfica en la que se encuentre una persona y tenga que desarrollar su vida cotidianamente.

Que de conformidad con el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad contenidos en el artículo 1° de nuestra Constitución Federal, la movilidad humana encuentra una estrecha relación con los derechos de acceso a un medio ambiente sano, a la libertad, la igualdad, la seguridad y a la inclusión, como es el caso de las personas con discapacidad, adultas mayores entre otros.1

Que por lo anterior, someto a consideración a esta Honorable Soberanía la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En la actualidad, en diversas leyes y reglamentos, se ha optado por incluir el término movilidad, mismo que tiene como significado, según la Real Academia de la Lengua como el desplazamiento de personas o cosas.

Expandiendo el concepto, movilidad se entiende como un conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se producen en un entorno físico. En ese sentido, movilidad urbana se refiere a la totalidad de trayectos y movimientos que se realizan en una ciudad.

Dichos desplazamientos son realizados por diferentes medios y/o sistemas de transporte automotor, como son las motocicletas, automóviles y autobuses, incluyendo claro está, el tránsito a pie, así como todos aquellos vehículos de propulsión humana como las bicicletas, triciclos, sillas de ruedas entre otros.

En las ciudades de la entidad, se ha visto un incremento considerable de población en los últimos años, pero a la par de ese crecimiento poblacional, las políticas públicas en materia de movilidad simplemente se están quedando atrás, requiriéndose acciones concretas para solucionar dichos conflictos.

Los problemas de movilidad que existen en nuestra entidad se deben a la poca o nula atención de las autoridades competentes en la materia, siendo que para que una ciudad tenga crecimiento económico, social y ecológico, la infraestructura de las carreteras, calles, edificios, banquetas, áreas peatonales, rampas y accesos para personas con discapacidad y personas de la tercera edad deben encontrarse siempre en óptimas condiciones.

Esto último hace ver que movilidad es sinónimo de accesibilidad en el tema de políticas públicas, sin embargo en ciertas calles o avenidas de las ciudades de Coahuila, loa ayuntamientos se esmeran en la reparación de la carpeta asfáltica cuando ésta se daña, mientras que las banquetas y rampas de acceso a personas con discapacidad se encuentran en pésimo estado.

Para dar sentido práctico a lo que se pretende establecer en la norma, movilidad no solo es el desplazamiento de personas y cosas en algún país o Estado, sino también, el de dar certeza a todos aquellos grupos vulnerables de la sociedad, tal como las personas con discapacidad, personas de la tercera edad y por su condición, mujeres en estado de gravidez. La infraestructura relacionada a la accesibilidad de los grupos ya mencionados se debe encontrar en excelentes condiciones.

Además, las políticas de Estado también deben estar relacionadas al fomento de la Bici cultura, tal como lo establece el artículo 201, 202, 203 y demás relativos de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, donde no solo impulsa la actividad física mediante el uso de la bicicleta, sino también, genera conciencia a la ciudadanía sobre el cuidado del medio ambiente. En ese sentido, al Gobierno le corresponde crear, reparar o habilitar las ciclovías que se encuentran en las distintas ciudades de la entidad.

Como podemos observar, es que las ventajas de implementar políticas públicas relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura vial, atraen beneficios en efecto dominó, de tal manera que, de llevarse a cabo dichas acciones, no habrá obstáculos para que exista el libre tránsito de todas y todos aquellos que habitan en nuestro Estado. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, nos vemos en la necesidad de tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía y puedan ejercer su libertad de tránsito y por medio de la norma, hacer valer ese derecho para beneficio de todas y todos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento con la fracción IV del artículo 21 y la fracción I del artículo 152 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, así como la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, sometemos ante esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

**DECRETO**

**PRIMERO. – SE MODIFICA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 88, ASÍ TAMBIÉN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 99 Y MODIFICÁNDOSE SUS FRACCIONES II Y V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZAPARA QUEDAR COMO SIGUE:**

ARTÍCULO 88.- …

…

XI. De Desarrollo Urbano Infraestructura y **Movilidad**;

…

ARTÍCULO 99.- La Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y **Movilidad** conocerá de los asuntos relacionados con:

I. …

II. Comunicaciones y trasporte público de pasajeros y de carga**, así como de vehículos automotores y no automotores**;

III al V; …

VI. Mejoramiento de la infraestructura de **las vías y obras públicas existentes, reparación y/o construcción de accesos para personas con discapacidad, de la tercera edad, mujeres en periodo de gestación; y**

VII….

**SEGUNDO. – SE AGREGA LA FRACCIÓN V Y UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

2. …

Del I al IV …

**V. Las rampas y accesos para personas con discapacidad, de la tercera edad y mujeres en periodo de gestación.**

**Habiendo daños significativos en los accesos y vías mencionadas en las fracciones anteriores, el Estado deberá implementar las acciones necesarias para la reparación y/o habilitación de las mismas, exceptuando las de competencia Federal.**

**….**

**TRANSITORIO**

**ÚNICO. –**  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

***ATENTAMENTE***

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

Fuente:

1. <http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla-Movilidad-Vivienda-DH.pdf>

**HOJA DE FIRMAS QUE ACOMPAÑAN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y AGREGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y A LA LEY DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON LA FINALIDAD DE PLASMAR EL TÉRMINO MOVILIDAD EN LA NORMA Y ESTABLECER ACCIONES REFERENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL EN EL ESTADO.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 6º DE LA LEY PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE INCORPORAR EL PRINCIPIO DE AUTOSUFICIENCIA EN LA OBSERVANCIA, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY Y LOS PROGRAMAS SOCIALES.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, conjuntamente con las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente iniciativa mediante la cual se adiciona la fracción VII del artículo 6º de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incorporar el principio de autosuficiencia en la observancia, interpretación y aplicación de la ley y los programas sociales, la cual se presenta bajo la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

La prosperidad de un Estado se constituye a partir del bienestar y calidad de vida de su gente. Ante ello, el gobierno emerge como un ente cuya función radica en propiciar las condiciones que permitan el desarrollo personal, económico, cultural y social de su población en igualdad de condiciones, en un ambiente de seguridad y estabilidad. Esta tarea se enfrenta a un reto mayúsculo frente al fenómeno de la marginación y la exclusión social.

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural asociada a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, esto trae en consecuencia que las comunidades marginadas enfrenten escenarios de elevada vulnerabilidad social cuya mitigación escala del control personal o familiar.

En este contexto, la intervención del Estado resulta indispensable para combatir la marginación, la exclusión social y la desigual distribución del progreso; es mediante la implementación de los programas sociales que el Estado proporciona a la población más vulnerable los satisfactores básicos de subsistencia para promover la inclusión, el goce y ejercicio de los derechos sociales.

Sin embargo, el éxito en la aplicación de los programas sociales debe verse en el impacto a largo plazo en la vida de los beneficiarios. Históricamente ha quedado demostrado que una política pública basada en el asistencialismo puro es insuficiente para combatir el problema de la pobreza.

Considerar a las familias o personas exclusivamente como receptores de beneficios ha sido una tendencia que ha limitado indirectamente la superación de la pobreza y ha promovido la falta de reconocimiento efectivo de las capacidades de los mismos para empoderarse y realizar un cambio en su calidad de vida.

Quienes suscribimos la presente iniciativa consideramos que las personas que son sujetos de alguna asistencia mediante los programas sociales deben ser parte no solo de la entrega de un apoyo o beneficio ilimitado, sino que deben ser parte de un proceso de acompañamiento para la construcción de cambios personales y familiares que repare, reconstruya y ayude a consolidar sus aprendizajes.

En ese tenor, la presente iniciativa pretende incorporar dentro de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza, el principio de autosuficiencia en los programas sociales, a fin de evitar la dependencia y orientar los mismospara que quienes son beneficiarios superen sus limitaciones o carencias y alcancen gradualmente la autosuficiencia.

La autosuficiencia es la habilidad social y económica de un individuo, familia o comunidad para satisfacer las necesidades básicas (incluyendo protección, alimentos, agua, vivienda, seguridad personal, salud y educación) de manera sostenible y con dignidad. La autosuficiencia, como un objetivo programático, se refiere al desarrollo y fortalecimiento de los medios de vida sostenibles de las personas y la reducción de su vulnerabilidad y dependencia a largo plazo de la asistencia humanitaria o externa.

Con este principio como uno de los ejes centrales de la aplicación e interpretación de la ley, esperamos conseguir un enfoque gradual basado en las capacidades y las correspondientes necesidades de apoyo identificadas en cada grupo o persona a fin de reducir la vulnerabilidad y fortalecer la provisión de medios de vida sostenibles.

Cuando hablamos de desarrollo social hablamos de derechos sociales universales. Los programas y acciones en torno a estos derechos deben dirigirse a empoderar a la gente para hacerlos valer directamente. Las políticas públicas vistas desde una perspectiva de derechos y no meramente asistencialista son clave para el desarrollo progresivo de la sociedad y las familias.

Reconocer e impulsar la capacidad de cada persona supone afianzar una relación horizontal de alianza con el gobierno, vital tanto para superar la diversidad de pobrezas que coexisten, como también para entregar a cada uno las herramientas que faciliten el acceso a mayores oportunidades de desarrollo de forma sostenible y duradera.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se adiciona la fracción VII al artículo 6º de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 6. …**

**I. a VI …**

**VII. Autosuficiencia: Como parte del desarrollo a largo plazo, los programas sociales implementados por el Estado y los municipios deberán estar orientados a superar las limitaciones o carencias y conducir gradualmente a alcanzar la autosuficiencia de los beneficiarios.**

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 5 de noviembre de 2019**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 6º DE LA LEY PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE INCORPORAR EL PRINCIPIO DE AUTOSUFICIENCIA EN LA OBSERVANCIA, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY Y LOS PROGRAMAS SOCIALES.

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, el día 14 del mes de febrero de 2018, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°; así como la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en sus artículos 7° y 8°, disponen que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La Constitución General de la República Mexicana y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, reconoce el derecho humano a una tutela judicial efectiva, entendido como el derecho de acudir a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella, a través de un proceso en que se respeten ciertas formalidades y se dicte una sentencia con efectos determinados y de cumplimiento obligatorio para las partes, en estricto apego a las exigencias que la propia Constitución consagra en beneficio de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción.

Por otra parte, el derecho positivo mexicano, reconoce el derecho a que la administración de justicia esté a cargo de entes expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De igual modo, reconoce que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. En tal contexto, se pueden prever mecanismos alternativos de solución de controversias.

Ergo, este derecho se hace valer cuando surgen controversias en las relaciones que se generan entre los trabajadores y empleadores, solo entre aquéllos o solo entre éstos, en los que contienden intereses opuestos, ya sea por un desequilibrio entre ambos o por estimar que un derecho ha sido vulnerado en ocasión o con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales de trabajo. En tal virtud, el derecho mexicano, tiene por objeto y fin el reconocimiento positivo convencional y constitucional de los derechos humanos, por tanto, al existir un vínculo íntimo entre los derechos humanos y los procedimientos judiciales, así como los medios alternativos de solución de conflictos de cualquier naturaleza, encuentran en el principio de progresividad el contexto propicio para desarrollar su efecto útil.

En esa tesitura, el Estado Mexicano se encuentra en un importante esfuerzo por modernizar la impartición de justicia en todos los ámbitos de las relaciones humanas, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva de todas las personas, por ende, extendió sus alcances a la materia laboral con la publicación en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, generando una profunda reforma al sistema de justicia laboral que se lleva en este momento.

Que tal reforma implica una amplia revisión de las instituciones responsables de garantizar el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva y de los procedimientos contenidos en el derecho procesal del trabajo los últimos cien años, ya que la competencia para conocer y resolver éstos conflictos en toda la Federación Mexicana ha correspondido durante un siglo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, periodo en el que se han erigido como garantes de la tutela judicial efectiva en materia laboral. Empero, las condiciones actuales del sistema de impartición de justicia en nuestro país se encuentran en una constante progresividad, sin que con ello se pierda de vista su carácter tutelar y social.

En consecuencia, la presente iniciativa se ha forjado con el objeto de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una tutela judicial efectiva, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin perder de vista la naturaleza social y el carácter tutelar que revisten el derecho del trabajo; por lo tanto, las adecuaciones legislativas que propone la presente iniciativa proveen un modelo de justicia que privilegia la conciliación, mejorando la calidad y legitimidad de los procedimientos conciliatorios, dando coercitividad a las sentencias que deriven del nuevo entre en creación, el cual buscara el equilibrio en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, en principio los trabajadores, las micro y pequeñas empresas, y otros como las mujeres cuando se vulneran las normas de trabajo por su condición de género, preferencias sexuales, niñas y niños, personas adultas o en situación de discriminación.

Por tanto, se propone un sistema de justicia laboral innovador que brinde certeza jurídica a las y los trabajadores, y patrones, permitiendo elevar la productividad y competitividad económica del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como la calidad de vida de las familias coahuilenses. Bajo ese contexto, en la presente se precisarán las modificaciones propuestas al sistema de justicia laboral en el Estado, a partir de la premisa fundamental establecida por la reforma constitucional del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en el rubro de la función conciliatoria.

En la función conciliatoria, como instancia prejudicial, deberán acudir las y los trabajadores y patrones, resultando en términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una etapa obligatoria para la solución de sus conflictos. Para el efecto anterior, el Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto al Título específico sobre medios alternativos de solución de controversias en materia laboral, estará a lo establecido en los procedimientos de conciliación y de selección de conciliadores que se determinará por la Ley en la materia. No obstante, atendiendo a la reforma constitucional en materia laboral, la etapa prejudicial de conciliación deberá contar con las características del principio de confidencialidad; de validez de los convenios, con efecto vinculantes con las partes; carácter de cosa juzgada de los convenios celebrados en la instancia conciliatoria; y un riguroso proceso de examinación y selección de los funcionarios conciliadores, en virtud de la naturaleza de las determinaciones en su presencia.

La reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, estableció que antes de acudir a los tribunales laborales, las y los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. Indicando que en el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, como un organismo público descentralizado especializado e imparcial, los cuales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, contando con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; mismos que se deberán regir por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad; y su integración y funcionamiento se determinará hasta en tanto se ejecuten las reformas que corresponden a la Ley en la materia.

De igual manera, el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria, se efectuará en los términos del régimen transitorio que determine la reforma o creación de la ley en la materia, ya que se ha determinado que en toda la nación mexicana opere un procedimiento de conciliación laboral homologado; en todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita, permitiendo subsecuentes audiencias de conciliación, sólo con el acuerdo de las partes involucradas en conflicto de naturaleza laboral. El efecto y las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada y ejecución serán establecidos por la Ley que se expida en la materia.

En la reforma constitucional se estableció que la creación de los Centros de Conciliación a nivel local, fueran como organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal, para prestar el servicio público de conciliación. Por ende, obedeciendo al precepto de la Carta Magna, se propone la creación del Centro de Conciliación Laboral en el Estado de Coahuila de Zaragoza, como organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, sectorizado a la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y plena autonomía técnica y de gestión para prestar este servicio público de interés general y trascendencia social, el cual operará con el servicio público de conciliación en todo el Estado, a través de Centros regionales con una competencia territorial.

Lo anterior, en virtud que la conciliación es conceptuada como un medio alterno de solución de conflictos fundamental para la impartición de justicia en sentido amplio, evitando la intervención de los órganos jurisdiccionales en asuntos que pueden ser resueltos a través de la negociación entre las partes. En consecuencia, la conciliación será prestada por el gobierno del Estado, como un servicio público por entidades con naturaleza jurídica de organismos descentralizados,

Al crearse el Centro de Conciliación, en los términos que se anteponen, debe establecerse que el órgano de gobierno, para su administración y vigilancia, se integrará por diez personas como miembros propietarios con sus respectivos suplentes, para tal efecto, los suplentes serán designados por los miembros propietarios del citado órgano, para cubrir sus ausencias temporales de aquéllos; teniendo todos los nombrados cargo honorífico, por lo que sus titulares no recibirán emolumento alguno por su desempeño.

En la integración del órgano de gobierno del organismo público descentralizado que se crea mediante el presente Decreto, se debe procurar la participación de la ciudadanía, la Secretaría de Finanzas, organismos de la sociedad civil, y demás de naturaleza análoga que tengan relación con el objeto del organismo. Sin soslayar, respecto a la voz y voto de los ciudadanos que integren el órgano de gobierno, tendrán las limitantes que establece la reforma en materia laboral de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en la autonomía que se le confiere al Centro de Conciliación, la cual será determinada en la Ley que se expida en esta materia.

En tal sentido, se contempla en la presente iniciativa, la integración del órgano de gobierno del Centro de Conciliación Laboral, en los siguientes términos: cuatro integrantes del gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales serán las o los titulares de la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Finanzas, Procuraduría de la Defensa del Trabajo y Director General del Centro de Conciliación, del Estado de Coahuila de Zaragoza; dos representantes de las principales organizaciones estatales de cámaras empresariales; y dos integrantes de las organizaciones de trabajadores más representativas a nivel estatal.

Dicho órgano de gobierno, tendrá entre otras facultades, el de emitir los lineamientos y convocatoria para seleccionar a las personas que deberán fungir como conciliadores en los términos de las disposiciones aplicables.

El organismo creado por la presente Ley, queda sujeto al control y vigilancia del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, así como por Secretaría del Trabajo a la que se encuentra sectorizado. La rendición y revisión de las cuentas públicas del Centro de Conciliación, quedan sujetas a la fiscalización del Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En tal contexto, el Ejecutivo del Estado determina, que atendiendo al ámbito de su competencia, las relaciones con el propio Ejecutivo se realicen a través de la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza, por ser ésta la dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada, por tener sectores definidos, relacionados con las atribuciones, funciones y objetivos afines con tal Secretaría.

En referencia al párrafo que antecede, se establece que la o el Secretario del Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza formará parte de su órgano de gobierno y lo presidirá. De esta forma, la sectorización al Ejecutivo permitirá mantener al organismo descentralizado vinculado a él, pero sin el ejercicio directo de su poder de mando natural, permitiendo a tal entidad realizar las funciones determinadas en su objeto.

Así mismo, se prevé que el Centro de Conciliación cuente con un órgano interno de control, el cual dependerá de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con las facultades establecidas en la Constitución Local, en la ley Orgánica de la Administración Pública para estos órganos de control interno.

Para observar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el presente Decreto, el régimen transitorio de esta iniciativa propone que el Centro iniciará sus funciones de conciliación a la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en la que se establezca el procedimiento que habrá de observarse en la instancia conciliatoria y en los términos que en la misma se establezcan.

Así mismo, el Congreso del Estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Secretaría del Trabajo, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las adecuaciones presupuestarias necesarias para dotar de los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes, para el cumplimiento del presente decreto, en términos de las disposiciones aplicables.

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia procedimos al análisis de la iniciativa que se dictamina, tomando como punto de partida el nuevo marco constitucional y legal en materia de justicia laboral que se instauró en nuestro país a partir de la entrada en vigor de la reforma a nuestra Constitución General en febrero de 2017.

En este sentido, encontramos una reforma integral que busca garantizar la tutela judicial efectiva en la materia, para lo cual redefine el sistema de justicia, modificando el régimen de competencias de las autoridades encargadas de su impartición, sin dejar de lado la importantísima actividad de la conciliación en la materia.

En este sentido, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, desaparece las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje, para dar paso a nuevas instituciones especializadas en la fase conciliatoria y en la impartición de justicia.

Así en relación a la substanciación y resolución de los conflictos, las nuevas disposiciones establecen que: *(…)* “*[l]a resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de* ***los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas****, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.*

Por su parte en cuanto a la conciliación se fija que: “***Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente****.* ***En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.*** *(…)”*

*“La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.”*

Como ya hemos referido con anterioridad, entre las principales innovaciones y bondades de la reforma señalada se encuentra el separar la conciliación y la administración de la justicia laboral, creándose instituciones especializadas para conocer de los procedimientos correspondientes, lo cual sin duda alguna coadyuva a que exista una justicia laboral más eficiente, pronta y expedita.

En este tenor, es que para quienes dictaminamos la iniciativa objeto de análisis, la misma resulta apegada a las bases y estándares previstos en la Constitución General, puesto que mediante ella se crea la instancia que se encargará de la función conciliatoria en el ámbito local.

Así, la iniciativa prevé la instauración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, entidad, encargada tal y como su nombre lo señala, de prestar el servicio público de conciliación para la pronta y eficaz solución de los conflictos derivados de una relación laboral entre trabajadores y empleadores en el orden local, tendiente a conseguir un equilibrio entre los factores de la producción.

Ajustándose a los estándares constitucionales, se dota al centro de la naturaleza de un organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, que contará con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión y sujetará su actuar a los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

La ley que se plantea asimismo prevé las atribuciones del organismo entre las cuales se encuentran:

* Prestar el servicio público de conciliación en los conflictos laborales entre los trabajadores y los empleadores en el ámbito local.
* Remitir los informes y documentos que soliciten los tribunales laborales o cualquier otra autoridad legalmente constituida, y
* Expedir las copias certificadas de los convenios y demás documentos que se encuentren en sus archivos, previa solicitud de los usuarios que acrediten su personalidad e interés jurídico en el asunto.

El proyecto de nueva ley también establece lo relativo la administración, organización y funcionamiento del centro, cuestiones que del mismo modo encontramos adecuadas, puesto que las disposiciones correspondientes son conformes a lo previsto por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, ordenamiento que regula la creación, integración, funcionamiento, control, evaluación, fusión y extinción de las entidades que integran la Administración Pública Paraestatal del Estado de Coahuila de Zaragoza, como es el caso de los organismos públicos descentralizados.

Así, una vez analizado el contenido y alcances de la iniciativa, los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, estimamos que la propuesta cumple con los parámetros de necesidad, racionalidad, idoneidad y proporcionalidad que deben tomarse en consideración a efecto de emitir cualquier medida normativa.

Por último, quienes dictaminamos, acordamos hacer algunas modificaciones al proyecto normativo, algunas sustantivas y otras más de forma, a efecto de seguir parámetros de técnica legislativa.

Por lo que hace a las primeras, estimamos necesario fortalecer la integración de la Junta de Gobierno del Centro, integrando a todas las autoridades que tienen relación con la materia laboral de acuerdo a sus facultades y atribuciones legales, asimismo determinamos la necesidad de incorporar un mayor número de representantes obrero- patronales.

Así la integración que se propone en el presente dictamen quedaría de la siguiente manera:

La Junta de Gobierno se integra por:

**I.** La persona titular de la Secretaría del Trabajo, quien ocupará la presidencia.

**II.** La persona titular de la Dirección General del Centro, quien ocupará la secretaría técnica.

**III.** Vocales:

1. La persona titular de la Secretaría de Gobierno.
2. La persona titular de la Secretaría de Finanzas.
3. La persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
4. Dos representantes de las cámaras empresariales en el estado.
5. Dos representantes de las organizaciones de trabajadores con mayor presencia o afiliados en el estado.

Por las consideraciones antes expuestas y en virtud de que la expedición de esta norma obedece al mandato emanado de la Constitución General de la República, establecido en los artículos 123 y segundo Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, es que sometemos a su consideración, análisis y en su caso aprobación el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

**ÚNICO:** Se crea la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza,para quedar como sigue:

**LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1.** Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, interés general y observancia obligatoria en todo el Estado y tienen como propósito establecer la organización y funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Se crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría del Trabajo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene por objeto prestar el servicio público de conciliación para la pronta y eficaz solución de los conflictos derivados de una relación laboral entre trabajadores y empleadores en el orden local, tendiente a conseguir un equilibrio entre los factores de la producción.

**Artículo 2.** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza tendrá su domicilio legal en la ciudad de Saltillo, y establecerá oficinas en el territorio del Estado que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objeto, las cuales contarán con una competencia territorial.

**Artículo 3.** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, contará con las unidades administrativas y los servidores públicos que requiera para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, y sus atribuciones estarán contenidas en esta ley, en su reglamento interior y demás disposiciones aplicables.

Las relaciones de trabajo entre el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza y su personal se regirá en los términos del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contará con un servicio profesional de carrera de conformidad con lo previsto en las disposiciones de la materia.

**Artículo 4.** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

1. Centro: El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza.
2. Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Constitución: La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
4. Ley: Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza.
5. Junta de Gobierno: El Órgano de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 5.** En la operación del Centro prevalecerán los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO**

**Artículo 6.** El Centro tiene las siguientes atribuciones:

I. Prestar el servicio público de conciliación en los conflictos laborales entre los trabajadores y los empleadores en el ámbito local.

II. Remitir los informes y documentos que soliciten los tribunales laborales o cualquier otra autoridad legalmente constituida.

III. Expedir las copias certificadas de los convenios y demás documentos que se encuentren en sus archivos, previa solicitud de los usuarios que acrediten su personalidad e interés jurídico en el asunto.

IV. Las demás que le confiera la Ley Federal del Trabajo,la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos que le sean aplicables.

**CAPÍTULO TERCERO**

**DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO**

**Artículo 7.** La administración del Centro estará a cargo de una Junta de Gobierno y del o la titular de la Dirección General.

**Artículo 8.** La Junta de Gobierno se integra por:

1. La persona titular de la Secretaría del Trabajo, quien ocupará la presidencia.
2. La persona titular de la Dirección General del Centro, quien ocupará la secretaría técnica.
3. Vocales:
4. La persona titular de la Secretaría de Gobierno.
5. La persona titular de la Secretaría de Finanzas.
6. La persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
7. Dos representantes de las cámaras empresariales en estado.
8. Dos representantes de las organizaciones de trabajadores con mayor presencia o afiliados en el estado.

Los representantes a que se refieren los incisos d) y e) de la fracción III, serán designados previo acuerdo entre las cámaras empresariales, así como de las organizaciones de trabajadores más representativas y durarán en su encargo tres años. En caso de ausencia definitiva de alguno de estos representantes, ocupará el cargo su suplente, hasta concluir el periodo correspondiente.

En ningún momento quedarán imposibilitados los representantes empresariales y de los trabajadores, para desempeñar el cargo por períodos sucesivos o discontinuos.

**Artículo 9.** Los integrantes de la Junta de Gobierno podrán designar suplentes para cubrir sus ausencias temporales, mediante oficio dirigido a la o el presidente.

La persona que ocupe la presidencia de la Junta de Gobierno será suplida, en sus ausencias, por la o el Secretario Técnico.

El cargo de suplente será indelegable y no se podrán acreditar representantes de aquel, en las sesiones de la Junta de Gobierno.

Los integrantes de la Junta de Gobierno que hayan nombrado suplente no podrán sustituir al designado originalmente, salvo causa justificada.

Los suplentes de las o los titulares de las Secretarías del Trabajo, de Gobierno y de Finanzas deberán tener, por lo menos, el nivel de Subsecretario, en el caso del o la titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y de quien sea titular de la Dirección General del Centro, deberán ser los que ostenten el cargo inmediato inferior.

Quienes integran la Junta de Gobierno, tanto propietarios como suplentes, antes de tomar posesión de su cargo deberán rendir protesta.

Todos los cargos de quienes integran la Junta de Gobierno serán honoríficos, por lo que no recibirán emolumento alguno por su desempeño.

**Artículo 10.** La Junta de Gobierno deberá celebrar sesiones ordinarias trimestrales.

Podrán celebrarse sesiones extraordinarias cada vez que la persona titular de la presidencia lo estime conveniente o a petición de una tercera parte del total de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Los integrantes de la Junta de Gobierno participarán en las sesiones con voz y voto a excepción de quien ocupe la Secretaría Técnica, quien tendrá voz, pero no voto.

La Junta de Gobierno sesionará válidamente contando con la presencia del titular de la presidencia o su suplente y la mayoría de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes, teniendo la o el presidente voto de calidad en caso de empate.

A las sesiones de la Junta de Gobierno podrá asistir el titular del Ejecutivo del Estado, a quien le corresponderá, en su caso, presidir la sesión con todas las atribuciones del titular de la Presidencia y éste tendrá el carácter de vocal.

**Artículo 11.** Por acuerdo de la Junta de Gobierno en las sesiones podrán participar, como invitados, los servidores públicos y personas expertas que de conformidad con la agenda de temas a tratar sea conveniente, lo harán exclusivamente durante el desahogo de los puntos para los que fueron convocados y no tendrán derecho a voto.

**Artículo 12.** Las convocatorias y el orden del día se comunicarán por escrito especificando el asunto a tratar, con al menos diez días de anticipación tratándose de sesión ordinaria y de un día si se trata de sesión extraordinaria, indicando en cada caso, lugar, fecha y hora en que se celebrará la sesión, remitiendo la documentación correspondiente.

Las convocatorias para sesiones extraordinarias, indicarán además la justificación o asunto específico que las motive y no podrán tratarse asuntos generales dentro de las sesiones de esta naturaleza.

**Artículo 13.** La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

1. Aprobar el Reglamento Interior del Centro, los manuales, lineamientos, y demás disposiciones administrativas que regulen la operación y el funcionamiento del Centro;
2. Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio profesional de carrera, así como emitir los lineamientos, criterios y convocatoria para la selección de conciliadores del Centro en los términos de las disposiciones aplicables;
3. Aprobar en tiempo los programas anuales y el anteproyecto de presupuesto de egresos y sus modificaciones, así como el informe de resultados respecto del ejercicio anterior que serán presentados por la Dirección General;
4. Promover e implementar mecanismos o programas de capacitación para el personal que lleve a cabo las funciones de conciliación en materia laboral y actividades relacionadas con las funciones del Centro;
5. Aprobar a propuesta de la Dirección General, el establecimiento, reubicación y cierre de oficinas en el territorio del Estado;
6. Autorizar la creación de comités de apoyo y en su caso, con la participación de profesionistas independientes, así como sus honorarios si es necesario;
7. Conocer los informes y dictámenes que presente la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;
8. Aprobar el calendario anual de sesiones;
9. Las demás dispuestas por la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, sus reglamentos y otras disposiciones aplicables en la materia.

**Artículo 14.** La o el Presidente de la Junta de Gobierno contará con las siguientes facultades:

1. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias;
2. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;
3. Ordenar y vigilar el trabajo de los comités que autorice la Junta de Gobierno;
4. Firmar conjuntamente con la o el Secretario Técnico la correspondencia y las actas que se generen de las sesiones; y
5. Las que establezcan las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 15.** La o el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno contará con las siguientes facultades:

1. Convocar a los miembros de la Junta de Gobierno a sesiones ordinarias y extraordinarias, así como elaborar y difundir el orden del día correspondiente;
2. Tomar las votaciones de los miembros presentes en cada sesión;
3. Levantar y autorizar con su firma, las actas correspondientes a las sesiones que celebre la Junta de Gobierno; y
4. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno o quien ocupe la presidencia.

**Artículo 16.** Para ser titular de la Dirección General se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano mexicano con una residencia en el Estado de tres años previos a su nombramiento; y tener pleno uso y goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día de la designación;
3. Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho o abogado;
4. Contar con experiencia profesional de cinco años, así como con conocimientos en materia laboral y de conciliación;
5. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de intereses;
6. Tener modo honesto de vivir, gozar de buena reputación y no haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoriada, por el delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público cualquiera que haya sido la sanción o por algún otro delito intencional que amerite pena de prisión por más de un año; y
7. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables.

**Artículo 17.** La persona que ocupe la Dirección General del Centro será designada por la o el Titular del Ejecutivo del Estado, desempeñará su cargo por seis años y podrá ser ratificado un periodo más, por una sola ocasión. No podrá tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación del Centro, en actividades docentes, científicas, culturales, de beneficencia y de los no remunerados.

En caso de falta absoluta de quien sea titular de la Dirección General, el Ejecutivo del Estado designará a otra persona solo para concluir el periodo señalado en el párrafo anterior, la cual podrá ser ratificada para un segundo periodo.

**Artículo 18.** Serán facultades y obligaciones del titular de la Dirección General del Centro:

1. Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro;

1. Administrar y representar legalmente al Centro, así como delegar su representación;
2. Presentar a la aprobación de la Junta de Gobierno, el proyecto de Reglamento Interior, los manuales, lineamientos y demás disposiciones administrativas para regular la organización, operación y el funcionamiento del Centro;
3. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio profesional de carrera, así como para la capacitación de los servidores públicos que desempeñen la función de conciliadores y demás personal del Centro;
4. Presentar a la Junta de Gobierno, durante el primer trimestre de su gestión para su aprobación, el proyecto de programa institucional que deberá contener al menos, metas, objetivos, recursos, indicadores de cumplimiento y deberá considerar las prioridades y lineamientos sectoriales;
5. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, el programa anual y el anteproyecto de presupuesto correspondiente, así como un informe de resultados respecto del ejercicio anterior. Tanto el programa anual como el informe deberán contener metas, objetivos, recursos e indicadores de cumplimiento;
6. Nombrar y remover a los servidores públicos adscritos al Centro, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás leyes o disposiciones aplicables;
7. Establecer los métodos y prácticas que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del Centro;
8. Supervisar y vigilar que las funciones del personal del Centro se realicen de manera articulada, congruente, eficaz y bajo los más estrictos principios Constitucionales que rigen a los servidores públicos;
9. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas que aseguren la continuidad en la implementación, distribución o prestación de los servicios, o en la realización de los fines para lo cual fue creado el Centro;
10. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el establecimiento, reubicación y cierre de oficinas en el territorio del Estado. El reglamento interior del Centro determinará el ámbito de actuación de tales oficinas;
11. Recabar la información y los elementos estadísticos, que reflejen el estado de las funciones del Centro, a fin de mejorar las gestiones y acciones del mismo;
12. Presentar en las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno, el informe de desempeño de las actividades del Centro, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, y los estados financieros que contemplen los registros patrimoniales de los bienes con que cuente la entidad paraestatal. En el informe y en los documentos de apoyo, se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la dirección con las metas alcanzadas;
13. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el Centro y presentar a la Junta de Gobierno por lo menos dos veces al año, la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano;
14. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, la información y dar acceso a la documentación que le soliciten la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado y el auditor externo, para el cumplimiento de sus funciones;
15. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de comités de apoyo y, en su caso, con la participación de profesionistas independientes;
16. Imponer la multa que corresponda al patrón o patrona por inasistencia a la audiencia prevista dentro del procedimiento del servicio público de conciliación contemplado en la Ley Federal del Trabajo; y
17. Las demás dispuestas por las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables en la materia.

**CAPÍTULO CUARTO**

**DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**Artículo 19.** En la formulación de los planes y programas, el Centro deberá de sujetarse a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, al Plan Estatal de Desarrollo vigente, a los programas sectoriales que deriven del mismo y que por su materia le corresponda su debida observación, así como a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas y demás disposiciones que sean aplicables.

**Artículo 20.** La programación institucional del Centro deberá contener los objetivos, metas, acciones y estrategias a implementar, los resultados económicos y financieros esperados, las bases para evaluar, supervisar y vigilar las acciones que lleven a cabo, la definición de estrategias y prioridades, la eficiencia y racionalización en el ejercicio de los recursos que le fueren asignados, la expresión de programas para la coordinación de sus tareas, así como las previsiones respecto a las posibles modificaciones a sus estructuras.

**Artículo 21.** En la formulación de su presupuesto, el Centro se sujetará a los lineamientos señalados en las leyes de la materia.

La Secretaría de Finanzas otorgará al Centro la percepción de los subsidios y transferencias, en términos del Presupuesto de Egresos del Estado y deberán sujetarse a los controles e informes respectivos.

Asimismo, el Centro solo podrá ejercer su presupuesto hasta por el monto que se le haya autorizado y tiene la obligación de concentrar en la Secretaría de Finanzas los recursos económicos recaudados por cualquier otro concepto que exceda del presupuesto.

**Artículo 22.** El Centro elaborará estados e informes financieros, mismos que previa autorización de la Junta de Gobierno, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en su caso, en la página oficial de internet del Centro, dentro del mes siguiente al cierre de cada informe.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DE LA VIGILANCIA, CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CENTRO**

**Artículo 23.** Corresponde al Ejecutivo del Estado el control, la vigilancia y evaluación del Centro a través de las Secretarías de Finanzas y la de Fiscalización y Rendición de Cuentas; y la coordinación, supervisión y evaluación, por conducto de la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 24.** Para la vigilancia y supervisión del Centro, contará con una Comisaría, cuyo titular será designado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

El o la titular de la Comisaría tendrá las atribuciones señaladas en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión del Centro, debiendo asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones de la Junta de gobierno.

El o la titular de la Comisaría, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, se podrá auxiliar del personal técnico que requiera conforme a la disponibilidad presupuestal.

**Artículo 25.** El Centro también contará con un órgano interno de control que dependerá orgánica y funcionalmente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con las facultades y atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

El órgano interno de control debe contar con las áreas y personal necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.

El Centro proporcionará al titular de su respectivo órgano interno de control, los recursos humanos y materiales que requiera para el ejercicio de las facultades que tiene conferidas.

**CAPÍTULO QUINTO**

**DEL PATRIMONIO DEL CENTRO**

**Artículo 26.** El patrimonio del Centro se integra por:

1. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio;
2. Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Estado para su funcionamiento;
3. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor; y
4. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier título legal.

**Artículo 27.** El patrimonio del Centro o los bienes que le sean asignados, serán destinados a alcanzar el objeto para el cual fue creado. Los bienes que conformen el patrimonio del Centro son del dominio público para todos sus efectos legales y su administración será vigilada por la Secretaría de Finanzas y regulada por la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** La presente Ley entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** El Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Secretaría del Trabajo, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las adecuaciones presupuestarias necesarias para dotar de los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes, para el cumplimiento del presente decreto, en términos de las disposiciones aplicables.

**TERCERO.**La Secretaría del Trabajo, por conducto de su titular, adoptará las medidas pertinentes para la instalación de la Junta de Gobierno. Una vez instalada ésta, el presidente convocará dentro de los siguientes quince días a la primera sesión de trabajo.

En la misma sesión de instalación, la o el Director General del Centro, presentará, para su aprobación, el Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el cronograma y proyecto de convocatoria para el proceso de selección de las y los Conciliadores que integrarán el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos que disponga la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones aplicables.

El Centro, en su primera convocatoria para la selección de conciliadores, privilegiará que se encuentre dirigida al personal que conforma las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.

**CUARTO.** El Centro iniciará sus funciones de conciliación a la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en la que se establezca el procedimiento que habrá de observarse en la instancia conciliatoria y en los términos que en la misma se establezcan.

**QUINTO.** Los derechos laborales de las y los trabajadores de las instituciones que se vean involucradas en el cumplimiento del presente decreto, deberán respetarse en su totalidad; para ello, las autoridades llevarán a cabo todas las acciones necesarias para garantizarlos.

**SEXTO.** Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 12 de febrero de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Materia de Justicia Laboral, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, el día 14 del mes de febrero de 2018, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Materia de Justicia Laboral, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Materia de Justicia Laboral, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, se basa entre otras, en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

En el marco de la renovación que viene impulsando el Gobierno de la República en el rubro de Justicia Cotidiana, se incluye lo referente a la justicia laboral *“que trata las relaciones de trabajo de las personas con sus empleadores, sean estos particulares u organismos públicos”*[[14]](#footnote-14)*.*

Si bien en México se han realizado en los últimos años importantes esfuerzos por modernizar las instituciones que imparten justicia en el ámbito laboral, resultado en mejoras en materia de conciliación y en un ambiente de diálogo y equilibrio entre los factores de la producción, lo cierto es que se han mantenido prácticamente intactas su estructura y procesos desde su fundación a fines de la década de los años veinte del siglo pasado

Efectivamente, en nuestro país, el sistema de justicia en materia laboral, que en su momento respondió a las demandas del México Post Revolucionario, hoy enfrenta *“un diseño institucional que resiste la renovación y adaptación*”[[15]](#footnote-15).

En consecuencia, el ritmo de la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad. Por tanto, el siguiente paso es avanzar hacia una justicia laboral del Siglo XXI: Moderna y eficiente.

Por ello, tras la presentación de una iniciativa de reformas constitucionales, el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha reforma incorpora nuevos esquemas para la impartición de la justicia en materia laboral. Prevé la creación de órganos jurisdiccionales adscritos a los Poderes Judiciales de la Federación y de los Estados, para administrarla; así como, en un esquema de impulso al uso de los modelos alternativos de solución de controversias, crea instancias ex profesas de conciliación en materia laboral[[16]](#footnote-16), por lo que antes de acudir a aquellos tribunales laborales, las y los trabajadores y patrones deberán asistir a esa instancia de conciliación que en el orden local estará a cargo de Centros de Conciliación como organismos públicos descentralizados especializados e imparciales, los cuales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, contando con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; mismos que regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad; y su integración y funcionamiento se determinarán una vez que entren las disposiciones de la ley en la materia.

Aquella trascendental reforma contribuye al acceso de una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente, lo cual implica una amplia revisión de las instituciones responsables de garantizar el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva y de los procedimientos contenidos en el derecho procesal del trabajo los últimos casi cien años, a la luz de las condiciones actuales del sistema de impartición de justicia en nuestro país, sin perder de vista su carácter tutelar y social.

De ahí la importancia de dicha reforma, puesto que ésta otorga competencia para conocer y resolver de controversias en materia laboral al Poder Judicial de la Federación que asumirá la competencia y facultades que, a la fecha, vienen realizado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como los Poderes Judiciales de las entidades federativas asumirán la competencia y facultades de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; a la par, viene a fortalecer la función conciliatoria en los asuntos del trabajo, mediante la atención de la misma a través de los Centros de Conciliación.

Ahora bien, el régimen transitorio de aquella reforma constitucional estipuló que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones legislativas que correspondan dentro del año siguiente a la entrada en vigor del Decreto, esto es, el 25 de febrero de este año de 2018.

De tal forma, ante el calado del nuevo modelo de impartición y administración de justicia laboral en el país, en Coahuila de Zaragoza, asumimos con responsabilidad la firme determinación de diseñar, implementar y consolidar una profunda transformación del sistema de justicia laboral local, mediante la eliminación de todo elemento que convierta a dicha justicia en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable.

Para la consecución de dicho objetivo, en congruencia con la reforma federal, es indispensable actualizar nuestra legislación para que sea acorde a la realidad laboral nacional y estatal y, en primer término promover las adecuaciones a nuestro texto constitucional para dar cabida a aquel nuevo modelo que se sustenta en los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomía.

La impartición de justicia laboral construida sobre los principios anteriores es determinante para consolidar la democracia, fortalecer las instituciones, garantizar la igualdad de las y los coahuilenses y todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado, a fin de contribuir al desarrollo económico, reforzar las políticas de justicia laboral y fortalecer al Estado Democrático de Derecho. Una justicia laboral efectiva, pronta y expedita dará certeza jurídica a trabajadores y a empleadores. Ello permitirá elevar tanto la productividad y la competitividad económica, así como la calidad de vida de las familias mexicanas y coahuilenses.

Es por lo anterior y en virtud del trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de nuestro Estado, para la armonización de la reforma Constitucional Federal en materia de justicia laboral, que se propone:

1. En la Constitución Política del Estado:

Crear a cargo del Poder Ejecutivo el Centro de Conciliación como organismo público descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con funciones de instancia conciliatoria en conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones.

Incorporar dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado a los Tribunales Laborales, así como añadir dentro de las facultades del mismo, la de resolver las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones en los términos que establezcan las leyes.

Determinar la jurisdicción que tendrán los tribunales laborales del Poder Judicial, así como establecer, en lo concerniente a sus funciones, el reenvío a la legislación secundaria correspondiente.

1. En la Ley Orgánica de la Administración Pública:

Armonizar las atribuciones de la Secretaría del Trabajo, tales como, el coordinar el Centro de Conciliación y vigilar su correcto funcionamiento.

Contemplar dentro del Título Cuarto correspondiente a la Justicia Laboral la creación del organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Centro de Conciliación cuya función será el ser la instancia conciliadora de conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones, antes de acudir a los órganos jurisdiccionales en materia laboral a dirimir sus controversias.

**TERCERO.-** Tal y como se indica en la exposición de motivos de la iniciativa objeto de dictamen, el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A través de esta reforma se incorporan nuevos esquemas para la impartición de la justicia en materia laboral, para lo cual se dispone una nueva e interesante distribución de competencias entre las autoridades impartidoras de justicia en el orden local y federal.

Así, el nuevo marco constitucional en la referida materia, prevé la creación de órganos jurisdiccionales adscritos a los Poderes Judiciales de la Federación y de los Estados, para administrar la justicia.

Otro de los puntos torales de la reforma, es el fortalecimiento de la función conciliatoria, para lo cual se estipula que en aquellos casos en que existan controversias entre patrones y trabajadores, previo a acudir a aquellos tribunales laborales, estos sujetos deberán asistir a una instancia de conciliación que en el orden local estará a cargo de Centros de Conciliación.

Dichos centros, de conformidad al nuevo articulado contemplado en la carta magna, tendrán la naturaleza de organismos públicos descentralizados, especializados e imparciales, los cuales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios y contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Derivado de lo anterior, resulta preponderante armonizar el marco normativo del Estado, a efecto de que el mismo sea acorde con las bases establecidas en la Constitución General.

En este contexto, esta comisión dictaminadora, ha analizado las propuestas de reforma a diversos ordenamientos y de nueva ley que con respecto al tema se han presentado hasta la fecha ante este órgano legislativo, así, de manera primigenia se estudió la reforma a la constitución local y en forma secundaria la iniciativa objeto de este dictamen y la ley que crea el organismo público descentralizado que será el encargado de la conciliación en el Estado.

Durante el estudio de las propuestas, los integrantes de esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, evaluamos con particular atención que las mismas fueran congruentes con las bases constitucionales ahora provistas en el marco federal, así como los fundamentos y consideraciones que las motivan.

En este orden de ideas, quienes dictaminamos coincidimos en la necesidad y oportunidad de las iniciativas planteadas y estimamos que sus contenidos y alcances son también adecuados.

Por lo que hace particularmente a la iniciativa objeto del presente dictamen, observamos que la ley orgánica de la administración pública vigente, ordenamiento que rige el actuar de la administración centralizada y sienta las bases de la paraestatal, contempla por un lado atribuciones de la Secretaría del Trabajo relacionadas con la coordinación, la integración de las Juntas Locales y Especiales de Conciliación y Arbitraje y con la vigilancia de su correcto funcionamiento, y por la otra un apartado relativo a la justicia laboral, que regula lo concerniente a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.

Como es de notarse, estas disposiciones ya no corresponden al nuevo marco legal e institucional derivado de las reformas a la carta magna y de permanecer en estos términos, se generarían importantes antinomias normativas.

En virtud a lo anterior, es que quienes integramos la presente comisión estimamos adecuadas las modificaciones a los artículos 33, 37 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de armonizar las atribuciones de la Secretaría del Trabajo, tales como, el coordinar el Centro de Conciliación y vigilar su correcto funcionamiento y suprimir lo concerniente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje dentro del Título Cuarto correspondiente a la Justicia Laboral, así como incorporar en este apartado legal lo referente a la creación del organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Centro de Conciliación, cuya función será la de ser la instancia conciliadora de conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones, antes de acudir a los órganos jurisdiccionales en materia laboral a dirimir sus controversias.

Por las razones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se **reforman** las fracciones VII y IX del artículo 33 y los artículos 37 y 38, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 33.** ...

**I.** a **VI**. …

**VII.** Elaborar y resguardar los padrones de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de jurisdicción estatal que se encuentren registradas ante las instancias competentes;

**VIII.** …

**IX.** Coordinar el Centro de Conciliación y vigilar su correcto funcionamiento;

**X.** a **XIX.** …

**ARTÍCULO 37.** El Poder Ejecutivo contará con el Centro de Conciliación a que se refiere el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un organismo público descentralizado.

Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

**ARTÍCULO 38.** El Centro de Conciliación debe ser un organismo especializado e imparcial, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con funciones de instancia conciliatoria en conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones, antes de acudir a los órganos jurisdiccionales en materia laboral a dirimir sus controversias.

Su integración, facultades y funcionamiento se determinarán en las leyes y demás disposiciones aplicables.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** El Congreso del Estado, en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo las adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.

**TERCERO.** En los términos que dispongan las leyes, se deberá prever la competencia de los Tribunales Laborales, así como lo relativo a su integración.

**CUARTO.** Para la integración, instalación y operación de los Tribunales Laborales, el Consejo de la Judicatura determinará mediante un proceso de gradualidad, su inicio de operación en los Distritos Judiciales que, conforme a dicho proceso, determine.

**QUINTO.** La reforma relativa a los artículos 37 y 38 de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, continuarán en vigor hasta que concluyan sus funciones las Juntas Locales y Especiales de Conciliación y Arbitraje en los términos de los transitorios del presente decreto y demás disposiciones aplicables.

**SEXTO.**Los procedimientos que se encuentren en trámite una vez que entren en funciones el Centro de Conciliación y los Tribunales Laborales serán concluidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio, en términos de las disposiciones aplicables.

**SÉPTIMO.** En los términos del instrumento de creación del Centro de Conciliación previsto en la presente reforma, se deberá contemplar lo relativo a la integración, facultades y funcionamiento, así como al inicio de sus operaciones.

**OCTAVO.** En tanto se instituye e inicia operaciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el organismo descentralizado a que se refiere el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.

**NOVENO.** Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, deberán remitir al organismo descentralizado que se refiere en el artículo cuarto del presente régimen transitorio, una relación de los emplazamientos a huelga que se encuentren en trámite en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales después de la entrada en vigor del presente decreto.

**DÉCIMO.** Las autoridades competentes y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación que tengan bajo su atención o resguardo, en el ámbito de sus respectivas competencias, al organismo descentralizado, citado en el artículo cuarto del presente régimen transitorio, que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

**DÉCIMO PRIMERO.** Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, presentarán al Titular de la Secretaría del Trabajo y a la autoridad local que corresponda, respectivamente, un plan de trabajo con un plazo máximo de duración de cuatro años para la conclusión de los asuntos en trámite y para la supresión gradual de dichos órganos.

El plan de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, se deberá implementar a partir del inicio de operaciones del Centro de Conciliación y deberá contener indicadores de medición de resultados e impacto por periodos semestrales, correspondiendo la medición de resultados e impacto al Órgano Interno de Control de cada Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

**DÉCIMO SEGUNDO**. El Congreso del Estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las adecuaciones presupuestarias necesarias para dotar de los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes, para el cumplimiento del presente decreto, en términos de las disposiciones aplicables.

**DÉCIMO TERCERO.** Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 12 de febrero de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un párrafo final al Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, le fue turnado el expediente que contiene diversos oficios, emitidos el 21 de marzo del año en curso, mediante los cuales el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, hizo del conocimiento a los 38 Presidentes Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un párrafo final al Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; a fin de cumplir con lo dispuesto por los Artículos 196, fracciones V y VI, y 197 del referido ordenamiento y en los Artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

En esa tesitura, es pertinente mencionar que se comunicó a los 38 Ayuntamientos del Estado sobre la reforma en comento, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 196, fracción IV, y 197 de la Constitución Política del Estado y en los Artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; recibiéndose la opinión de los Ayuntamientos de Acuña, Allende, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Jiménez, Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Pedro, Torreón y Viesca; de los cuales la totalidad emitieron su voto a favor de la reforma, cumpliéndose con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 197 de la Constitución Local. Consecuentemente atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 196 fracción V del referido ordenamiento, debe procederse a la declaración del Congreso con el sentir afirmativo de la mayoría absoluta de los Ayuntamientos.

**SEGUNDO.-** Que dichos oficios fueron turnados a esta comisión, a fin de que emitiera el dictamen respecto a la declaratoria de aprobación de la citada reforma, una vez analizado el expediente de referencia; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que el texto del Artículo 196 de la Constitución Política local, que da el sustento al procedimiento de reforma constitucional, es del tenor literal siguiente:

***Artículo 196.*** *La Ley Suprema Coahuilense puede ser adicionada o reformada por el Congreso del Estado. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del bloque de la constitucionalidad local, deben observarse los requisitos siguientes:*

***I.*** *Iniciativa suscrita por el Gobernador o por uno o varios Diputados, a la que se le dará una lectura y se turnará a la Comisión correspondiente.*

***II.*** *Dictamen de la Comisión respectiva al que se le dará una lectura.*

***III.*** *Discusión del dictamen y aprobación del mismo, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes.*

***IV.*** *Publicación del expediente por la prensa.*

***V.*** *Que la adición o reforma sea aprobada por la mayoría absoluta de los ayuntamientos del Estado.*

***VI.*** *Discusión del nuevo dictamen, que se formará con vista del sentir de los ayuntamientos, la Comisión que conoció de la iniciativa, pronunciándose en sentido afirmativo o negativo, según el sentir de la mayoría absoluta de los respectivos ayuntamientos.*

***VII.*** *Declaración del Congreso, con vista y discusión del dictamen de la comisión.*

**SEGUNDO.-** Que en la sesión celebrada el día 20 de marzo de 2019, el Pleno del Congreso aprobó la reforma para adicionar un párrafo final al Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor literal siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se adiciona un párrafo final al artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 67. …**

**I.** a la **LIV. …**

De conformidad a lo que disponga su ley orgánica, el Congreso del Estado, tratándose de expedición, abrogación o reformas de leyes o decretos en materia municipal, deberá notificarlo a los Ayuntamientos.

**TRANSITORIOS**

**Primero.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y

**Segundo.** Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de Decreto por el que se propone adicionar un nuevo párrafo cuarto al Artículo 173 de la Constitución Política del Estado, recorriéndose el que actualmente ocupa ese lugar a la quinta posición y haciéndose lo propio con los subsecuentes párrafos, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, le fue turnado el expediente que contiene diversos oficios, emitidos el 16 de mayo del año en curso, mediante los cuales el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, hizo del conocimiento a los 38 Presidentes Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la iniciativa de Decreto por el que se propone adicionar un nuevo párrafo cuarto al Artículo 173 de la Constitución Política del Estado, recorriéndose el que actualmente ocupa ese lugar a la quinta posición y haciéndose lo propio con los subsecuentes párrafos, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; a fin de cumplir con lo dispuesto por los Artículos 196, fracciones V y VI, y 197 del referido ordenamiento y en los Artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

En esa tesitura, es pertinente mencionar que se comunicó a los 38 Ayuntamientos del Estado sobre la reforma en comento, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 196, fracción IV, y 197 de la Constitución Política del Estado y en los Artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; recibiéndose la opinión de los Ayuntamientos de Acuña, Allende, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Jiménez, Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, Ramos Arizpe, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Pedro, Torreón y Viesca; de los cuales la totalidad emitieron su voto a favor de la reforma, cumpliéndose con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 197 de la Constitución Local. Consecuentemente atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 196 fracción V del referido ordenamiento, debe procederse a la declaración del Congreso con el sentir afirmativo de la mayoría absoluta de los Ayuntamientos.

**SEGUNDO.-** Que dichos oficios fueron turnados a esta comisión, a fin de que emitiera el dictamen respecto a la declaratoria de aprobación de la citada reforma, una vez analizado el expediente de referencia; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que el texto del Artículo 196 de la Constitución Política local, que da el sustento al procedimiento de reforma constitucional, es del tenor literal siguiente:

***Artículo 196.*** *La Ley Suprema Coahuilense puede ser adicionada o reformada por el Congreso del Estado. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del bloque de la constitucionalidad local, deben observarse los requisitos siguientes:*

***I.*** *Iniciativa suscrita por el Gobernador o por uno o varios Diputados, a la que se le dará una lectura y se turnará a la Comisión correspondiente.*

***II.*** *Dictamen de la Comisión respectiva al que se le dará una lectura.*

***III.*** *Discusión del dictamen y aprobación del mismo, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes.*

***IV.*** *Publicación del expediente por la prensa.*

***V.*** *Que la adición o reforma sea aprobada por la mayoría absoluta de los ayuntamientos del Estado.*

***VI.*** *Discusión del nuevo dictamen, que se formará con vista del sentir de los ayuntamientos, la Comisión que conoció de la iniciativa, pronunciándose en sentido afirmativo o negativo, según el sentir de la mayoría absoluta de los respectivos ayuntamientos.*

***VII.*** *Declaración del Congreso, con vista y discusión del dictamen de la comisión.*

**SEGUNDO.-** Que en la sesión celebrada el día 15 de mayo de 2019, el Pleno del Congreso aprobó la reforma para adicionar un párrafo cuarto al artículo 173 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, recorriéndose los ulteriores, al tenor literal siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se adiciona un nuevo párrafo cuarto al artículo 173, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, recorriéndose los ulteriores, para quedar como sigue:

**Artículo 173. …**

**…**

**…**

La Patria Potestad es el conjunto de derechos y deberes recíprocos, reflejo de la filiación, que corresponde por una parte a los padres y en su defecto a los abuelos y por la otra parte a los descendientes niñas o niños no emancipados, cuyo objeto es su desarrollo integral, la guarda de su persona y de sus bienes, así como su asistencia y representación legal. Es una función de interés público que se ejerce atendiendo al interés superior de la infancia, por lo tanto, dicha autoridad no podrá ser menoscabada, limitada ni suspendida sino mediante un mandamiento judicial, decretado fundadamente por un Juez, con conocimiento de causa y después de que los involucrados puedan ser oídos y vencidos en juicio, salvo lo dispuesto en las disposiciones aplicables, y los casos en que niños, niñas y adolescentes sean colocados en una situación de riesgo inminente e inmediato en la que se vean vulnerados sus derechos, debiendo actuar la autoridad competente de manera inmediata, urgente y expedita garantizando el interés superior de la infancia, mediante los mecanismos establecidos en la Ley de la Materia.

El Estado realizará una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los minusválidos, a los que prestará la atención especializada que requieran.

Los ancianos tienen derecho al respeto y consideración de sus semejantes. En caso de desamparo, el Estado promoverá su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, alimentación, vivienda y recreación.

Se reconoce la igualdad de derechos del hombre y de la mujer en todos los ámbitos de la vida cultural, social, jurídica, política y económica.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

La Ley establecerá los medios y apoyos necesarios para el logro de estos objetivos.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSETENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el tercer párrafo del artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-**  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 5 del mes de marzo del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 8 de marzo del presente año se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el tercer párrafo del artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas Comisiones Unidas, con fundamento en los artículos 90, 105, 116, 117, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el tercer párrafo del artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***EXPOSICION DE MOTIVOS***

*“De conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 143 de la Constitución Local, el Consejo de la Judicatura se integra con seis Consejeros, entre estos, uno designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y otro designado por el Congreso del Estado.*

*Así las cosas, el titular del Ejecutivo Estatal designó al Lic. Román Alberto Cepeda González para integrar el Consejo de la Judicatura. En el caso del Congreso del Estado, el Pleno designó al Diputado Juan Antonio García Villa.*

*El tercer párrafo del artículo 143 de la Constitución, textualmente señala: “Los consejeros deberán reunir los requisitos para ser magistrados y durarán tres años en su cargo, salvo su Presidente. Por cada uno de los consejeros, habrá un suplente.”*

*La redacción actual de este tercer párrafo debe ser reformada, pues al señalar que “los consejeros deberán reunir los requisitos para ser magistrados”, sin hacer ningún tipo de excepción, se entiende que dichos requisitos deberán ser acreditados por todos los consejeros, incluidos los designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto es así, pues resulta aplicable el principio general de derecho que reza "donde la ley no distingue, no le es dable distinguir al juzgador".*

*El artículo 138 de la Constitución establece los requisitos para ser magistrado y, su fracción VI señala: (y cito)*

*“VI. No haber ocupado el cargo de Secretario del Ramo o su equivalente, en la Administración Pública Estatal, de Fiscal General del Estado, de Diputado local, de Presidente Municipal o alguno de los cargos a que se refiere el artículo 95, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el año previo al día de su nombramiento.”*

*Es evidente que dicho requisito no se cumple en los consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pues el Lic. Román Alberto Cepeda González es Secretario del Ramo, y el Lic. Juan Antonio García Villa es Diputado Local.*

*Por lo anterior se propone reformar el tercer párrafo del artículo 143 de la Constitución, para los efectos de que expresamente se disponga que a los consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo no les será aplicable el requisito establecido en la fracción VI del artículo 138 de la Constitución.”*

**TERCERO.-** Quienes conformamos la presente comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de las consideraciones en las que se funda y motiva la iniciativa y el objeto, contenido y alcances del proyecto de decreto.

De lo anterior se concluye que el proyecto persigue la finalidad de clarificar en el artículo 143 constitucional los requisitos que habrán de reunirse a efecto de ser designado consejero o consejera del Consejo de la Judicatura tratándose de los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

En este sentido la promovente justifica el proyecto en el análisis siguiente:

*“El tercer párrafo del artículo 143 de la Constitución, textualmente señala: “Los consejeros deberán reunir los requisitos para ser magistrados y durarán tres años en su cargo, salvo su Presidente. Por cada uno de los consejeros, habrá un suplente.”*

*En este sentido si se analiza el contenido del artículo 138, en el que se consignan dichos requisitos se observa que la fracción IV señala el “No haber ocupado el cargo de Secretario del Ramo o su equivalente, en la Administración Pública Estatal, de Fiscal General del Estado, de Diputado local, de Presidente Municipal o alguno de los cargos a que se refiere el artículo 95, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el año previo al día de su nombramiento.”*

*Así, para la promovente ello no es adecuado, puesto que la norma no tiene consignada ninguna excepción, lo que provoca la necesidad de reformar la norma al resultar evidente que “que dicho requisito no se cumple en los consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pues el Lic. Román Alberto Cepeda González es Secretario del Ramo, y el Lic. Juan Antonio García Villa es Diputado Local”.*

*En este orden de ideas quienes conformamos la presente Comisión Dictaminadora, una vez agotado el estudio de la reforma, coincidimos en que es adecuado modificar el artículo 143 a efecto de hacer la norma más clara y eficaz coincidimos en la pertinencia de la reforma.*

En virtud de las consideraciones expuestas, es que tenemos a bien poner a consideración de ustedes para su estudio, análisis y en su caso, aprobación el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO:** Se reforma el tercer párrafo del artículo 143, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 143.**  …

…

Los consejeros deberán reunir los requisitos para ser magistrados y durarán tres años en su cargo, salvo su Presidenta o Presidente. Por cada uno de los consejeros, habrá un suplente. A los consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo no les será aplicable el requisito establecido en la fracción VI del artículo 138 de la Constitución.

**TRANSITORIOS**

**Primero.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado; y

**Segundo.-** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el Artículo 7 a la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, del Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16de octubre del año 2019,se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 17 de octubre de 2019, se turnó a esta Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el Artículo 7 a la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, del Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** La Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Adiciona el artículo 7 a la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, del Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*Emmanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la historia occidental, concibió la dignidad como un atributo del ser humano, consistente en ser tratado como un fin en sí mismo y no como un medio para el uso de otros, lo que lo convertiría en una cosa.[[17]](#footnote-17) En el pensamiento de Kant, la dignidad humana se refiere al valor intrínseco del ser humano sobre el cual descansa el fundamento de los derechos humanos.[[18]](#footnote-18)*

*En la actualidad, se han desarrollado una gran cantidad de conceptos referentes al tema de la dignidad humana, los cuales tienen diferentes perspectivas y dimensiones, existen conceptos con base moral, religiosa e incluso psico-emocional. Sin embargo, al ser un órgano de carácter legislativo, nuestra obligación es atender a una conceptualización netamente jurídica y social.*

*Con esta idea, concebimos a la dignidad como valor intrínseco resaltando el mérito que tiene todo ser humano por el sólo hecho de existir y por ese motivo es merecedor de respeto. En este sentido la dignidad es inherente y universal; todo ser humano la posee independientemente de su conducta, es decir, se detenta por el sólo hecho de ser considerado persona.[[19]](#footnote-19)*

*En el ámbito sociológico la dignidad humana implica que debe establecer un orden normativo, económico y social que esté al servicio de las personas, el cual, les permita cultivar su propia dignidad, haciendo posible que actúen según su propia conciencia y su libre elección, generando a la vez un sentimiento de conciencia social y respeto por los demás.*

*La dignidad humana como categoría jurídica está ampliamente nombrada en tratados y declaraciones internacionales. Por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. De la misma forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su preámbulo que “la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana”.*

*En el ámbito nacional la dignidad humana es nombrada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo una prohibición expresa a discriminar por cualquier motivo que atente en contra de ella, o bien pretenda anular o menoscabar los derechos humanos de las personas.*

*No obstante que la Constitución Política de nuestro país, no da un concepto legal de dignidad humana dentro de su articulado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación si la ha definido en la tesis LXV/2009, en la cual sostuvo que:*

*“En el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal”.[[20]](#footnote-20)*

*Asimismo, en tribunales colegiados la dignidad humana ha sido definida como un valor supremo en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.[[21]](#footnote-21)*

*Con base en lo anterior, y considerando a la dignidad como una categoría jurídica tan relevante, sostenemos que el concepto debe ser integrado a la norma constitucional local con el objetivo de generar claridad sobre su contenido y alcance, en los términos en los que ha sido interpretado por el máximo tribunal del país. Al mismo tiempo, creemos que una de las ideas claves sobre las que descansa nuestro sistema democrático y constitucional, como lo es la dignidad humana debe tener al menos una definición dentro del propio texto constitucional, dándole así la importancia debida.*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión dictaminadora nos abocamos al estudio y análisis de las consideraciones en las que se funda y motiva la de reforma así como al contenido y alcance del proyecto de decreto, verificando que el mismo persigue la finalidad de reconocer en el texto constitucional el principio de dignidad humana*.*

*En este sentido la promovente refiere que “la dignidad humana como categoría jurídica está ampliamente nombrada en tratados y declaraciones internacionales. Por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. De la misma forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su preámbulo que “la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana”.*

*Por lo que hace al ámbito nacional “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo una prohibición expresa a discriminar por cualquier motivo que atente en contra de ella, o bien pretenda anular o menoscabar los derechos humanos de las personas”.*

En el mismo sentido refiere que *“No obstante que la Constitución Política de nuestro país, no da un concepto legal de dignidad humana dentro de su articulado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación si la ha definido en la tesis LXV/2009, en la cual sostuvo que:*

*“En el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal”.[[22]](#footnote-22)*

Así, quienes dictaminamos analizamos el principio de dignidad humana, bajo las consideraciones siguientes:

Como bien se alude en la exposición de motivos, encontramos múltiples definiciones de este concepto, Hidalgo Ballina (2006) afirma que la dignidad humana es la base para el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos. Él la describe, como una cualidad intrínseca del hombre, que brota de su naturaleza misma, como ente moral y espiritual, sin importar sus condiciones étnicas, geográficas, económicas o políticas, y la considera superior a cualquier legislación positiva.

Este autor refiere que en el derecho internacional de los derechos humanos, éstos derechos son concebidos en su universalidad, tomando como fundamento la dignidad humana (Hidalgo Ballina, 2006).

En un sentido similar, el Tribunal Constitucional Español, ha fijado que la dignidad humana es el fundamento del orden político y social, por lo que no puede considerarse como un derecho fundamental que opera de forma autónoma e independiente, siendo imposible su tutela mediante el amparo (ACT149/1999).

Así como lo indica Daniela Viteri, en el ordenamiento constitucional español, la dignidad y los derechos fundamentales, no se hallan en el mismo plano; pues la dignidad se proclama como un principio constitucional, de donde emanan los demás derechos fundamentales.

Contrario a lo emanado de la jurisprudencia española, el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha señalado que la dignidad humana es el derecho fundamental principal consagrado en la Constitución, haciéndose necesario referir que el mismo tiene como característica particular su inalterabilidad en la misma (Viteri Custodio, 2012).

En este orden de ideas, en el derecho constitucional alemán, el derecho fundamental a la dignidad es invocable ante los tribunales internos ante su lesión.

El Tribunal Federal Alemán ha subrayado que para determinar la lesión de la dignidad humana, se debe analizar el hecho concreto, a través de una variante de la denominada fórmula- objeto o fórmula de no instrumentalización. La idea fundamental de esta fórmula recae en que el hombre no puede reducirse, bajo ninguna circunstancia a objeto de la actuación del Estado (Viteri Custodio, 2012).

Así este tribunal ha manifestado que la existencia de la lesión de la dignidad humana dependerá ante todo de las circunstancias.

De conformidad a varias sentencias de este tribunal, particularmente en la sentencia BVerfGE30 el tribunal expresó lo siguiente:

Evidentemente [la afectación a la dignidad humana] (…) no se puede establecer en forma general, sino siempre atendiendo al caso en concreto. Las formulas generales, como la que prevé que los seres humanos no puedan ser degradados al ser tratados por el poder estatal como un simple objeto, establecen las directrices que sirven para determinar los casos en los que se da una violación de la dignidad humana. No pocas veces el ser humano se vuelve un simple objeto, no sólo de las circunstancias y del desarrollo social, sino también del derecho, en la medida en la que debe adherirse a éste sin que se tomen en cuenta sus intereses. La violación de la dignidad humana no se da por esta sola razón. Se debe añadir el hecho de que la persona haya sido sometida a un trato que cuestiona principalmente su calidad de sujeto, o que en el tratamiento dado en un caso en concreto exista una desvalorización arbitraria de la dignidad humana. El trato que afecta la dignidad humana otorgado por el poder público al ser humano en cumplimiento de la ley, debe ser considerado como una minusvaloración de las garantías de que goza el ser humano por virtud de ser persona, y en ese sentido también el carácter de un “trato abyecto” (Konrad Adenauer Stiftug, 2009, pág. 54).

Aunque en el derecho comparado existen diversas concepciones de los derechos humanos, y no hay un consenso sobre su naturaleza y fundamento, no hay duda de que pese a estas diversidades, la idea de que la dignidad, individualidad e igualdad de los seres humanos es fundamento común de dichos derechos es ampliamente aceptada (Hidalgo Ballina, 2006).

Para Nogueira Alcalá (2003, pág. 145), la dignidad de la persona humana es “el valor básico que fundamenta los derechos humanos, ya que su afirmación no sólo constituye una garantía de tipo negativo que protege a las personas contra vejámenes y ofensas de todo tipo, sino que debe también afirmar positivamente a través de los derechos el pleno desarrollo de cada ser humano y de todos los seres humanos”.

Para este autor las personas nunca pueden ser instrumentos, por el contrario reclaman un respeto de ser siempre sujetos y no objetos, por ser siempre fines en sí mismos, lo que reclama el reconocimiento de su personalidad jurídica y aquello que necesita para vivir dignamente (Nogueira Alcalá, 2003).

En esta misma línea argumentativa, podemos señalar que en el caso mexicano, conforme a la legislación y jurisprudencia, la dignidad humana tiene un doble carácter, como principio y como derecho fundamental.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado, afirmando que:

La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que **se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica**, reconocido actualmente en los artículos [1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](javascript:AbrirModal(1)). En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido **que la dignidad humana  funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso**, **cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad  de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada** (Tesis1a./J.37/2016 (10), 2016).

Una vez agotado, el estudio del objeto de la reforma, y hechas las consideraciones que anteceden coincidimos en la importancia de reconocer en la Constitución Local el principio de Dignidad Humana, y en la congruencia de ello con la Constitución General y los Tratados Internacionales de los que México es parte, por lo que sometemos a su consideración y aprobación, en su caso el siguiente Proyecto de:

**D E C R E T O**

**ÚNICO.-** Se adiciona un primer párrafo al artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, recorriendo los subsiguientes, para quedar como sigue:

***Artículo 7º.*** El Estado de Coahuila de Zaragoza reconoce la dignidad humana como un valor superior en virtud del cual se declara una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente por todo el ordenamiento jurídico estatal.

Dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. El ejercicio de estos derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Federal.

Las normas relativas a los derechos humanos y a las libertades reconocidas por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Ninguna disposición legal puede ser interpretada en el sentido de:

a) Permitir a la autoridad suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los Tratados internacionales suscritos por México.

b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puedan estar reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los Tratados internacionales suscritos por México.

c) Excluir otros derechos y garantías que sean inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática y representativa de gobierno.

Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que determine la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos y libertades de las personas. La ley establecerá mecanismos a favor de las personas, para que el goce de sus derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica y justicia social, sean reales, efectivos y equitativos dentro del estado humanista, social y democrático de derecho que salvaguarda esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Toda persona tiene derecho a la información pública. La garantía de acceso a la información pública, es un derecho fundamental que comprende difundir, investigar y recabar información pública, y se definirá a partir de los principios siguientes:

**I.** Su fundamento reside en el estado humanista, social y democrático de derecho que establece esta Constitución.

**II.** El acceso libre, gratuito, sencillo, antiformal, eficaz, pronto y expedito a la información.

**III.** La interpretación constitucional más favorable del principio de publicidad, salvo las excepciones que por razones de interés público establezca la ley en sentido estricto.

**IV.** La protección de los datos personales.

**V.** La obligación de transparencia del Poder Público o cualquier otra entidad que utilice, reciba o disponga de recursos públicos, en los términos de la ley.

**VI.** La administración, conservación y preservación de la documentación pública a través de mecanismos confiables, eficientes y eficaces.

**VII.** La constitución de un organismo público autónomo conforme a las bases previstas en esta Constitución y las siguientes:

**1.** Será autoridad constitucional en la materia, independiente en sus funciones y decisiones, y profesional en su desempeño.

**2.** Contará con autonomía política, jurídica, administrativa, presupuestal, patrimonial y financiera, en los términos que establezca la ley.

**3.** Tendrá a su cargo la rectoría de las siguientes materias:

**a)** El acceso a la información pública.

**b)** La cultura de transparencia informativa.

**c)** Los datos personales.

**d)** *(DEROGADO, P.O. 27 DE MARZO DE 2007)*

**e)** La realización de estadísticas, sondeos, encuestas o cualquier instrumento de opinión pública.

**f)** Las demás atribuciones que establezca la ley.

**4.** Su actuación se regirá por los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad.

**5.** Sus integrantes serán designados por el voto de cuando menos las dos terceras partes del Congreso del Estado, en los términos y conforme al procedimiento que disponga la ley.

Las Cartas de los Derechos Fundamentales y esta Constitución, determinan los principios mínimos en los que se sustenta el ejercicio de los Derechos Humanos. Serán ley suprema en el régimen interior del Estado.

Ninguna persona será sometida a desaparición, sea ésta cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado.

El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a las personas contra las desapariciones.

Las personas desaparecidas y quienes hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición, tienen derecho a una búsqueda inmediata y efectiva, a la localización de la persona desaparecida, a conocer la verdad, a la justicia, a la protección judicial efectiva y a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición. El Estado garantizará estos derechos.

Las personas desaparecidas tienen derecho a continuar con su personalidad jurídica con el fin de garantizar el ejercicio de todos sus derechos. El Estado adoptará las medidas apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuyo paradero no haya sido esclarecido. La ley establecerá el procedimiento para la declaración de ausencia por desaparición de personas.

Ninguna persona será sometida a cualquier forma de esclavitud, servidumbre, o a ejecutar un trabajo forzoso.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 48 Bis, a la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila, en materia de reparación integral del daño, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 26de junio del año 2019,se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 48 Bis, a la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila, en materia de reparación integral del daño, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 48 Bis, a la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila, en materia de reparación integral del daño, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece las figuras jurídicas que describen el derecho a la reparación integral del daño que deben sufragarse a las víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.*

*La misma estipula en su artículo 10 fracción V que las víctimas tienen derecho a obtener la reparación integral por el daño que han sufrido, como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos acaecidas en su persona, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.*

*Analizando la legislación estatal por cuanto al tema en comento, cabe resaltar lo establecido en el artículo 46:*

*“La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos o la comisión de delitos, ambos considerados como graves, en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y el Reglamento.”*

*Para el punto que aquí se estudia, encontramos que la compensación abarca diversos conceptos de carácter económico que derivan de fijar un monto que cubra los mismos.*

*No obstante, en la misma se omite la suerte que corren las personas víctimas de delito o de violaciones a los derechos humanos cuando no existe la fijación del monto de dicha reparación, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión, como se aprecia en la lectura del artículo 48:*

*“Todas las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:*

*I. Un órgano jurisdiccional nacional; o estatal*

*II. Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México;*

*III. Un organismo público nacional o estatal de protección de los derechos humanos;*

*IV. Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.*

*La compensación por concepto de violaciones graves a derechos humanos, podrá exigirse sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente ley.*

*Ahora bien, en el ámbito internacional, la convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su artículo 10, define el Derecho a la indemnización, estableciendo que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial*

*A su vez los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, ordena en su punto 20 que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancia de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como:*

1. *El daño físico o mental;*
2. *La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;*
3. *Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;*
4. *Los prejuicios morales;*
5. *Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.*

*Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su arábigo 9.5 indica que “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.*

*Como puede observarse la legislación local, federal e internacional consideran el que por violaciones a sus derechos humanos y por ser víctima de un delito, ésta tiene derecho a una indemnización o compensación que cubre diversos conceptos que le fueron lesionados; lo que resalta del análisis de las mismas es que carecen del apartado relativo a la fijación del monto correspondiente, dejando a la persona afectada en un entorno de revictimización que debemos a toda costa combatir en el cumplimiento de nuestro deber como legisladores.*

*Así mismo y a mayor robustecimiento se citan las siguientes tesis y jurisprudencias:*

*Época: Décima Época; Registro: 2014863; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo ll; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a.lJ. 11212017 (10a.) Página: 748*

***COMPENSACIÓN A VÍCTMAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. LA MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA VÍCTIMA AL OBTENER EL MONTO DE UNA REPARACIÓN A TRAVÉS DE OTROS MECANISMOS, NO IMPIDE EL ACCESO AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.***

*Del análisis del ordenamiento legal citado, se advierte que la víctima tiene expedito su derecho para solicitar la aplicación de los recursos contenidos en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. En todos aquellos casos en que "no haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía"; en ese sentido, el hecho de que "se haya dado por satisfecho" del monto de reparación que se le haya asignado en otras vías, no impide que pueda acceder al fondo referido para obtener una reparación integral. Lo anterior es así, ya que el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera íntegra por las violaciones cometidas a sus derechos humanos no puede tener el carácter de renunciable, ni verse restringido por las necesidades económicas o presiones que puedan recaerles, toda vez que la reparación integral del daño es un derecho fundamental que tiene toda persona a que sea restablecida su dignidad intrínseca la cual, por su propia naturaleza no resulta conmensurable y por ende negociable. En efecto, el restablecimiento de la dignidad de la víctima es el objetivo último de la reparación, reconocido por el artículo 5 de la Ley General de Víctimas que prevé que, en virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación, así como garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.*

*Época: Décima Época; Registro: 2010414; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis; 1a. CCCXLII/2l15 (10a.) Página: 949*

***ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÏCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE DICHO DERECHO.***

*La obligación de reparar a las víctimas cuando se ha concluido que existe una violación a los derechos humanos de aquéllas es una de las fases imprescindibles en el acceso a la justicia. Así pues, cuando existe una violación de derechos humanos el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades, e incluso -dependiendo del tipo de violación- de impulsar un cambio cultural. La reparación ideal luego de una violación de derechos humanos es la entera restitución a la víctima (restitutio in integrum), la cual consiste en restablecer la situación antes de la violación. No obstante, ante la limitada posibilidad de que todas las violaciones de derechos humanos sean reparadas en su totalidad por la naturaleza misma de algunas de ellas, la doctrina ha desarrollado una amplia gama de reparaciones que intentan compensar a la víctima de violaciones de derechos humanos mediante reparaciones pecuniarias y no pecuniarias. Las medidas no pecuniarias también conocidas como reparaciones morales- se clasifican en: a) restitución y rehabilitación; b) satisfacción, y c) garantías de no repetición. La restitución busca, como su nombre lo indica, restablecer la situación que existía antes de la violación, mientras que la rehabilitación propone garantizar la salud de la víctima. La satisfacción tiene por objeto reparar a la víctima con medidas tendentes a la memoria, verdad y justicia. Las garantías de no repetición tienen la finalidad de asegurar que no se repita una práctica violatoria, incluyendo ordenar acciones que afectan las instituciones sociales, legales y políticas, así como las políticas públicas.*

*En efecto se desprende la permisividad de la ley y la obligatoriedad en materia de derechos humanos de que aquella dependencia encargada de ejecutar la atención a víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos cuente con las más amplias facultades a fin de que se vean materializadas las garantías y derechos que las normas de la materia otorgan.*

*Por lo tanto, se propone una adición del artículo 48 bis a la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila, a fin de establecer en el mismo la facultad y obligatoriedad a la Comisión Ejecutiva de fijar términos y montos de compensación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a fin de cumplimentar las disposiciones constitucionales e Internacionales de la materia que nos ocupa.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora nos abocamos al estudio y análisis de las consideraciones en las que se funda y motiva la de reforma así como al contenido y alcance del proyecto de decreto, verificando que el mismo persigue la finalidad de dotar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la facultad de determinar los montos de las compensaciones *por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos o la comisión de delitos graves.*

En este sentido, los promoventes plantean la adición de un artículo 48 bis en la Ley de Víctimas a efecto de disponer que “[*c]uando no exista la determinación de un monto de compensación fijado por las autoridades y organismos señalados, corresponderá a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el fijar dicho monto, atendiendo a lo dispuesto por los estándares internacionales que contemplan los tratados en materia de Derechos Humanos y la jurisprudencia que emita la corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre que nuestro país sea suscriptor ratificado de éstas.*

*Los montos a los que se refiere el párrafo anterior jamás serán fijados bajo criterios limitativos, sino se atenderá en todo momento a la interpretación más favorable a la víctima de violaciones a derechos humanos por parte de agentes del Estado; ello atendiendo a la interpretación pro persona que debe hacerse en todos los asuntos de la materia.”*

En este sentido los iniciadores aluden al concepto de reparación integral del daño y resaltan su importancia en el marco de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

Así, en la exposición de motivos se abarcan desde definiciones legales, hasta jurisprudenciales sobre el tema, haciéndose hincapié en las obligaciones que tiene el Estado Mexicano en virtud de la suscripción y ratificación de diversos instrumentos internacionales.

Dentro de este contexto, los integrantes de la presente Comisión Dictaminadora, a efecto de estar en condiciones de pronunciarnos con sobre la procedencia de la reforma, revisamos el contenido de la Ley vigente, revisando con especial detenimiento el capítulo Décimo Tercero concerniente a las medidas de compensación.

Del anterior análisis resultó, para quienes dictaminamos que, la facultad de determinar el monto de las compensaciones ya se encuentra consignado en la nroma, en mismo modo destaca que el artículo que se pretende adicionar, guarda estrecha relación con lo consignado en el artículo 48 y 50 de este ordenamiento, mismo que a continuación se transcribe:

***Artículo 48.*** *Todas las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:*

***I.*** *Un órgano jurisdiccional nacional;*

***II.*** *Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México;*

***III.*** *Un organismo público de protección de los derechos humanos;*

***IV.*** *Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.*

*La compensación por concepto de violaciones graves a derechos humanos, podrá exigirse sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente ley.*

***Artículo 50.*** *El Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva, determinará el pago de una compensación subsidiaria a cargo del Fondo en los términos de la presente ley, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:*

***I.*** *La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad;*

***II.*** *La resolución firme emitida por la autoridad judicial;*

*La determinación del Comité Interdisciplinario Evaluador, deberá dictar dentro del plazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente.*

*El monto de la compensación subsidiaria, podrá ser hasta de quinientas veces el salario mínimo mensual y será proporcional a la gravedad del daño sufrido sin que implique, por sí mismo, el enriquecimiento de la víctima.*

En este sentido, los integrantes de la presente Comisión Dictaminadora, estamos de acuerdo en la importancia de precisar en forma expresa en la norma que al determinar dicho monto, la Comisión Ejecutiva lo hará atendiendo a lo dispuesto por los estándares internacionales que contemplan los tratados en materia de derechos humanos y la jurisprudencia que emita la corte interamericana de Derechos Humanos, sin embargo a efecto de darle más congruencia y concordancia a la norma se propone algunos cambios sustanciales.

En este orden de ideas se propone que en lugar de que la adición se haga en un artículo autónomo, los párrafos se adhieran en el último párrafo del artículo 50 en el que se consigne lo siguiente:

**Artículo 50.** El Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva, determinará el pago de una compensación subsidiaria a cargo del Fondo en los términos de la presente ley, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

**I.**      La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad;

**II.**     La resolución firme emitida por la autoridad judicial;

La determinación del Comité Interdisciplinario Evaluador, deberá dictar dentro del plazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente.

El monto de la compensación subsidiaria, podrá ser hasta de quinientas veces el salario mínimo mensual y será proporcional a la gravedad del daño sufrido, ***atendiendo a lo dispuesto por los estándares internacionales que contemplan los tratados en materia de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte y la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos*,** sin que implique, por sí mismo, el enriquecimiento de la víctima.

Por las consideraciones que anteceden, sometemos a su consideración y en aprobación, en su caso el siguiente Proyecto de:

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Víctimaspara el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 50.** …

**I.**      …

**II.**     …

…

El monto de la compensación subsidiaria, podrá ser hasta de quinientas veces el salario mínimo mensual y será proporcional a la gravedad del daño sufrido, atendiendo a lo dispuesto por los estándares internacionales que contemplan los tratados en materia de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte y la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos**,** sin que implique, por sí mismo, el enriquecimiento de la víctima.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de decreto por la que se propone adicionar una fracción X al artículo 285 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita conjuntamente las Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, por conducto del Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 del mes de octubre del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 17 de octubre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de decreto por la que se propone adicionar una fracción X al artículo 285 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita conjuntamente las Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, por conducto del Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de decreto por la que se propone adicionar una fracción X al artículo 285 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita conjuntamente las Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, por conducto del Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***EXPOSICION DE MOTIVOS***

*“En fechas recientes, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, particularmente en la Laguna, se han presentado una serie de eventos violentos que representan una afectación directa a los bienes jurídicos protegidos por nuestras leyes, como el patrimonio, la salud, la libertad y seguridad de las personas.*

*Este tipo de conductas, si bien es cierto algunas se encuentran tipificadas en nuestra legislación penal, también lo es, que se tienen que adecuar los tipos penales a las conductas delictivas que día a día se presentan, ya que los delitos van evolucionando y, en consecuencia, hay que actualizar la ley. Como lo explicaba el Doctor Mario Álvarez Ledesma, “toda sociedad experimenta un proceso evolutivo, y es característica de los grupos sociales estructurados, la institucionalización de la reacción frente a la desviación”. Así, en la medida en que las sociedades se van haciendo más complejas, se produce un avance que hace del Derecho no sólo un lenguaje que prescribe las conductas debidas entre individuos, sino que legitima y justifica los actos de la propia autoridad.*

*La transformación gradual de ciertas conductas nos lleva a analizar que en tiempos presentes se esté dando un fenómeno delictivo el cual se reviste de las siguientes características:*

*a) Grupos de personas a bordo de vehículos compactos ingresan a territorio estatal.*

*b) Este grupo de personas utilizan para cometer ilícitos, armas de fuego de grueso calibre.*

*c) Por medio de la intimidación o la violencia se apoderan con ánimo de apropiación de vehículos automotores de modelos recientes.*

*d) Mediante tales conductas ilícitas, también se atenta en contra de la libertad de sus víctimas a quienes de forma violenta los obligan a acompañarlos.*

*e) Tal atentado además de ocasionar un grave daño emocional a las víctimas, tiene como finalidad el impedir que soliciten auxilio o reporten el robo en tiempo real.*

*f) Posteriormente por vialidades principales se trasladan a otros puntos del estado y de estados vecinos.*

*g) Una vez logrando evitar ser detenidos, liberan a sus víctimas causandoles una afectación traumatizante que daña su salud.*

*Se ha detectado que este tipo de acciones facilita que los grupos criminales posteriormente utilicen tales vehículos para la comisión de otros delitos de alto impacto tanto del fuero común, como federal, como son el homicidio, secuestro, facilitación delictiva, asociación delictuosa entre otros.*

*Derivado de lo anterior, Organismos Empresariales y miembros de la Sociedad Civil Organizada, han externado su preocupación tanto al titular del Poder Ejecutivo, como a la Fiscalía General del Estado y así mismo a quienes integramos ésta Sexagésima Primera Legislatura de Coahuila, de la existencia de un vacío legal que se ha convertido en terreno fértil para que los delincuentes abusen en perjuicio de los ciudadanos con la realización de tales conductas delictivas derivado de la ausencia de tipificación expresa en ese sentido, yendo más allá de un solo modus operandi y convirtiendo en víctimas de retención a quien originalmente solo iba a ser despojado de un vehículo, lo anterior por supuesto genera un peligro sumamente exponencial, en virtud del principio “nullum crimen sine lege”, es decir, que para que una conducta sea calificada como delito, debe estar establecida como tal y con anterioridad a la realización de esa conducta.*

*Conforme a lo anterior, el Ejecutivo del Estado, la Fiscalía General, en coordinación con la Sociedad Civil Organizada y la colaboración de todos y cada uno de los integrantes de esta Legislatura, atendiendo tal preocupación de la comunidad nos vemos en la necesidad de impulsar una reforma al marco legal en materia penal con la finalidad de que estas conductas encuadren en la ley, y así poder salvaguardar la seguridad pública en los niveles de prevención, persecución e investigación de dicho ilícito.*

*En ese sentido la violencia ejercida en los delitos contra el patrimonio económico debe contemplar la ilicitud en la retención de los sujetos víctimas del delito de robo calificado ya que además de afectar su patrimonio económico se conculca su esfera jurídica con la retención de su persona, siendo ésta última conducta delictiva distinta a la que inspira y mueve a la de la privación de la libertad.*

*En el caso de la retención de las personas que han sido víctimas del robo de sus vehículos con la finalidad de evitar que pidan auxilio o denuncien inmediatamente el ilícito del que fueron objeto, es indudable que se están afectando bienes jurídicos que la ley penal debe de tutelar, y por lo tanto se deben de adecuar los tipos penales de tales ilícitos.*

*En suma, la propuesta de adicionar el Código Penal para incorporar estas conductas ilícitas como una calificativa especial del delito de robo, permitiría combatir eficazmente una actividad ilegal dentro de un marco de respeto de derechos fundamentales de los gobernados bajo los principios de legalidad y debida proporcionalidad de su sanción.*

*Bajo esta lógica, se propone adicionar una fracción X al artículo 285 del Código Penal del Estado, a fin de tipificar expresamente como calificativa especial el delito de robo de vehículo automotor y retención de su conductor y/o sus ocupantes, impidiéndoles momentáneamente denunciar tal ilícito y solicitar el auxilio correspondiente, aumentando en un tanto el mínimo y el máximo de las penas previstas en el artículo 279 de este código, según la cuantía del robo de que se trate, para el efecto de ampliar los años de condena a los responsables.*

*Tal reforma no implica de ninguna manera que no se puedan actualizar las reglas del concurso real, en virtud de que la pluralidad de conductas que en estos hechos nos ocupan, producen la actualización de tipos penales distintos, lo cual aumentaría su penalidad ya que una vez individualizada la pena de prisión se le podrá aumentar hasta el máximo de la pena o suma de las penas impuestas.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, observamos que la iniciativa de reforma objeto del presente dictamen, tiene como finalidad adicionar una fracción X al artículo 285 del Código Penal de nuestro estado, ante lo cual podemos hacer referencia que dicho artículo forma parte del Título Décimo Quinto, denominado “Delitos contra el patrimonio” y establece las “Calificativas especiales de robo”, señalando lo siguiente:

***Artículo 285 (Calificativas especiales del robo)***

*Se aumentará en un tanto el mínimo y el máximo de las penas previstas en el artículo 279 de este código, según la cuantía del robo de que se trate, cuando aquél se cometa:*

***I.*** *(Vivienda o cuarto habitado)*

*En vivienda o cuarto que estén habitados al momento del robo, comprendiéndose por aquéllos no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuese la materia de que estén construidos.*

***II.*** *(Despoblado)*

*En despoblado.*

***III.*** *(Caminos o carreteras)*

*Respecto a cosas de personas o vehículos que sean conducidos en tramos desprotegidos, de caminos o carreteras federales, estatales o municipales.*

***IV.*** *(Intimidación con armas)*

*Mediante intimidación con armas.*

***V.*** *(Violencia)*

*Mediante violencia física, o cuando se ejerza esa clase de violencia para darse a la fuga o defender lo robad.*

*(Pautas específicas de aplicación)*

*Por violencia física se entenderá el empleo doloso de alguna parte del cuerpo, o de algún instrumento, objeto o arma, con los que materialmente se sujete, inmovilice o golpee a la víctima o a una persona que se encuentre con ella, o se cause daño a la integridad corporal a ambas, o a cualquiera de ellas.*

*La violencia para darse a la fuga deberá consistir en golpear a la víctima o a una tercera persona, o causar daño a la integridad corporal de cualquiera de ellas, o disparar contra cualquiera de ellas, aunque no resulten lesionadas.*

*(Violencia agravada)*

*Sin embargo, se aumentarán en un tanto, las penas de prisión mínima y máxima del robo simple según su cuantía, previstas en el artículo 279 de este código, cuando mediante la violencia referida en cualquiera de los párrafos segundo y tercero de esta fracción, se cause a la víctima o a una tercera persona, una o más lesiones de las previstas en la fracción III del artículo 200 de este código.*

*Y se duplicarán penas de prisión mínima y máxima del robo simple según su cuantía, previstas en el artículo 279 de este código, cuando mediante la violencia referida en cualquiera de los párrafos segundo y tercero de esta fracción, se cause a la víctima o a una tercera persona, una o más lesiones de las previstas en las fracciones IV a VIII del artículo 200 de este código.*

***VI.*** *(Miembro o ex-miembro de seguridad)*

*Por quien haya sido o sea miembro de alguna institución de seguridad pública, o de una empresa de seguridad privada, aunque el sujeto activo no esté en servicio.*

*Asimismo, al miembro de la institución de seguridad pública de que se trate, se le destituirá e inhabilitará de quince a veinte años para desempeñar un cargo, empleo o comisión en cualquier entidad oficial del Estado o de sus municipios, y se le suspenderá de quince a veinte años del derecho a realizar cualquier clase de actividad de seguridad privada.*

*Igualmente, al miembro de empresa de seguridad privada, se le suspenderá de quince a veinte años del derecho para realizar cualquier actividad de aquella clase, tanto privada, como en cualquier entidad oficial del Estado o de sus municipios.*

*Por instituciones de seguridad pública se entenderá a las señaladas en el artículo 341 de este código.*

***VII.*** *(Identificaciones falsas)*

*Valiéndose de identificaciones falsas o de supuestas órdenes de la autoridad.*

***VIII.*** *(Participación de menor de edad)*

*Valiéndose de un menor de doce años; o con la intervención de quien tenga doce años o más, pero menos de dieciocho años, ya sea que el mismo intervenga como autor, determinador o como cómplice.*

***lX. (Robo a centros educativos)***

*Cuando se cometa en contra de uno o más bienes de cualquier institución pública o privada que funcione como Centro Educativo.*

Es así, que mediante la iniciativa en comento, se propone adicionar la fracción X, a efecto de integrar textualmente lo siguiente:

*“****X. (Robo de vehículo automotor y retención de su conductor y/o sus ocupantes)***

*Cuando se cometa tal delito estando detenido o en circulación el vehículo automotor, y/o sus ocupantes sean retenidos impidiéndoles momentáneamente denunciar tal ilícito y solicitar el auxilio correspondiente.”*

Los integrantes de esta dictaminadora, al abocarnos al estudio y análisis de las consideraciones en las que se funda la iniciativa de reforma, podemos señalar que la misma encuentra motivación derivada de los hechos violentos de robo a vehículos que se han venido suscitando y que representan una afectación directa al patrimonio, y sobre todo a la seguridad de las y los coahuilenses.

Cabe señalar, que el delito de robo a vehículos, se ha venido agudizando, debido a que como se señala en la exposición de motivos, actualmente este fenómeno se reviste de características muy particulares, y que facilitan que los grupos criminales utilicen los vehículos para la comisión de otros delitos de alto impacto tanto del fuero común, como federal, como son el homicidio, secuestro, facilitación delictiva, asociación delictuosa entre otros.

Como bien se señala en la exposición de motivos, al apoderarse de los vehículos automotores, los delincuentes utilizan la intimidación y la violencia, poniendo en riesgo la integridad de las personas, causando además de un daño al patrimonio, también un grave daño emocional a las víctimas, ya que al cometer dicho ilícito, los delincuentes retienen a lavíctima*,* lo cual les impide solicitar auxilio o reportar el hecho en el momento en que les sucede.

Es por lo anterior, que los integrantes de esta dictaminadora respaldamos la propuesta de incorporar expresamente como calificativa especial el delito de “*robo de vehículo automotor y retención de su conductor y/o sus ocupantes”*, contribuyendo así a regular esta conducta atípica que se ha venido convirtiendo en una incidencia grave en nuestra entidad, al incrementar las penas de 6 a 12 años de cárcel como máximo.

Cabe mencionar, que el Pleno del Congreso en fecha 30 de octubre del presente año, aprobó una reforma al artículo 285 del mismo ordenamiento, en la cual también se adiciona una fracción X, en virtud de lo cual, esta comisión dictaminadora propone que la reforma objeto del presente dictamen, adicione una fracción XI, incluyendo en un transitorio a efecto de esta reforma entre en vigor con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto No.377 expedido por esta legislatura el día 30 del presente año.

En virtud de las consideraciones expuestas, es que tenemos a bien poner a consideración de ustedes para su estudio, análisis y en su caso, aprobación el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se Adiciona una fracción XI al artículo 285 del Código Penal de Coahuila, para el efecto de incorporar expresamente como calificativa especial el delito de robo de vehículo automotor y retención de su conductor y/o sus ocupantes, impidiéndoles momentáneamente denunciar tal ilícito y solicitar el auxilio correspondiente.

**Artículo 285 (Calificativas especiales del robo)**

Se aumentará en un tanto el mínimo y el máximo de las penas previstas en el artículo 279 de este código, según la cuantía del robo de que se trate, cuando aquél se cometa:

**I.** a la **X.** …

**XI. (Robo de vehículo automotor y retención de su conductor y/o sus ocupantes)**

Cuando se cometa tal delito estando detenido o en circulación el vehículo automotor, y/o sus ocupantes sean retenidos impidiéndoles momentáneamente denunciar tal ilícito y solicitar el auxilio correspondiente.

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, una vez que haya entrado en vigor el Decreto No. 377

expedido por esta legislatura el 30 de octubre de 2019.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto a través de la cual se realizan diversas reformas y adiciones a los artículos 56 y 58 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés. S. Viesca.” Del Partido Revolucionario Institucional, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 12 de junio del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de decreto a través de la cual se realizan diversas reformas y adiciones a los artículos 56 y 58 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés. S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que a la iniciativa con proyecto de decreto a través de la cual se realizan diversas reformas y adiciones a los artículos 56 y 58 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés. S. Viesca.” Del Partido Revolucionario Institucional, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989. Es un Tratado Internacional en materia de derechos humanos que cuenta con el mayor número de ratificaciones a nivel mundial. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. A lo largo de sus 54 artículos, establece un marco jurídico inédito de protección integral a favor de las personas menores de 18 años de edad, que obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país; sin embargo, fue hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar en el párrafo noveno que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.*

*Por otra parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), reconoce su carácter de titulares de derechos.*

*El artículo 2, establece: “El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector”; en concordancia el artículo 17 establece: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos” y el artículo 18 prevé: “En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio”.*

*En ese tenor de ideas la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias relativas a ese principio entre las que destacan las siguientes:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Época: Décima Época*  *Registro: 2006011*  *Instancia: Primera Sala*  *Tipo de Tesis: Jurisprudencia*  *Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*  *Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I*  *Materia(s): Constitucional*  *Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.)*  *Página: 406*  ***INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.***  *En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.*  *Amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Javier Mijangos y González.*  *Amparo directo en revisión 1005/2012. 12 de septiembre de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su derecho para formular votos concurrentes. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.*  *Amparo directo en revisión 3759/2012. 27 de febrero de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.*  *Amparo directo en revisión 583/2013. 11 de septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.*  *Amparo directo en revisión 3248/2013. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.*  *Tesis de jurisprudencia 18/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiséis de febrero de dos mil catorce.*  *Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 31 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.*  *Época: Décima Época*  *Registro: 2012592*  *Instancia: Pleno*  *Tipo de Tesis: Jurisprudencia*  *Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*  *Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I*  *Materia(s): Constitucional*  *Tesis: P./J. 7/2016 (10a.)*  *Página: 10*  ***INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES.***  *El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad.*  *En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.*  *Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en contra de la forma en que se abordan, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, con reservas en el tratamiento, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.*  *El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 7/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.*  *Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.*  *Época: Décima Época*  *Registro: 2008546*  *Instancia: Primera Sala*  *Tipo de Tesis: Aislada*  *Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*  *Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II*  *Materia(s): Constitucional*  *Tesis: 1a. LXXXIII/2015 (10a.)*  *Página: 1397*  ***INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.***  *El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad.*  *Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano.*  *Nota: Por ejecutoria del 14 de junio de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 418/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.*  *Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.* |  |

*De manera general estos criterios enfatizan que los tribunales deberán atender al interés superior de la niñez y adolescencia, y que éste demanda un estricto escrutinio de las particularidades del caso. Asimismo, señalan que debe considerarse la opinión de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte, y se acentúa la obligación del juez(a) de examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para la niña, niño o adolescente.*

*La Declaración de los Derechos del Niño (1924), por su parte, establece en el Principio 2 que, al promulgar leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, “la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”.*

*La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 25 señala que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia especiales”.*

*Y por último la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (1979) señala que en los artículos 5.b) y 16.1.d) “los intereses de las hijas (os) serán la consideración primordial”.*

*El principio del interés superior del niño busca la mayor satisfacción de todas y cada una de las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Su aplicación exige adoptar un enfoque basado en derechos que permita garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual. El interés superior debe ser la consideración primordial en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes, “por tanto se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño”.1 Las niñas, niños y adolescentes están en proceso de formación y desarrollo, por sus características particulares dependen de las personas responsables de su cuidado para la realización de sus derechos; sin embargo, esta circunstancia puede llegar a limitar sus posibilidades de defender sus intereses. Todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos (federal y locales) tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una consideración primordial y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.*

*En consecuencia, las normas jurídicas locales, nacionales e internacionales, han ido normando bajo este principio del interés superior de la niñez, por tanto, el Estado tiene la obligación de armonizar de una manera adecuada sus leyes al contenido de dicho principio, lo cual ha queda expresado ampliamente en líneas anteriores; por tanto, es necesario seguir legislando al respecto.*

*El artículo 56 del Código de Procedimiento (sic) Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza establece en relación a los alimentos provisionales, que la o el juez fijará el importe de los alimentos provisionales, sin audiencia del deudor y mediante la información y prueba que estime necesarias.*

*Sin embargo, en la práctica, a pesar de que se decretan los alimentos provisionales desde la radicación de la demanda, se ha venido estableciendo como requisito sine qua non, que antes expedir el oficio para el descuento provisional el demandado deba estar emplazado, lo cual contraviene desde luego el contenido del principio del interés superior de la niñez.*

*De igual forma el artículo 58 del citado ordenamiento establece en cuanto a la resolución sobre pensión provisional de alimentos que rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior (57), la o el juez fijará el porcentaje o la suma en que deba consistir la pensión provisional de alimentos, ordenando que se entregue directamente al beneficiario o, en su caso a quien lo represente, por semanas, quincenas o meses anticipados, según sea el caso y que la providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución; estableciéndose en la práctica de igual manera que antes expedir el oficio para el descuento provisional el demandado deba estar emplazado.*

*Por todo lo anterior, la presente iniciativa busca resolver, la práctica que se ha venido realizando en la cumplimentación del pago de alimentos como medida precautoria dentro los juicios de alimentos, esto en razón del principio superior de la niñez y con ello dar una respuesta práctica, rápida y útil a las necesidades de los menores, otorgándole a sus derechos la supremacía que les caracteriza.”*

**TERCERO.-** Quienes conformamos la presente comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa, verificando que la misma tiene por objeto la modificación del artículo 58 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, concerniente a la resolución sobre pensión provisional de alimentos, a efecto de establecer que “la *resolución deberá quedar contenida dentro del auto de radicación*, *ordenando la expedición inmediata, sin necesidad de emplazamiento del demandado, del Oficio de descuento para la Empresa respectiva o la ejecución de cualquier otra medida que sea necesaria para asegurar de manera provisional los alimentos en aras del principio del interés superior de la niñez, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 57 de este ordenamiento jurídico”.*

Lo anterior encuentra justificación de acuerdo a la promoverte en que “Si bien el “*artículo 56 del Código de Procedimiento (sic) Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza establece en relación a los alimentos provisionales, que la o el juez fijará el importe de los alimentos provisionales, sin audiencia del deudor y mediante la información y prueba que estime necesarias (…), en la práctica, a pesar de que se decretan los alimentos provisionales desde la radicación de la demanda, se ha venido estableciendo como requisito sine qua non, que antes expedir el oficio para el descuento provisional el demandado deba estar emplazado, lo cual contraviene desde luego el contenido del principio del interés superior de la niñez.*

*De igual forma el artículo 58 del citado ordenamiento establece en cuanto a la resolución sobre pensión provisional de alimentos que rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior (57), la o el juez fijará el porcentaje o la suma en que deba consistir la pensión provisional de alimentos, ordenando que se entregue directamente al beneficiario o, en su caso a quien lo represente, por semanas, quincenas o meses anticipados, según sea el caso y que la providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución; estableciéndose en la práctica de igual manera que antes expedir el oficio para el descuento provisional el demandado deba estar emplazado.*

*Por todo lo anterior, la presente iniciativa busca resolver, la práctica que se ha venido realizando en la cumplimentación del pago de alimentos como medida precautoria dentro los juicios de alimentos, esto en razón del principio superior de la niñez y con ello dar una respuesta práctica, rápida y útil a las necesidades de los menores, otorgándole a sus derechos la supremacía que les caracteriza.*

Así, se plantea la modificación en los términos siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| Vigente | Propuesta |
| **Artículo 58.** Resolución sobre pensión provisional de alimentos  Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, la o el juez fijará el porcentaje o la suma en que deba consistir la pensión provisional de alimentos, ordenando que se entregue directamente al beneficiario o, en su caso a quien lo represente, por semanas, quincenas o meses anticipados, según sea el caso.  La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. | **Artículo 58.-** Resolución sobre pensión provisional de alimentos.    Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, la o el juez fijará el porcentaje o la suma en que deba consistir la pensión provisional de alimentos, ordenando que se entregue directamente al beneficiario o, en su caso a quien lo represente, por semanas, quincenas o meses anticipados, según sea el caso; ***resolución que deberá quedar contenida dentro del auto de radicación***, ***ordenando la expedición inmediata, sin necesidad de emplazamiento del demandado, del Oficio de descuento para la Empresa respectiva o la ejecución de cualquier otra medida que sea necesaria para asegurar de manera provisional los alimentos en aras del principio del interés superior de la niñez, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 57 de este ordenamiento jurídico.*** |

En este sentido previo a pronunciarnos sobre la procedencia de la medida legislativa, estimamos necesario hacer una serie de consideraciones en torno al principio del interés superior del menor y al marco normativo concerniente a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El principio del interés superior del menor, principio rector-guía de la Convención de los Derechos del Niño, conforme al cual, la protección de los derechos del menor prima por sobre cualquier consideración que pueda afectarlos, así como sobre cualquier otro cálculo de beneficio colectivo (Cillero Bruñol, 1999).

Como bien se señala en la exposición de motivos este principio es reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el mismo constituye uno de los pilares fundamentales, de la *Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA),* adopta este principio.

* Por lo que hace al marco normativo local en el año 15 de diciembre de 2015, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con lo cual se dotó de autonomía al derecho familiar.

Dentro de las principales innovaciones de estos ordenamientos se encuentran el de acabar con la errónea concepción de considerar a las niñas y los niños como sujetos solo de algunos derechos.

Al respecto observamos como González Contó (2016), al referirse a la evolución de los derechos de las niñas y los niños, enfatiza que las primeras declaraciones de derechos humanos, limitaban la titularidad de los mismos, a aquellos capaces de ejercer su autonomía, que en ese entonces, eran los varones, adultos y blancos, excluyendo a aquellos seres, que por sus características naturales eran dependientes de otros, considerados en este supuesto mujeres y niños.

Si bien en los siglos XIX y XX, estos conceptos han ido evolucionando y las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas titulares de estos derechos, el proceso de reconocimiento de esta titularidad de otros actores, como es el caso de las personas con algún tipo de discapacidad y de las niñas y niños, ha sido más lento.

Para la autora (González Contró, 2016), el problema del reconocimiento de la titularidad de los derechos de niñas y niños guarda estrecha relación con el considerar que no tienen autonomía.

Afortunadamente, dentro de las innovaciones de estos ordenamientos generales y locales, mismos que fueron diseñados desde una perspectiva de derechos humanos, encontramos precisamente ese reconocimiento de su calidad de sujetos y titulares de derechos y, por lo tanto, como personas que durante su crecimiento y desarrollo adquieren cierta autonomía que les permite tomar decisiones por sí mismos.

En este sentido las normas prevén que los niños y las niñas mayores de doce años de edad podrán ejercer sus derechos por sí mismos pero con la asistencia de sus padres y de las autoridades judiciales cuando sea necesario. Esta asistencia será menor conforme se desarrollan hasta adquirir la mayoría de edad, Asimismo, se incluyeron figuras jurídicas tales como las de asistencia para menores e incapaces, la alienación parental, los requisitos para acceder a la reproducción humana asistida, entre otros, que sin duda alguna respondieron a los nuevos estándares internacionales, así como los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de protección de derechos humanos.

A la par de dicho reconocimiento se incluyeron diversos principios rectores, como son el principio de participación de niños y niñas, el principio de la intervención oficiosa de la autoridad judicial, el principio de autonomía progresiva y claro, el principio del interés superior de los niños y niñas.

En este orden de ideas quienes dictaminamos estimamos necesario analizar el contenido y alcance del derecho a recibir alimentos.

En este orden de ideas el derecho a recibir alimentos se define en el artículo 276 de la Ley para la Familia como: “la alimentación nutritiva, el vestido, la habitación, la atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, la asistencia médica y terapéutica en casos de enfermedad, los gastos relativos al embarazo y el parto, la recreación. Respecto de las niñas y niños los alimentos comprenden los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior del alimentista, su recreación y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.

Al respecto la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis, 1a. LXXXV/2015 (10a.) alude que el derecho a percibir **alimentos** alcanza un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la estricta supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad. De ahí que los elementos de la obligación alimentaria deriven del artículo [4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](javascript:AbrirModal(1)), ya que el hecho de que determine que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, implica delinear los elementos esenciales del derecho de **alimentos** que, además, tiene como objetivo central el desarrollo integral de los menores. Sin menoscabo de lo anterior, el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal, pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad; esto es, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera. Así, el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista.

En este sentido el derecho referido guarda una estrecha relación con el derecho a un nivel de vida adecuado, derecho establecido en el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), tendiente a asegurar la alimentación, vestido, asistencia médica y vivienda adecuados a fin de garantizar la salud y bienestar de los individuos.

De lo anterior se vislumbra la importancia de recibir alimentos, pues de ello depende el goce de otros derechos humanos como lo es la salud, la educación, o el libre desarrollo de la personalidad.

Una vez referido lo anterior y previo a pronunciarnos sobre la procedencia de la reforma, analizamos las disposiciones relacionadas con el otorgamiento provisional de alimentos a efecto de verificar sobre la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la propuesta.

Así, con respecto a los alimentos provisionales el Código fija lo siguiente:

***Artículo 56.*** *Alimentos provisionales*

*La o el juez fijará el importe de los alimentos provisionales, sin audiencia del deudor y mediante la información y prueba que estime necesarias.*

***Artículo 57.*** *Procedencia y requisitos de la pensión provisional de alimentos*

*La o el juez podrá decretar el pago de una pensión provisional de alimentos en favor de quien acredite tener derecho de exigirlos y contra quien tenga la obligación de pagarlos.*

*En este caso, deberá justificarse el título o causa jurídica en cuya virtud se pide la pensión provisional y las posibilidades de quien deba darla.*

*Cuando la pensión provisional se pida por razón de parentesco, deberá demostrarse éste.*

*Si se funda en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que conste.*

***Artículo 58.*** *Resolución sobre pensión provisional de alimentos*

*Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, la o el juez fijará el porcentaje o la suma en que deba consistir la pensión provisional de alimentos, ordenando que se entregue directamente al beneficiario o, en su caso a quien lo represente, por semanas, quincenas o meses anticipados, según sea el caso.*

*La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución.*

***Artículo 59.*** *Improcedencia de la reclamación sobre el derecho a percibir alimentos provisionales*

*En la providencia no se permitirá ninguna discusión sobre el derecho de percibir alimentos. Cualquier reclamación sobre este derecho deberá ser materia del proceso principal y, entre tanto, se seguirá abonando la suma señalada.*

*Las cuestiones que se susciten sobre el monto de la pensión provisional de alimentos se substanciarán en vía incidental.*

Una vez analizadas las disposiciones vigentes, concluimos lo siguiente:

1. Se trata de una medida provisional.
2. *El juzgador fijará el importe de los alimentos provisionales, sin audiencia del deudor y mediante la información y prueba que estime necesarias.*
3. Para que procede es necesario que se justifique el título o causa jurídica en virtud del cual se solicita la pensión provisional.
4. En la providencia no se permitirá ninguna discusión sobre el derecho de percibir alimentos. Cualquier reclamación sobre este derecho deberá ser materia del proceso principal y, entre tanto, se seguirá abonando la suma señalada.

Como se hizo referencia al inicio del presente dictamen la iniciativa pretende la inclusión de la porción normativa siguiente:

**Artículo 58.-** Resolución sobre pensión provisional de alimentos.

Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, la o el juez fijará el porcentaje o la suma en que deba consistir la pensión provisional de alimentos, ordenando que se entregue directamente al beneficiario o, en su caso a quien lo represente, por semanas, quincenas o meses anticipados, según sea el caso; ***resolución que deberá quedar contenida dentro del auto de radicación***, ***ordenando la expedición inmediata, sin necesidad de emplazamiento del demandado, del Oficio de descuento para la Empresa respectiva o la ejecución de cualquier otra medida que sea necesaria para asegurar de manera provisional los alimentos en aras del principio del interés superior de la niñez, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 57 de este ordenamiento jurídico.***

Lo cual estimamos es consistente con el principio del interés superior del menor, no trasgrede la garantía de audiencia y no constituye una presunción de la filiación, por lo que la reforma es necesaria, razonable, proporcional e idónea.

Por lo anteriormente, señalado y tomando en consideración que las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad, al constituir una violación múltiple, grave y permanente de derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable, tal como lo son los derechos a la libertad, la integridad personal, la vida, la salud y la personalidad jurídica, consagrados en nuestra Ley Fundamental y en diversas normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales suscritos por México, que requieren la reparación integral del daño a las víctimas, es que sometemos a su consideración, el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO ÚNICO**.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 58 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar de la forma siguiente:

**Artículo 58.-** Resolución sobre pensión provisional de alimentos.

Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, la o el juez fijará el porcentaje o la suma en que deba consistir la pensión provisional de alimentos, ordenando que se entregue directamente al beneficiario o, en su caso a quien lo represente, por semanas, quincenas o meses anticipados, según sea el caso; resolución que deberá quedar contenida dentro del auto de radicación, ordenando la expedición inmediata, sin necesidad de emplazamiento del demandado, del Oficio de descuento para la Empresa respectiva o la ejecución de cualquier otra medida que sea necesaria para asegurar de manera provisional los alimentos en aras del principio del interés superior de la niñez, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 57 de este ordenamiento jurídico.

La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución.

**T R A N S I T O R I O S**

**Primero.-** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**Segundo.-** Se derogan cualquier disposición contraria al presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar el inciso R a la fracción I del artículo 6 de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona,del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 11 de septiembre de año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 17 de septiembre de 2019, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar el inciso R a la fracción I del artículo 6 de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona,del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar el inciso R a la fracción I del artículo 6 de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona,del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La violencia contra la mujer constituye uno de los problemas más importantes de salud pública que atenta contra la dignidad humana y menoscaba el pleno ejercicio de los derechos humanos. La discriminación y la violencia hacia la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que traspasa las fronteras de todos los países y afecta a miles de mujeres en el mundo.*

*Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que el 35% de las mujeres del mundo han sufrido en algún momento de su vida violencia física y/o sexual; al mismo tiempo otros estudios reflejan que se trata de un porcentaje mucho mayor, de un 70%. Cada día un promedio de 137 mujeres alrededor del planeta mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia, según información de la Organización de las Nacionales Unidas.*

*En México, de acuerdo con las cifras registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se advierte que tan solo en el primer cuatrimestre del presente año murieron 1,199 víctimas de la violencia por razón de género. Es decir, cada dos horas y media en promedio una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, una estadística que va en aumento a pesar de la gran movilización social.*

*De conformidad con lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se entiende por ‘violencia contra la mujer’ a “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.[[23]](#footnote-23)*

*La violencia contra la mujer trae consigo consecuencias lamentables en el entorno social. Entre estas secuelas se puede visualizar la gran afectación que sufren los menores hijos de las víctimas de estos sucesos, los cuales no son sujetos pasivos sino deben ser considerados como víctimas directas o indirectas de esta violencia. Los hijos de las mujeres víctimas de violencia por razón de género necesitan protección, no sólo para la tutela de sus derechos humanos, sino para garantizar de forma efectiva medidas de atención y cuidado.*

*De acuerdo con un censo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sólo hasta el año pasado alrededor de 4 mil 245 niñas, niñas, niños y adolescentes han quedado en situación de orfandad a causa de la violencia letal que enfrentan las mujeres mexicanas, que dio como resultado 2 mil 192 homicidios dolosos y feminicidios cometidos en el país.*

*La Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño (CDN) considerada como la carta más extensa desarrollada sobre los derechos de las niñas y niños, ha adoptado distintas resoluciones, directivas y programas de actuación comunitaria en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, tomando en consideración a los menores hijos de las víctimas de este tipo de violencia.*

*Las niñas y niños hijos de víctimas de violencia de género, incluyendo aquellas víctima de feminicidio, en muchas circunstancias son víctimas olvidadas en medio de esta compleja problemática. Los menores como víctimas sufren efectos directos a nivel de sintomatología, una mayor vulnerabilidad en términos de adaptación psicológica, además de otros problemas como por ejemplo sentimientos de inseguridad, actuar conforme a ideas inferiores, alteraciones bruscas de humor, negación de la situación de violencia o desvalorización de su importancia, tendencia a normalizar el sufrimiento y la agresión como formas de relación, aprendizajes de modelos violentos y posibilidad de repetirlos ya sea como víctima o agresor, así como síntomas de estrés postraumático -insomnio, pesadillas, fobias, ansiedad.*

*Garantizar el acceso a servicios de asistencia y apoyo, así como la adopción de medidas de protección a las víctimas menores que se encuentran en un entorno de violencia de género refuerzan las buenas políticas públicas implementadas por el Gobierno Estatal que, preocupado, vela constantemente para proteger a los sectores más vulnerables o que previniendo emplea acciones positivas en aras de que estos grupos sociales no queden desprotegidos.*

*En esta vía, la siguiente iniciativa tiene a bien garantizar la protección a las niñas, niños y adolescentes hijos de madres víctimas de feminicidio y violencia por género, para que tengan acceso a los diferentes servicios y programas de asistencia social y protección de derechos que brinda el Estado, a fin de tener un desarrollo emocional menos traumático y lleven una vida social sana, sin repetir patrones violentos cuando lleguen a edad adulta.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la presente iniciativa de reforma, la cual adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila.

Para los integrantes de esta dictaminadora, es primordial implementar acciones encaminadas a atender las situaciones de vida que son adversas a la población, y centrándonos en el tema que nos ocupa, podemos mencionar que las cifras de violencia hacia las mujeres, es un fenómeno que aun y cuando se han venido implementado políticas públicas para su erradicación, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, nos indican que en México, los feminicidios se han ido duplicando durante los últimos años, asimismo se señala que sólo en enero de 2019 ha habido 70 feminicidios, agregando que 11 de las víctimas eran menores de edad.

En el estado de Coahuila, las cifras de feminicidios de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2015 se registraron 16, en el 2016 fueron 14, 9 en el 2017, lo cual indicó una disminución en la incidencia, sin embargo en el año 2018, la cifra aumentó a 12 y en lo que va de este 2019 se han registrado 19 casos. Lo cual resulta alarmante, por lo que los integrantes de esta dictaminadora, no podemos omitir, que aun y cuando en esta legislatura, hemos contribuido mediante acciones preventivas, de contención y correctivas para frenar los feminicidios y los homicidios de mujeres al homologar estos ilícitos en nuestros diferentes ordenamientos jurídicos, coincidimos con el promovente, en que este fenómeno desencadena consecuencias lamentables en el entorno social y familiar, ya que trae consigo además del sufrimiento no visible de los menores hijos de las víctimas de violencia, afectaciones graves en su calidad de vida y bienestar, por lo cual consideramos que a razón de ser también víctimas de la situación, es importante brindarles efectivas medidas de atención y cuidado.

En ese sentido, que consideramos que más allá de las secuelas directas y a corto plazo, los menores que atestiguan una situación de la violencia, son más propensos de presentar problemas emocionales y de conducta, así como mayores problemas en su desarrollo escolar, además que les conlleva un mayor riesgo de cometer o experimentar violencia en su futuro.

Es por ello, que para nosotros como legisladores representa un desafío primordial trabajar en conjunto y a la par de la implementación de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, tomar medidas como la que presenta el promovente en la iniciativa objeto del presente dictamen, para que en la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, ordenamiento que contiene los mecanismos necesarios para lograr la universalización de los derechos de la población, convirtiéndose en garante de los mismos, se incorpore el derecho a la asistencia social a los niños, niñas y adolescentes hijos de madres víctimas de feminicidio, violencia familiar o de género, al ser personas en situación de vulnerabilidad, coadyuvando con ello, a que se conviertan en sujetos receptores de acciones encaminadas a lograr el ejercicio de los derechos y la reincorporación a una vida plena.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona el inciso r) a la fracción I del artículo 6 de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar de la siguiente manera:

**Artículo 6.** …

**I.** …

**a)** a la **q)** …

**r)** Ser hijos de madres víctimas de feminicidio, violencia familiar o de género.

**II.** a **XV.** …

**T R A N S I T O R I O**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos (Secretaria), Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 156 y se modifica el contenido del inciso B) del artículo 164, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-**  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 09 del mes de octubre del año 2018, se acordó turnar a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 156 y se modifica el contenido del inciso B) del artículo 164, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez del Grupo Parlamentario “del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 156 y se modifica el contenido del inciso B) del artículo 164, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez del Grupo Parlamentario “del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Las iniciativas de ley, o proyectos de iniciativa de ley, son el instrumento mediante el cual el legislador y demás servidores públicos e instituciones facultadas; así como los ciudadanos, presentan ante el Poder Legislativo su propuesta para modificar, adicionar o derogar una porción normativa de una ley, o bien, para crear un ordenamiento nuevo o abrogar uno ya existente.*

*De manera general, se ha establecido que todas estas propuestas deben contener una exposición de motivos que justifique su razón de ser.*

*Todos sabemos que en dichas exposiciones de motivos podemos hacer valer toda clase de argumentos y fundamentos que sean plausibles, verificables y reales. Además de, en su caso, las pruebas de rigor cuando así sea posible hacerlo.*

*….*

*Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en diversos criterios de jurisprudencia la importancia capital que tiene la exposición de motivos de toda iniciativa, para conocer la voluntad del legislador, como fuente fidedigna de la interpretación de la ley y sus alcances.*

*En la era moderna tanto en el ámbito nacional como en los estados, el abanico de leyes ha crecido en forma exponencial con relación a los años ochentas y noventas. En especial, las llamadas leyes de corte asistencial y de protección a los derechos humanos, leyes como las dirigidas al Adulto Mayor, a las Personas de Capacidades Diferentes, a la personas en Situación de Vulnerabilidad, las de Asistencia Social, y las que establecen derechos diversos de tipo social, médico, asistencial, económico, jurídico y de apoyo integral para víctimas de los delitos y para otros grupos humanos en situación de desventaja.*

*También se dispararon las leyes que pretenden regular fenómenos como la violencia, la delincuencia común, combatir la obesidad, las adicciones, y otras de corte similar. No menos importantes son las leyes que en forma indiscriminada crearon institutos, consejos, organismos, comisiones y comités, con el ánimo de incidir (positivamente) en ciertos aspectos adversos o negativos de la vida social y del quehacer público.*

*Todas las leyes mencionadas en los dos párrafos anteriores presentan un factor común: Necesitan de dinero, de mucho dinero para ser efectivas, aplicables, y de impacto social verdadero. Sin dinero, sin el presupuesto necesario, son leyes inoperantes…de letra muerta, así de simple.”*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, nos abocamos al estudio de las consideraciones en las que se funda y motiva el proyecto de reforma y coincidimos con la importancia de adicionar un tercer párrafo al artículo 156 y modificar el contenido del inciso B) del artículo 164, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, a fin de contemplar la posibilidad de que toda iniciativa de ley contenga en su exposición de motivos un apartado con un análisis del impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social que se generaría con su eventual aprobación.

De igual forma coincidimos en que la observancia del Estado de todos los derechos trae aparejado un costo, así, por ejemplo, para que los derechos humanos no queden como un texto de buenos deseos y sin relevancia o impacto social, éste requiere de erogaciones económicas importantes.

Existe legislación a nivel federal que contemplan el estudio del coste económico de la implementación de una nueva ley, así por ejemplo el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que: “El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión”.

Como se manifiesta en la exposición de motivos, “todas las leyes mencionadas … presentan un factor común: Necesitan de dinero, de mucho dinero para ser efectivas, aplicables, y de impacto social verdadero. Sin dinero, sin el presupuesto necesario, son leyes inoperantes…de letra muerta, así de simple”.

Por ello, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos en que resulta esencial que toda iniciativa de ley contemple la posibilidad de que en su exposición de motivos contenga un apartado con un análisis del impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social que se generaría con su eventual aprobación. En este contexto, quienes dictaminamos hoy la presente iniciativa encontramos oportuna la reforma en cuestión.

Una vez realizadas estas consideraciones y agotado el estudio sobre el contenido, alcances y constitucionalidad de la reforma, los integrantes de esta comisión dictaminadora estamos de acuerdo en la importancia de contemplar en la exposición de motivos de toda iniciativa de ley, la posibilidad de que contenga la misma un apartado con un análisis del impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social que se generaría con su eventual aprobación.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona un tercer párrafo al artículo 156 y se modifica el contenido del inciso b) del artículo 164 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 156.- …**

**…**

**Además de los requisitos antes señalados, toda iniciativa de ley podrá contemplar en la exposición de motivos un apartado con un análisis del impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social que se generaría con su eventual aprobación; así como las fuentes o partidas presupuestales de donde se obtendrían los recursos para financiar los gastos relacionados con su funcionamiento.**

**Artículo 164.- …**

a)…

**b) Los dictámenes sobre iniciativas de ley, podrán incluir un análisis de impacto regulatorio y económico, además de señalar si se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 156 de esta ley.**

c) …

**ARTÍCULO TRANSITORIO.**

**ÚNICO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de Octubre de 2019.

**POR LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUÁLES** |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(COORDINADOR)** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** |  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** |  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 19, 25 fracción I, 88 fracción XXIV y 112 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, planteada por las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-**  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 28 del mes de mayo del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 19, 25 fracción I, 88 fracción XXIV, 112 y 120 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, planteada por las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 19, 25 fracción I, 88 fracción XXIV, 112 y 120 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, planteada por las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

***“****El 14 de julio de 2017, se publicó en el Periodico Oficial del Estado Nº 56, el Decreto 903, el cual contiene la reforma al artículo 165 de la Constitución Politica del Estado de Coahuila, mediante el cual se elimina el fuero para proceder penalmente contra el Gobernador del Estado; los Diputados del Congreso del Estado; el Auditor Superior del Estado; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de los Contencioso - Administrativo; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; de los Tribunales Distritales, los Jueces de Primera Instancia; los Secretarios del Ramo; el Procurador General de Justicia del Estado y los Subprocuradores; los integrantes de los Consejos Municipales; así como los titulares e integrantes de los Consejos o Asambleas Generales de los Organismos Públicos Autónomos, cualquiera que sea su denominación, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, por lo que a partir de dicha reforma ya no existe la necesidad de que el Congreso del Estado declare mediante resolución de las dos terceras partes del total de sus miembros, si ha lugar o no a proceder penalmente contra el inculpado cuando se trate de alguno de los servidores públicos antes mencionados.*

*Derivado de lo anterior, así como de las reformas a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley General de Responsabilidades Administrativas, se hizo necesario la adecuación a la legislación estatal con el fin de homologarla con dichas disposiciones.*

*En ese contexto, mediante decreto 913, publicado en el Periódico Oficial del Estado Nº 64 de fecha 11 de agosto de 2017, se derogaron los artículos que conformaban el Capítulo Tercero, del Título Segundo, relato a la Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal, de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza que regulaba dicho procedimiento ante el Congreso del Estado; dejando subsistentes únicamente las disposiciones relacionadas con el procedimiento en materia de juicio político.*

*Sin embargo, la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza aún contempla disposiciones que hacen referencia a la Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal, procedimiento que ya noe existe en la Constitucion Politica del Estado, ni en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado, por lo que hace necesario adecuar algunos artículos para que sean acordes a los referidos ordenamientos legales, incluyendo el cambio de denominación de esta Comisión, por lo cual quienes integramos la misma, consideramos oportuno someter a la consideración de este H. Pleno del Congreso lo siguiente”*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, nos abocamos al estudio de las consideraciones en las que se funda y motiva el proyecto de reforma y coincidimos con la importancia de reformar los artículos 19, 25 fracción I, 88 fracción XXIV y 112 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, planteada por las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal, a fin de que se adecue el ordenamiento interno de este recinto legislativo, con lo establecido en ordenamientos de mayor jerarquía, tal y como se plantea en la exposición de motivos.

De igual forma coincidimos en que la denominación de dicha comisión debe cambiar, pues únicamente subsisten facultades relacionadas con procedimientos en materia de juicio político, delegando la responsabilidad penal a instituciones relacionadas con el mismo.

Como bien señala la exposición de motivos las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley General de Responsabilidades Administrativas, obligan a una necesaria adecuación por parte del marco jurídico estatal con la intención de lograr la armonización requerida dentro del sistema jurídico mexicano, que protegerá la certeza jurídica de las y los ciudadanos.

Por ello, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos en que resulta esencial que se lleve a cabo esta adecuación, para estar en sintonía con el sistema federal, homólogo en materia, y no quedarnos fuera de contexto en la vida legislativa - jurídica activa del país, con su debida aprobación. En este contexto, quienes dictaminamos hoy la presente iniciativa encontramos oportuna la reforma en cuestión.

Por otro lado, y tomando en consideración las observaciones hechas por el Diputado Juan Antonio García Villa, en cuanto al artículo 120 en el cual se establece que *“Las reuniones en que se traten asuntos relativos a la instrucción de juicio político, así como las reuniones de la Comisión de Auditoría Gubernamental* ***y Cuenta Pública****, en las que se discutan los asuntos presupuestales y financieros, siempre serán privadas”* y toda vez que ha sido turnada diversa iniciativa a ésta comisión, por parte del Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño la cual versa sobre el mismo artículo y también sobre la publicidad de todas las reuniones de las comisiones, se advierte que tanto las observaciones como la iniciativa deben ser tratadas en otra reunión con el fin de dejar a salvo en el presente dictamen lo referente a la armonización de los conceptos en cuanto a la Comisión Instructora de Juicio Político, y por otro lado, y en otro dictamen, discutir, analizar y en su caso aprobar el dictamen referente a la publicidad de las reuniones de las comisiones.

Una vez realizadas estas consideraciones y agotado el estudio sobre el contenido, alcances y constitucionalidad de la reforma, los integrantes de esta comisión dictaminadora estamos de acuerdo en la importancia de adecuar las disposiciones mencionadas para estar en sintonía con el sistema federal, lo cual se generaría con su eventual aprobación.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforman los artículos 19, 25 fracción I, 88 fracción XXIV, y 112 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 19.-** A las y los Diputados no podrá exigírseles responsabilidad legal alguna por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas. Sin embargo, serán responsables por los delitos, faltas u omisiones, que cometan durante el tiempo de su encargo, y procederá la separación del cargo en los términos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Política del Estado.

**ARTÍCULO 25.- …**

1. Cuando **se le imponga alguna medida cautelar, durante el proceso penal que se le siga en su contra, consistente en prisión preventiva, o alguna otra medida que restrinja o limite su libertad, según lo establezca la ley de la materia aplicable; o**
2. **…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**ARTÍCULO 88.- …**

1. a la **XXIII. …**

**XXIV.** Instructora de Juicio Político.

**XXV.** …

**ARTÍCULO 112.-** La Comisión Instructora de Juicio Político, conocerá de los asuntos relacionados con las responsabilidades de los servidores públicos estatales y municipales, en los casos y conforme a los procedimientos que se establecen en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza y en otros ordenamientos.

**ARTÍCULO TRANSITORIO.**

**ÚNICO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de Octubre de 2019.

**POR LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUÁLES** |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(COORDINADOR)** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** |  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** |  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, respecto de la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan las fracciones II y III al artículo 137 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado con el fin de publicar en la página electrónica del Poder Legislativo la relación de los exhorto y solicitudes emitidas, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-**  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 3 del mes de octubre del año 2018, se acordó turnar a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan las fracciones II y III al artículo 137 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado con el fin de publicar en la página electrónica del Poder Legislativo la relación de los exhorto y solicitudes emitidas, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan las fracciones II y III al artículo 137 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado con el fin de publicar en la página electrónica del Poder Legislativo la relación de los exhortos y solicitudes emitidas, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*La Ley Orgánica del Congreso de Nuevo León contempla, al igual que otros congresos, la existencia de un Comité de Seguimiento de Acuerdos, pero, con alcances y atribuciones que difieren en ciertos aspectos con sus homólogos de otros poderes legislativos. Este ordenamiento establece de manera concreta lo siguiente:*

*Artículo 78 bis 1.- El Comité de Seguimiento de Acuerdos, será el responsable de dar un oportuno seguimiento de respuesta a los Acuerdos que sean aprobados por el Pleno del Congreso, y que sean relativos a la intervención de alguna autoridad federal, estatal o municipal, respecto de la atención, resolución o información sobre diversas problemáticas del ámbito de sus competencias. A dicho Comité le corresponde:*

*I. Mantener actualizado el listado de Acuerdos Aprobados por el Pleno del Congreso, en los que se solicita la atención, información o la intervención de alguna autoridad federal, estatal o municipal, en el marco de sus atribuciones.*

*II. Solicitar, por conducto de su Presidente, a las autoridades competentes, la respuesta de los Acuerdos enviados para la atención, información o intervención de diversas problemáticas, cuando transcurra un tiempo prudente, posterior a la aprobación del Acuerdo; e*

*III. Informar cada mes al Pleno del Congreso del seguimiento y situación que guardan los Acuerdos enviados a las autoridades federales, estatales o municipales, para la atención, información o intervención, conforme a sus atribuciones, de diversas problemáticas.*

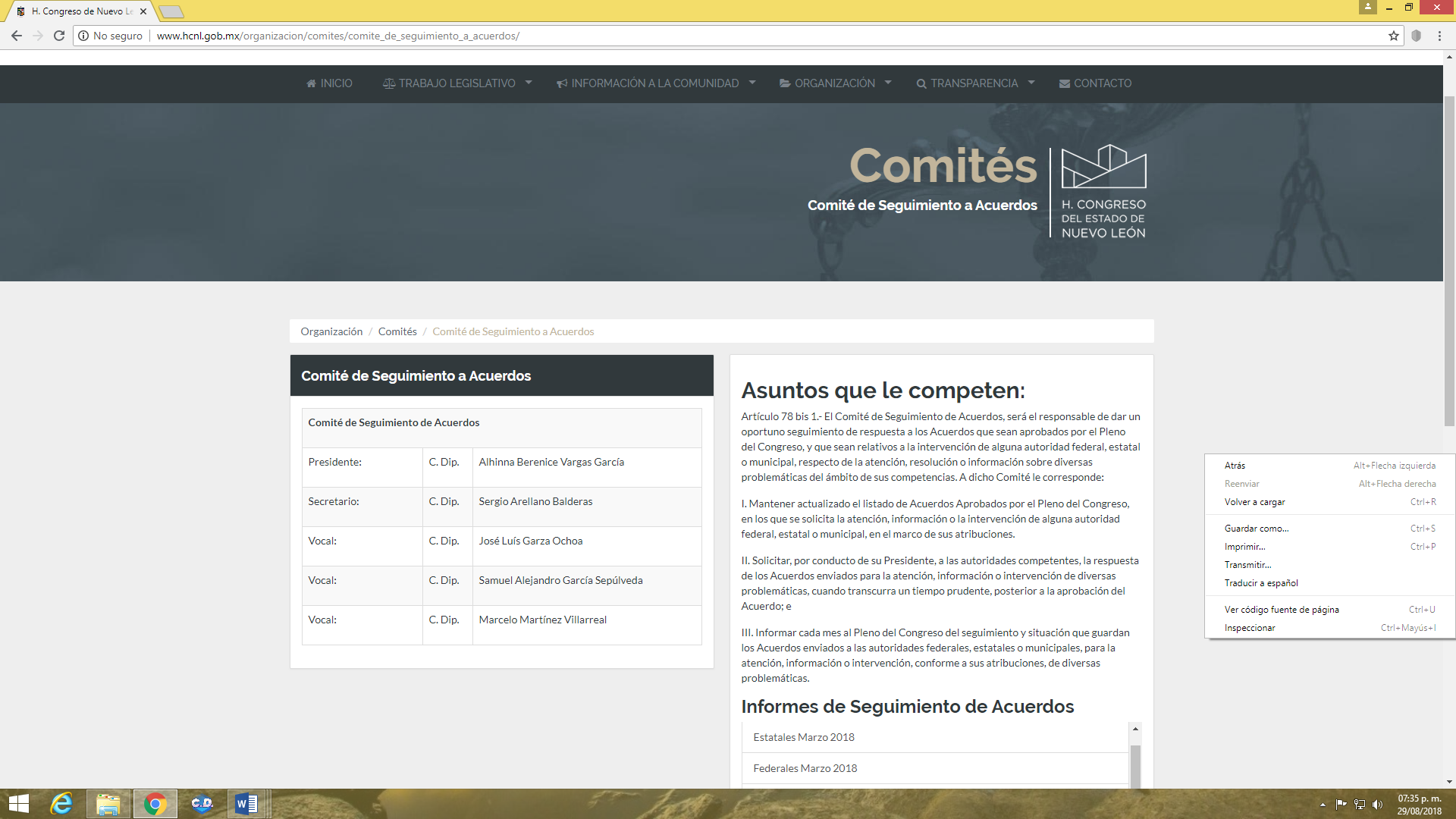
*IV. Proporcionar a la Oficialía Mayor el estatus del listado de los Acuerdos que sean aprobados por el Pleno del Congreso, especificando si han sido respondidos o no por la autoridad aludida y que sean publicados en la página oficial del Congreso del Estado.*

*Es decir, establece el deber de publicar en su sitio WEB el seguimiento y estatus de los acuerdos tomados por el Congreso, incluyendo proposiciones con puntos de acuerdo y solicitudes realizadas por el Pleno o la Diputación Permanente, permitiendo así que la ciudadanía conozca a las autoridades destinatarias de estos acuerdos que cumplen con los mismos, y a quienes se niegan a cumplir o simplemente guardan silencio ante lo requerimientos recibidos.*

*A parte de las iniciativas de ley, la proposición con puntos de acuerdo apoyada en exhortos o solicitudes son los dos mecanismos principales por lo que este y todos los poderes legislativos traducen en realidad un sinfín de necesidades ciudadanas, de demandas sociales, y abordamos problemas relacionados con el quehacer público de los otros poderes del estado, de la federación, así como de los municipios y de los organismo autónomos locales y federales, los paraestatales y los municipales. Problemas relacionados con gran cantidad de temas como: transparencia, finanzas, rendición de cuentas, corrupción, derechos humanos, violaciones legales, atribuciones de las autoridades, desarrollo social, salud, seguridad pública y todo aquello que, conforme a nuestras atribuciones debemos manifestar y poner en conocimiento de una autoridad o dependencia determinadas mediante un exhorto o una solicitud concreta.*

*La estadística y el control del seguimiento de los acuerdos tomado por este Poder Legislativo permite tener un impacto positivo en ciertos aspectos como la transparencia que debemos observar y en el derecho de que todo los ciudadanos puedan conocer quienes atienden nuestros exhortos y solicitudes derivados de los acuerdos y dictámenes tomados en las comisiones o comités, en la Junta de Gobierno o de forma directa, en los casos urgentes, por el Pleno o la Diputación Permanente.*

*Otro de los beneficios de publicar el estatus del seguimiento de acuerdos en el sitio WEB, mencionando con precisión la fecha del acuerdo, su contenido, la autoridad que debe acatarlo, la respuesta brindada, y en su caso, si ésta no ha respondido nada, es que se conoce a quienes son las dependencias o poderes que prestan oídos sordos al Poder Legislativo y sus requerimientos.*

**

*Como se muestra en esta imagen, así llevan los neoloneses su seguimiento de acuerdos. Con el añadido de que almacenan la estadística desde legislatura anteriores, es decir, no hacen “borrón y cuenta nueva” al concluir cada periodo legislativo.*

*Nosotros proponemos que además, este tipo seguimiento permita al ciudadano vincular y ubicar en forma precisa cuál fue el exhorto o solicitud resuelto o no resuelto.*

*Actualmente nuestra Ley Orgánica establece:*

***ARTÍCULO 137.-*** *El Comité de Seguimiento de Acuerdos tendrá el carácter de permanente, y se encargará de los asuntos siguientes:*

***I.*** *Realizar el seguimiento oportuno de los acuerdos emitidos por el Pleno, la Diputación Permanente, y en su caso, por la Junta de Gobierno, las comisiones y los comités, especialmente los exhortos y solicitudes que por su conducto o naturaleza impliquen la necesidad de que los destinatarios generen una respuesta.*

*Esto es, una sola atribución, y además, marcada con la Fracción I, como si hubiese más fracciones, cuando no las hay.*

*Conocer esta información estadística al detalle nos permitirá dar un paso firme hacia adelante en la configuración de un nuevo marco legal, que le permita a este Congreso hacer más eficientes los mecanismos relacionados con los acuerdos que emite, sus alcances y consecuencias*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, nos abocamos al estudio de las consideraciones en las que se funda y motiva el proyecto de reforma y coincidimos con la importancia de establecer el deber de publicar en el sitio oficial de internet, la opción de seguimiento y estatus de los acuerdos tomados por el Congreso, incluyendo proposiciones con puntos de acuerdo y solicitudes realizadas por el Pleno o la Diputación Permanente, para que dicha implementación permita que la ciudadanía conozca a las autoridades destinatarias de estos acuerdos que cumplen con los mismos, y a quienes hacen caso omiso respecto de los mismos.

De igual forma, coincidimos en el impacto positivo que, de acuerdo a la exposición de motivos, este tipo de medidas traerías en aspectos como la transparencia, porque precisamente, una de las finalidades del acceso a la información es que toda persona pueda atraerse información, informar y ser informada. Así, este Congreso tiene el deber de predicar con el ejemplo y poner en práctica una política de total transparencia, porque así lo exigen los tiempos, así lo exige la ciudadanía, y así lo exige la ley.

Hoy existe una tendencia de la transparencia que se sigue propagando globalmente. El derecho de acceso a la información después de superar históricamente resistencias de los burócratas hoy es una realidad.

Tener un Congreso de puertas abiertas es tener una política de datos abiertos lo cual implica que la información sea de fácil acceso, disponible de manera gratuita, que reduzca los costos de atención al ciudadano, lo cual implica que el principio de máxima publicidad sea la regla y no la excepción en las tareas legislativas de éste Congreso, pero además, sirva como instrumento democrático que fortalezca a una sociedad participativa e informada, donde los ciudadanos tengan el derecho a buscar, recibir y difundir información.

Aunado a lo anterior, consideramos positiva la idea de que al darle a conocer al ciudadano esta información estadística a detalle, esto, nos permitirá dar un paso firme hacia la materialización del derecho humano de acceso a la información que contempla nuestra Constitución en el párrafo séptimo del artículo séptimo, que a la letra dice *“Toda persona tiene derecho a la información pública. La garantía de acceso a la información pública, es un derecho fundamental que comprende difundir, investigar y recabar información pública…”*; por otro lado, ésta modificación contribuirá en la transición hacia un sistema de datos actualizado y acorde a las circunstancias que le permita a este Órgano Legislativo contar con una mayor eficacia para el ejercicio de los acuerdos que emite, sus alcances y consecuencias.

Por ello, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos en que se adecue el ordenamiento interno de este Congreso, para que el actual seguimiento que se le da a los acuerdos emitidos por el Pleno, la Diputación Permanente, y en su caso, por la Junta de Gobierno, las comisiones y los comités, especialmente los exhortos y solicitudes que por su conducto o naturaleza impliquen la necesidad de que los destinatarios generen una respuesta, cuente con mayor detalle respecto de su funcionamiento, para permitir al ciudadano vincular y ubicar de manera precisa el exhorto o solicitud realizado. Se trata pues, de la materialización del derecho humano del acceso a la información en los términos en que el artículo séptimo de nuestra Constitución local mandata a las autoridades coahuilenses, entre ellas este Congreso.

En este contexto, quienes dictaminamos hoy la presente iniciativa encontramos oportuna la reforma de adición en cuestión.

Ahora bien, esta Comisión no puede ser omisa en cuanto a la protección de datos personales que, de acuerdo a lo dispuesto por Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tenemos en los datos personales a *“cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información”;* según ese mismo ordenamiento, son datos personales sensibles, *“Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual”.*

Lo anterior tiene relevancia en virtud de que nuestro país se ubica entre los 10 primeros lugares en robo de identidad y los daños ligados a fraudes por suplantación de identidad, por lo que es necesario garantizar la máxima privacidad en cuanto a datos personales.

Una vez realizadas estas consideraciones y agotado el estudio sobre el contenido, alcances y constitucionalidad de la reforma, los integrantes de esta comisión dictaminadora estamos de acuerdo en la importancia de adicionar las disposiciones mencionada para brindar mayores alcances y atribuciones al actual Comité de Seguimiento de Acuerdos.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona la fracción II al artículo 137 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 137.- …**

1. **…**
2. **En coordinación con la Oficialía Mayor, publicar en la página electrónica del Poder Legislativo la relación de los exhortos y solicitudes emitidas, incluyendo la fecha de emisión, el resumen del acuerdo original, la petición concreta de cada uno y la respuesta correspondiente obsequiada por las autoridades, respetando en todo momento la información que se refiere a la vida privada y los datos personales en los términos que dispone la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 7 de la Constitución local, y las demás disposiciones aplicables.**

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 29 de Octubre 2019.

**POR LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUÁLES** |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(COORDINADOR)** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** |  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** |  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** dela Comisión de Desarrollo Social de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto en la que se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 13 de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el 15 de mayo de 2019, se acordó turnar a la Comisión de Desarrollo Social la iniciativa planteada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 13 de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a la Comisión de Desarrollo Social la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que la Comisión de Desarrollo Social es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 96, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 13 de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa en la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La importancia y trascendencia que guarde el tema de desarrollo social es determinante para el bienestar de una población, más aún para aquellos sectores que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. El combate a la pobreza se inscribe en esta materia como el principal objetivo de toda política de desarrollo social; esta es una tarea primordial de todo gobierno ya que en un contexto general no solo se habla sobre bajos ingresos, sino también expone la susceptibilidad, la exclusión, la falta de transparencia, la exposición a la violencia y la desigualdad que día con día se enfrentan los que menos tienen y más batallan.*

*Para mayor amplitud en el tema, desprendemos de una definición del Banco Mundial, que el desarrollo social es “la necesidad de poner en primer lugar a las personas durante los procesos de desarrollo”. El desarrollo social promueve la inclusión de gente que vive en vulnerabilidad o en estado de pobreza, tratando de empoderarlas, creando sociedades cohesivas y resilientes, y mejorando la accesibilidad de las instituciones públicas frente a sus ciudadanos. Transforma la compleja relación entre las sociedades y los Estados en intervenciones concretas para mejorar la calidad de vida.*

*La gente a la que van dirigidos dichos programas institucionales generalmente tiene limitaciones y no sólo de índole económicas, sino también educativas, de comunicación o lenguaje, alguna discapacidad, simplemente por estar en etapa de edad avanzada, o porque viven en zonas alejadas de la mancha urbana; son amplias y variadas las dificultades presentadas por los posibles beneficiarios que, en muchos de los casos, les impide inscribirse al padrón de programas de desarrollo social.*

*Bajo estas primicias, el gobierno del Estado de Coahuila tiene como una de sus funciones desplegadas a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, el formular, definir, conducir, articular y evaluar las políticas, estrategias y acciones de desarrollo social; estas comprenden aquellos programas en materia de población, salud, vivienda, servicios públicos, educación, cultura y deporte, que en coordinación con las entidades estatales correspondientes, son diseñados y programados exclusivamente para la atención de grupos vulnerables, marginados o con rezago socioeconómico. Lo cierto es que, aún y sin dejar de reconocer los logros gubernamentales, existe un amplio número de personas que requieren ser atendidas.*

*Todo lo antes señalado, sirve de marco de referencia para comprender que, básicamente, en el tema del desarrollo social se involucra totalmente la participación del gobierno para beneficiar y brindar apoyos materiales a su población. Estamos convencidos que es obligación de la autoridad brindar las herramientas necesarias para que los beneficiarios accedan sin trabas a dichos programas sociales. Requerimos que las autoridades hagan más fácil y amena la relación entre el beneficiario social y el procedimiento para inscribirse a los programas estatales que les proveerán de un beneficio y una ayuda de suma importancia.*

*En este sentido, el propósito de la presente Iniciativa es establecer en la Ley de Desarrollo Social como parte de los derechos de los beneficiarios de programas de desarrollo social una serie de facilidades para que aseguren su incorporación a dichos programas, tales como recibir orientación personalizada, accesibilidad y apoyo durante la integración de su expediente y la recopilación de sus documentos personales obligatorios para su inclusión en el padrón.*

*También se pretende contemplar que dichas personas reciban forzosamente en su domicilio particular todo tipo de notificaciones relacionadas con su inscripción al padrón, si se les acepto o no, si les hace falta subsanar algún requisito, o inclusive recibir en su domicilio los servicios, cuando exista causa justificada para ello y sea ya parte del programa como beneficiario.*

*Consideramos que con esta adecuación se estaría ampliando considerablemente la cobertura de los programas de desarrollo social en nuestro Estado, con el consecuente beneficio a un mayor número de Coahuilenses.”*

**TERCERO.-** Que la iniciativa planteada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual propone adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 13 de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene por objeto incorporar dentro del derecho que tienen los sujetos de desarrollo social de acceder a los programas que ofrezcan los gobiernos estatal y municipales, el que sean orientados sobre la normatividad aplicable al programa y se les brinde apoyo sobre la integración de su expediente y documentación, para que sean incluidos en el padrón de los programas sociales.

Al respecto, coincidimos con la Diputada promovente de esta iniciativa, en que los programas sociales están dirigidos a un sector de la población, que en su mayoría corresponde a grupos vulnerables, marginados o con rezago socioeconómico y que precisamente lo que se pretende a través de los programas sociales es solucionar una problemática que afecta a ese sector de la población, ya sea en un aspecto de mejora educativa, salud, laboral, bienestar social, etc. y en ese sentido, es importante que a las personas a las que van dirigidos los programas sociales, se le brinde por parte de las autoridades una orientación debida para que puedan acceder a los beneficios que se ofrecen en los programas sociales.

En tal tesitura, consideramos viable la iniciativa planteada a fin de que las autoridades encargadas de los programas sociales, ya sea estatal o municipal, ofrezcan la debida atención a la población beneficiaria para facilitar su incorporación a los programas sociales, propiciándoles la ayuda necesaria para integrar su expediente y orientándolos sobre la normatividad que rige dichos programas sociales.

No obstante, se le hacen algunas precisiones de técnica legislativa a la iniciativa planteada y en la redacción de la adición propuesta para un mejor entendimiento, respetando el sentido de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 13 de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 13.** …:

**I. …**

**II.** …

Las autoridades competentes que señala la presente ley deberán orientar a los solicitantes de los apoyos y beneficiarios, sobre la normativa aplicable a cada programa, en la integración de la documentación durante el proceso de selección, así como facilitar y propiciar, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, la incorporación de las personas que reúnan los requisitos o criterios de elegibilidad de cada programa, conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de este mismo ordenamiento.

**III. a la X. …**

**T R A N S I T O R I O S.**

**Único.** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisión de Desarrollo Social, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jesús Andrés Loya Cardona, (Coordinador), Dip. Blanca Eppen Canales (Secretaria), Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez. Dip. Graciela Fernández Almaraz. Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.**

**DE LA LXI LEGISLATURA.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA (COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. BLANCA EPPEN CANALES (SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GOMÉZ.** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea el artículo 279 Bis; y el Título Décimo “Del Parlamento Abierto”, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 02 de septiembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el 04 de octubre de 2019 se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea el artículo 279 Bis; y el Título Décimo “Del Parlamento Abierto”, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente Acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su Artículo 42 establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

***I.*** *Presentarse por escrito.*

***II.*** *Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

***III.*** *Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

***IV.*** *Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

***V.*** *Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas ciudadanas, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando anterior, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne. No obstante lo anterior, no omitimos señalar que, con respecto al requisito consignado en la fracción II del ya citado artículo 42, si bien es cierto a primera instancia se observa que el proyecto normativo va dirigido al Coordinador de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, lo cual contravendría lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley Orgánica del Congreso que refiere que las iniciativas deberán presentarse ante el Pleno del Congreso o ante el Presidente de la Mesa Directiva, más adelante en el propio texto se señala que el Ciudadano se permite “presentar (…) a este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Iniciativa (…)”, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que sin embrago, cabe mencionar que en lo referente a la presentación de iniciativas de reformas a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la misma establece lo siguiente:

***ARTÍCULO 2°.-*** *Esta Ley, sus reformas y adiciones, no podrán ser objeto de veto o plebiscito, ni requerirán para su vigencia de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Es facultad exclusiva del Congreso del Estado, su aprobación, reforma o adición, así como ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.*

*Para reformar, adicionar o abrogar la presente ley, así como para expedir una nueva ley, se requerirá la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.*

**SEXTO.-** Que como se desprende de lo anterior, la iniciativa popular presentada es una reforma que de conformidad a su naturaleza está sujeta a un proceso legislativo exclusivo del Congreso del Estado, mismo que se rige en lo previsto por el artículo 2 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

**SÉPTIMO.-** Que en este sentido la norma citada, señala en forma expresa los sujetos que tienen el derecho de iniciar reformas a Ley Orgánica, estableciendo que es facultad exclusiva del Congreso del Estado, excluyendo así a los ciudadanos, por lo que quienes dictaminamos concluimos que la iniciativa popular, independientemente de cumplir o no con los requisitos de procedencia enumerados en la Ley de Participación Ciudadana, no resulta procedente.

**OCTAVO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, y en virtud de lo consignado en la Ley Orgánica local, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Esta comisión determina declarar improcedente la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea el artículo 279 Bis; y el Título Décimo “Del Parlamento Abierto”, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, en virtud de que es facultad exclusiva del Congreso del Estado su aprobación, reforma o adición.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual plantea una reforma a la Fracción Sexta del artículo 20 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 de octubre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 17 de octubre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual plantea una reforma a la Fracción Sexta del artículo 20 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas ciudadanas, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando anterior, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne. No obstante lo anterior, no omitimos señalar que, con respecto al requisito consignado en la fracción II del ya citado artículo 42, si bien es cierto a primera instancia se observa que el proyecto normativo va dirigido a la Coordinadora de la Comisión de Igualdad y no Discriminación, lo cual contravendría lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley Orgánica del Congreso que refiere que las iniciativas deberán presentarse ante el Pleno del Congreso o ante el Presidente de la Mesa Directiva, más adelante en el propio texto se señala que el Ciudadano se permite “presentar (…) a este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Iniciativa (…)”, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual plantea una reforma a la Fracción Sexta del artículo 20 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente, infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se plantea una reforma a diversos artículos de la Ley Estatal de Educación para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 de octubre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 17 de octubre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se plantea una reforma a diversos artículos de la Ley Estatal de Educación para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas ciudadanas, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando anterior, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne. No obstante lo anterior, no omitimos señalar que, con respecto al requisito consignado en la fracción II del ya citado artículo 42, si bien es cierto a primera instancia se observa que el proyecto normativo va dirigido a la Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, lo cual contravendría lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley Orgánica del Congreso que refiere que las iniciativas deberán presentarse ante el Pleno del Congreso o ante el Presidente de la Mesa Directiva, más adelante en el propio texto se señala que el Ciudadano se permite “presentar (…) a este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Iniciativa (…)”, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se plantea una reforma a los artículos 50 y 53 de la Ley Estatal de Educación para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente, infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se plantea una reforma a los artículos 200, 259, 326 y 330 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 de octubre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 17 de octubre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se plantea una reforma a los artículos 200, 259, 326 y 330 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas ciudadanas, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando anterior, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne. No obstante ello, no omitimos señalar que, con respecto al requisito consignado en la fracción II del ya citado artículo 42, si bien es cierto a primera instancia se observa que el proyecto normativo va dirigido al Coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte, lo cual contravendría lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley Orgánica del Congreso que refiere que las iniciativas deberán presentarse ante el Pleno del Congreso o ante el Presidente de la Mesa Directiva, más adelante en el propio texto se señala que el Ciudadano se permite “presentar (…) a este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Iniciativa (…)”, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se plantea una reforma a los artículos 200, 259, 326 y 330 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente, infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 de octubre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 17 de octubre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas ciudadanas, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando anterior, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne. No obstante lo anterior, no omitimos señalar que, con respecto al requisito consignado en la fracción II del ya citado artículo 42, si bien es cierto a primera instancia se observa que el proyecto normativo va dirigido al Coordinador de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, lo cual contravendría lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley Orgánica del Congreso que refiere que las iniciativas deberán presentarse ante el Pleno del Congreso o ante el Presidente de la Mesa Directiva, más adelante en el propio texto se señala que el Ciudadano se permite “presentar (…) a este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Iniciativa (…)”, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se crea la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente, infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de Decreto mediante la cual se plantea una reforma a los artículos 259, 330 y 331 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 de octubre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 17 de octubre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de Decreto mediante la cual se plantea una reforma a los artículos 259, 330 y 331 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas ciudadanas, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando anterior, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne. No obstante lo anterior, no omitimos señalar que, con respecto al requisito consignado en la fracción II del ya citado artículo 42, si bien es cierto a primera instancia se observa que el proyecto normativo va dirigido al Coordinador de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, lo cual contravendría lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley Orgánica del Congreso que refiere que las iniciativas deberán presentarse ante el Pleno del Congreso o ante el Presidente de la Mesa Directiva, más adelante en el propio texto se señala que el Ciudadano se permite “presentar (…) a este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Iniciativa (…)”, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de Decreto mediante la cual se plantea una reforma a los artículos 259, 330 y 331 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente, infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se plantea una reforma a diversos artículos del Código Municipal, Constitución Política y al Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 de octubre del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 17 de octubre de 2019, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de decreto mediante la cual se plantea una reforma a diversos artículos del Código Municipal, Constitución Política y al Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente Acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su Artículo 42 establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

***I.*** *Presentarse por escrito.*

***II.*** *Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

***III.*** *Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

***IV.*** *Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

***V.*** *Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos en que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas ciudadanas, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que la iniciativa ciudadana presentada contiene tanto reformas a leyes ordinarias como una reforma en materia Constitucional, que de conformidad a su naturaleza está sujeta a un proceso legislativo distinto, mismo que se rige en lo previsto por los artículos 196 y 197 de la Constitución Política Local.

**QUINTO.-** Que aunado a lo anterior, cabe mencionar que en lo referente a la presentación de iniciativas de reformas constitucionales, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece lo siguiente:

***Artículo 196.*** *La Ley Suprema Coahuilense puede ser adicionada o reformada por el Congreso del Estado. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del bloque de la constitucionalidad local, deben observarse los requisitos siguientes:*

***I.*** *Iniciativa suscrita por el Gobernador o por uno o varios Diputados, a la que se le dará una lectura y se turnará a la Comisión correspondiente.*

***II.*** *Dictamen de la Comisión respectiva al que se le dará una lectura.*

***III.*** *Discusión del dictamen y aprobación del mismo, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes.*

***IV.*** *Publicación del expediente por la prensa.*

***V.*** *Que la adición o reforma sea aprobada por la mayoría absoluta de los ayuntamientos del Estado.*

***VI.*** *Discusión del nuevo dictamen, que se formará con vista del sentir de los ayuntamientos, la Comisión que conoció de la iniciativa, pronunciándose en sentido afirmativo o negativo, según el sentir de la mayoría absoluta de los respectivos ayuntamientos.*

***VII.*** *Declaración del Congreso, con vista y discusión del dictamen de la comisión.*

***Artículo 197.*** *Para cumplir con lo que se previene en la fracción V del artículo que precede, el Congreso después de haber cumplido los requisitos que consignan las fracciones anteriores a la citada, mandará a cada Ayuntamiento del Estado, una copia del expediente a que se refiere la fracción IV de esta misma disposición, señalándoles, asimismo, que deberán emitir su voto, para los efectos legales correspondientes.*

*Una vez que se reciba el voto favorable de la mayoría absoluta de los Ayuntamientos de los Municipios, se podrá proceder a la formulación y presentación del dictamen a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, así como a hacer la declaración que se señala en la fracción VII de la misma disposición.*

**SEXTO.-** Que en este sentido la norma citada, señala en forma expresa los sujetos que tienen el derecho de iniciar reformas a la Constitución Local, estableciendo que son sujetos de este derecho los diputados y diputadas y el o la Titular del Ejecutivo Estatal, excluyendo así a los ciudadanos, por lo que quienes dictaminamos concluimos que la iniciativa popular, por lo que hace a la reforma constitucional, no resulta procedente al no reunir los requisitos de orden constitucional.

**SÉPTIMO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular, cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el artículo 42, concluyendo que la misma, efectivamente los reúne. No obstante lo anterior, no omitimos señalar que, con respecto al requisito consignado en la fracción II del ya citado artículo 42, si bien es cierto a primera instancia se observa que el proyecto normativo va dirigido al Coordinador de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, lo cual contravendría lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley Orgánica del Congreso que refiere que las iniciativas deberán presentarse ante el Pleno del Congreso o ante el Presidente de la Mesa Directiva, más adelante en el propio texto se señala que el Ciudadano se permite “presentar (…) a este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Iniciativa (…)”, en virtud de lo cual se reitera que la iniciativa se ajusta a lo dispuesto por el artículo 42, por lo que hace a los ordenamientos ordinarios.

**OCTAVO.-** Que en virtud de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que esta comisión determina declarar improcedente la iniciativa popular por lo que hace a la modificación del artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al no reunir los requisitos de orden constitucional.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de decreto, por lo que hace a la reforma de diversos artículos del Código Municipal y del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente. Infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**TERCERO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EN LA VÍA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAMOS EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL, CON EL OBJETO DE QUE ESTA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA, EXHORTE AL EJECUTIVO FEDERAL, AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR A QUE BUSQUE INVERTIR ESTRATÉGICAMENTE EN LOS SECTORES QUE GARANTICEN UN CRECIMIENTO SOSTENIDO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA TODOS.**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. –** Que en la Tercera Sesión del Primer Segundo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, celebrada el día 18 de septiembre de 2019, se presentó el presente Punto de Acuerdo.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, el Acuerdo planteado, se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, para efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a la realización del acuerdo respectivo.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, con fundamento en los artículos 83, 95 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente Acuerdo.

**SEGUNDO. -** Que la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, en conjunto con las y los Diputados que integran el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con el objeto de que esta Sexagésima Primera Legislatura, exhorte al Ejecutivo Federal, al Presidente López Obrador a rectificar su vieja política de gasto y busque invertir estratégicamente en los sectores que garanticen un crecimiento sostenido y oportunidades de desarrollo para todos, se realizó bajo las siguientes

**CONSIDERACIONES**

Cuenta un viejo adagio que *“un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”.* Lo anterior viene a colación por el mensaje que el Presidente Andrés Manuel Obrador, envía a los mexicanos en su paquete económico 2020, el cual, por supuesto fue entregado a la Cámara de Diputados el pasado domingo 8 de septiembre por medio del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretario Arturo Herrera Gutiérrez.

En dicho paquete se proponen 41 mil 300 millones de pesos para dar continuidad a la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, a cargo de la Secretaría de Energía y el área de Proyectos de Pemex. La inversión total se estima en máximo 8 mil 134 millones de dólares para su construcción en tres años. Además, a PEMEX se le inyectarían 86 mil millones de pesos en apoyo (46 mil millones de pesos en capitalización y 40 mil millones de pesos en reducción de carga fiscal).

Quizá ésta hubiera sido una apuesta audaz, sin duda, en los años 70´s, sin embrago no hubiese sido del todo una garantía de buena inversión, y es que hay que recodar aquel descubrimiento de yacimientos de petróleo en los años 70´s que convirtió a México en un exportador importante de petróleo y productos petroleros. En 1976, Las reservas de México de hidrocarburos eran 11 billones de barriles. El gobierno mexicano esperaba el ingreso proveniente del petróleo para balancear su gasto. Pero en 1981, decayó la demanda internacional y los precios del petróleo disminuyeron, la taza de interés aumentó en todo el mundo, la inflación creció, y una deplorable balanza de pagos creó en México una crisis económica. Las condiciones externas se volvieron contra México en los 80s. El volumen de las importaciones experimentó un fuerte descenso a expensas de la inversión fija y el consumo.

Hoy, cincuenta años despúes, Acción Nacional ha propuesto e insistido en que se debe de invertir en energías limpias y sustentables, y que, hacer una apuesta tan fuerte en Petróleos Mexicanos, como lo es la inyección de 86 mil millones de pesos, es un grave error, es una apuesta propia de los años 70´s que compromete seriamente las contribuciones de los mexicanos.

En todo caso, compañeras y compañeros, se debe buscar que la iniciativa privada participe más en el sector, algo que este gobierno no está dispuesto a permitir.

Y es que López Obrador y su idea de aislamiento internacional no terminan de entender que hoy en día no existe ningún país que se pueda dar el lujo de prescindir del esfuerzo de otros países, es decir, del ahorro de otros países. Estados Unidos, Japón y Europa, en su conjunto, necesitan de capitales foráneos que inviertan en sus respectivas economías. Con mayor razón, países como México que están tratando de consolidarse como verdadera economía emergente, deben voltear sus ojos a capitales extranjeros, y de no hacerlo, el costo de lograr ese objetivo aisladamente sería muy grande. Con la ayuda externa, sería relativamente más fácil, o menos complidado, poder enderezar la economía del país.

Por consiguiente, creemos que todo país debe instrumentar políticas para atraer el esfuerzo extranjero, es decir, el ahorro de terceros estados en forma de inversión. En ese sentido el financiamiento internacional debe cumplir el rol de suplementar el esfuerzo interno de crecimiento y desarrollo. Si el ahorro externo viene a sumarse al ahorro interno de manera tal que juntos se inviertan en el país, aquél está cumpliendo su rol a cabalidad.

Cuando uno habla de financiamiento internacional se está refiriendo a la captación de dos componentes: deuda y capitales privados que vienen del exterior para ser invertidos .

En el caso de la deuda, los beneficios van a depender mucho de la inversión a la que se destine porque luego deberá pagarse con sus intereses y en moneda extranjera. Si se hace una mala inversión o simplemente se consume, se crean dificultades para el repago de dicha deuda en el futuro. En cambio, el caso de la inversión directa extranjera es diferente, ya que viene capital (normalmente privado), crea una empresa, compra una, o se asocia con una empresa pública, inyectándole capital fresco, y directamente genera inversión de calidad para poder luego obtener una rentabilidad, factor que no necesariamente se da en los casos de endeudamiento.

Cuando un endeudamiento no se utiliza bien, entonces surge el problema del repago, la de pagar a costa de un mayor empobrecimiento interno, que lamentablemente es justo lo que ocurre en nuestro estado, Coahuila.

Le volvemos a insistir al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que los conceptos de gasto e inversión son totalmente distintos. Mientras que el segundo se hace con la expectativa de recibir un beneficio futuro, el primero no lo es. Y que una mala política de gasto repercute directamente en la vida de los mexicanos. Por ejemplo, los recursos destinados este año a la construcción de la refinería, pudieron haber financiado el programa de Estancias Infantiles por los próximos diez años y esto se los recuerdo compañeras Diputadas, compañeros Diputados, esto ha sido un lamento entre la sociedad y los mismos Diputados de todos los grupos parlamentarios.

MORENA y López Obrador seguirán centrando su discurso en una “austeridad” , *una austeridad,* mal entendida. México no necesita no gastar, sino invertir estratégicamente en los sectores que garanticen un crecimiento sostenido y oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos.

**TERCERO. –** Que esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, se aboco al análisis de las consideraciones planteadas en el Acuerdo presentado, y de ello considero que las mismas son pertinentes para que la misma emita el presente acuerdo.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, estiman pertinente emitir el siguiente

**ACUERDO**

**ÚNICO.-** Este Honorable Congreso exhorta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que busque invertir estratégicamente en los sectores que garanticen un crecimiento sostenido y oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

**POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO**

DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIP. VERONICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO, CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LOS 38 AYUNTAMIENTOS DE COAHUILA, INTENSIFIQUEN Y FORTALEZCAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ENTRE SU POBLACIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS, CON LAS QUE SE PODRÁ SUSTITUIR LAS BOLSAS DE PLÁSTICOS A DOS MESES QUE ENTRA EN VIGOR LA PROHIBICIÓN DE ESTOS MATERIALES NO BIODEGRADABLES.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Diana Patricia González Soto, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando sea considerada de **urgente y obvia resolución** en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

El 17 de diciembre del 2018 este Honorable Congreso aprobó por unanimidad los iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Acción Nacional en voz de los Diputados Lucia Azucena Ramos Ramos y Juan Carlos Guerra López Negrete, que reforman diversas fracciones y adicionan artículos a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza en relación al uso de bolsas de plástico y popotes no degradables.

Este decreto 187 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de enero del 2019 y a partir del 15 de enero del 2020, termina el plazo que se otorga de 1 año para que entre en vigor, esa iniciativa que tiene como objetivo regular el uso de bolsas de plástico y los popotes.

En la exposición de motivos de ambas iniciativas, se manifestó que el uso indiscriminado de las bolsa de plástico es unos de los mayores problemas de contaminación en nuestros días, por ello la Organización de las Naciones Unidas está exhortando a todos los países a tomar medidas contra esta situación, como parte del desafío global por reducir y acabar con la contaminación.

En promedio se utilizan 200 bolsas de plástico por persona al año y tardan en degradarse alrededor de 400 años, las botellas 500 años, los popotes 100 años y los vasos desechables 65 – 75 años.

La contaminación por plástico es un grave problema mundial, sobre todo la cantidad de residuos que terminan en los océanos.

Nos quedan prácticamente dos meses de sensibilización, ya que a partir del 15 de enero del próximo año los centros comerciales, tiendas del comercio, farmacias, así como otros negocios en nuestro Estado ya no podrán proporcionar bolsas de plástico a los clientes, por lo que es importante que reforcemos campañas de promoción entre la población coahuilense, para que dejemos de usarla.

El reto es mayúsculo pero no imposible…

Porque… o nos divorciamos del plástico… o nos olvidamos del planeta…

Por ello es muy importante, el informar a la población del porqué de la prohibición, para que este bien enterada, se acostumbre, y se sume a esta nueva cultura del cuidado del medio ambiente.

Es importante mencionar y reconocer el esfuerzo del Gobierno del Estado del Coahuila, de las cámaras empresariales y los centros comerciales que están haciendo lo propio, tomando con gran seriedad y responsabilidad esa iniciativa.

Un proyecto importante que desde esta tribuna me permito compartir, es el reconocer a nombre de mis compañeras y compañeros Diputados del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, la excelente campaña que nuestro alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas lanzó hace unas semanas, de manera conjunta con el Cabildo para crear conciencia en la población sobre el uso excesivo de plástico… **“Sin bolsas de plástico por favor”** es el nombre de este proyecto que involucra a la comunidad en general.

Sin importar colores de Partidos Políticos, salieron a las calles Síndicos, Regidores, Directores, Funcionarios, y trabajadores del Municipio para visitar centros comerciales y negocios para repartir en un primer momento… más de 115 mil bolsas ecológicas con mensajes informativos sobre el daño ecológico que representa el uso excesivo de bolsas de plástico…

Dieron muestra clara de un excelente trabajo en equipo así como de responsabilidad y solidaridad, porque además… es importante mencionar que las bolsas fueron confeccionadas en los talleres del DIF de Saltillo, del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, del Centro Penitenciario Femenil y el Centro de Internación Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes.

Se estima que por cada bolsa ecológica se dejaran de utilizar 288 bolsas de plástico.

Por ello, el día de hoy hacemos un atento llamado al resto de los Municipios para que intensifiquen campañas de concientización y realicen acciones amigables para contar con ciudades más limpias y evitar con ello la contaminación.

Sabemos que los grandes cambios originan siempre una fuerte sacudida a nuestra forma de pensar, o porque nos sacan de nuestra zona de confort… pero también sabemos que estas medidas son necesarias y urgentes para cuidar y proteger nuestro planeta…

Las y los ciudadanos de Coahuila somos gente buena, noble y trabajadora, que estamos conscientes que al apoyar estas acciones, no será el fin del mundo, sino todo lo contrario el inicio de un mundo nuevo y mucho mejor…

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**UNICO.- SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LOS 38 AYUNTAMIENTOS DE COAHUILA, INTENSIFIQUEN Y FORTALEZCAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ENTRE SU POBLACIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS, CON LAS QUE SE PODRÁ SUSTITUIR LAS BOLSAS DE PLÁSTICOS A DOS MESES QUE ENTRA EN VIGOR LA PROHIBICIÓN DE ESTOS MATERIALES NO BIODEGRADABLES.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, noviembre del 2019**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
|  | | |
| **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** | | |

**HONORABLE PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PRESENTE.-**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, conjuntamente con las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el objeto de que esta Sexagésima Primera Legislatura, exhorte al Gobierno Federal para que como parte de las acciones de coordinación con la Iniciativa Privada para fomentar la participación en el “Buen Fin”, se adelante parte de la prestación del aguinaldo a los trabajadores de la Administración Pública Federal, con el objeto de ayudar a reactivar la economía del país. Lo anterior con base en las siguientes:**

**CONSIDERACIONES**

En 2011, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, conjuntamente con el Gobierno Federal, crearon en conjunto el llamado Buen Fin. Dicha medida consiste en que diversos comercios y negocios de toda la república, ofrezcan descuentos y/o promociones de sus diferentes productos durante un fin de semana especifico en el mes de noviembre.

Las ventas que se obtienen en esos días, alcanzan cifras que sin duda generan un flujo de manera positiva en la economía mexicana. Con esto se logra que el consumidor mexicano tenga acceso a productos y servicios a precios bajos, y por otro lado las empresas mexicanas logran competir con otras estrategias en el mercado global que anteriormente resultaban más atractivas hacia el bolsillo de los mexicanos.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía y Turismo en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor y el Servicio de Administración Tributaria, son las dependencias federales encargadas de coordinar el programa. Cabe destacar que ésta iniciativa que nació a petición de de un sector de particulares también cuenta con representantes de ese rubro para su organización, como lo son el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la ABM Asociación de Bancos de México, la Asociación Internet.mx y la AMVO Asociación Mexicana de Ventas Online.

Se pronostica que para este año, en la novena edición del Buen Fin, se contará con una alza de un 20% respecto de las ventas obtenidas el año pasado, esto se traduce a un aproximado de 118 millones de pesos generados en los 4 días que duran las promociones.

Es necesario tomar acciones para romper con la inercia de un país donde se vive una desaceleración económica, por ello es necesario que el Gobierno Federal promueva estas estrategias que han sido un motor de todas las administraciones pasadas, y que desde su implementación, ha logrado levantar los números de la economía mexicana.

A estas alturas del año, en las ocho ediciones pasadas, se realizaban sorteos que invitaban al consumidor a participar a través de sus compras realizadas en esos 4 días, sin embargo, para este año no hemos visto ninguna medida que fomente a que los comercios sean parte del programa, ni alguna estrategia de coordinación por parte del Gobierno Federal.

Desde su primera edición, y como parte de la estrategia de coordinación del Gobierno Federal, se optó por adelantar un porcentaje del aguinaldo a los trabajadores de la Administración Pública Federal, para así fomentar una mayor participación en el Buen Fin.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, solicitando que sea turnado a la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, y una vez analizado, de considerarlo procedente, apruebe lo siguiente;

**ÚNICO.-** Se exhorta al Gobierno Federal para que como parte de las acciones de coordinación con la Iniciativa Privada para fomentar la participación en el “Buen Fin”, se adelante parte de la prestación del aguinaldo a los trabajadores de la Administración Pública Federal, con el objeto de ayudar a reactivar la economía del país.

***ATENTAMENTE***

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 6 de Noviembre de 2019.**

**DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Partido Unidad Democrática de Coahuila por el que solicita información sobre la compra de terrenos para la construcción del aeropuerto de Saltillo en el Municipio de Ramos Arizpe, así como los argumentos y justificaciones para la suspensión de vuelos.**

**CON SU VENIA DIPUTADO PRESIDENTE.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180; 181; 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Coahuila pronto llegara a los 3 millones de habitantes, de los cuales la capital del Estado absorberá más del 30%. Estará rebasando la barrera del millón de habitantes.

Saltillo es motivo de orgullo para Coahuila, tiene historia y tradición. Sus habitantes se caracterizan por su alegría familiar, el esfuerzo y el trabajo. La industria, hecha en Coahuila y la que vino de fuera, ha sido motivo de múltiples reconocimientos que merecen nuestro aplauso. Porque detrás de cada éxito empresarial, hay hombres y mujeres que a diario dan su mejor esfuerzo por llevar el pan de cada día a su casa y sostener la competitividad de esta ciudad que nos alberga como poder constituido.

Ahora bien, son muchas las cosas que no hacen sentido en esta historia de éxito y progreso. El crecimiento urbano trajo consigo muchísimos retos sociales. La pobreza urbana y la pésima movilidad por mencionar algunos. Pero hay uno que es muy grave y que nos afecta a todos. Tiene que ver con la conectividad y por supuesto con la corrupción. Me refiero al aeropuerto de Saltillo.

El día 22 de octubre nos enteramos por los medios de comunicación que la empresa Aeroméxico va a cancelar el único vuelo que le queda a Saltillo y que se conecta con la Ciudad de México. Es así como se completa una historia de las múltiples historias de terror de un aeropuerto que fue mal planeado y cuya ineficiencia operativa nos cuesta millones de pesos a los contribuyentes.

Estamos frente a una corrupción doble. La de origen y la de todos los días. ¿Quién y porque decidieron que el aeropuerto de la capital se situara en una zona cuya neblina impide operaciones aéreas durante muchos días del año? Tengo entendido que es alrededor de un mes, porque ni cifras oficiales tenemos. Ni falta hacen, es de conocimiento y aceptación pública en Saltillo, que se tiene un mal aeropuerto. ¿A quién le compraron esos terrenos? Tan fácil, por ahí podemos empezar. Ahora bien, en materia de justicia no hay mucho que se pueda hacer. Está más que claro que esos delitos ya se sumaron a la impunidad, tantos años que han pasado, que todo el mal que se hizo ya prescribió para efectos penales. No obstante es nuestra obligación como legisladores, conocer la verdad histórica. Es lo mínimo que le debemos a los coahuilenses y a los saltillenses en particular. A toda la región sureste de Coahuila.

Pero también está la corrupción diaria. La que tolera que un aeropuerto disfuncional trabaje año tras año pagando altas nóminas y poniendo en riesgo la vida de las personas. Particularmente en estas épocas del año. ¿Por qué insistir en un aeropuerto en el que las aerolíneas se niegan a aterrizar? ¿Por qué insistir en un mediocre vuelo por año que por lo mucho llegó a mover cuarenta mil pasajeros, según cifras públicas? En la era de la globalización, que una ciudad como Saltillo no cuente con esa conectividad de calidad, es absurdo y criminal. Por favor, no caigamos en la resignación. Monterrey no es ni debe de ser la solución. Eso sería renunciar a nuestra soberanía y a nuestro derecho a ser competitivos. Además no hay una sola ciudad en México, de las dimensiones de Saltillo, que no cuente con un aeropuerto funcional, con cientos de miles de pasajeros por año. Y no hay ciudad en el mundo, con Aeropuertos igual o más grande que el de Monterrey, que no cuente con opciones aeroportuarias a una distancia similar. Cuestión de ver los sistemas aeroportuarios más importantes del mundo.

Saltillo según cifras de algunos medios locales, apenas superaba los 42 mil pasajeros. Sólo para que se den una idea, allá en el norte del estado, en Piedras Negras, andan por arriba de los 25 mil pasajeros. Con la cancelación de Aeroméxico, Piedras Negras estará mucho más conectado que Saltillo. Bien por Piedras Negras sin duda. Muy triste por Saltillo. Pero ahí no acaba la historia. Y no es que quiera meterle leña a la eterna rivalidad entre Saltillo y Torreón. Según datos de la empresa concesionaria, OMA, por Torreón transitan más de 700 mil pasajeros por año. Este dato por si mismo es penoso para Saltillo.

Vayamos a las ciudades con las que competimos. Tanto que presumimos nuestra fortaleza automotriz. Hermosillo 1 millón 700 mil pasajeros al año. San Luís Potosí 634 mil. Chihuahua 1 millón 680 mil. Todos estos datos públicos de OMA y del Grupo Aeroportuario del Pacifico. Están en internet si lo quieren verificar. Querétaro más de 1 millón, Aguascalientes 855 mil. Ya mejor ni les digo de León Bajío, la competencia más fuerte y directa, 2 millones 300 mil pasajeros. Saltillo, la Capital de Coahuila, 42 mil, perdón próximamente 0.

¿Qué ira a decir el Gobernador o el Secretario de Desarrollo Económico ahora que regresen los empresarios chinos que fueron a visitar? ¿Qué le dirán a los ejecutivos canadienses o franceses que ya están aquí? Nuestro aeropuerto está en Monterrey, en otro Estado que se llama Nuevo León. De hecho de ahí salimos nosotros. No hay otra forma de decirlo. Esto es abrumadoramente penoso.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, solicitando que sea turnado a la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, y una vez analizado, de considerarlo procedente, apruebe lo siguiente;

**Primero.-** Que este H. Pleno del Congreso del Estado solicite respetuosamente a el Ejecutivo del Estado, para que a través de las dependencias correspondientes, entregue a la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de esta Soberanía un informe detallado mediante el cual se justificó y sustentó la adquisición de los terrenos y la construcción del aeropuerto de Saltillo en el municipio de Ramos Arizpe.

**Segundo.-** Que el H. Pleno del Congreso Estado solicite respetuosamente a el Secretario de Desarrollo Económico del Estado y a el Director del Aeropuerto Internacional de Saltillo, informen a través de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de esta Soberanía los pormenores del proceso que llevó a Aeroméxico a suspender sus vuelos a Saltillo; así como la estrategia que se va a seguir para que Saltillo cuente con un aeropuerto acorde con sus necesidades y desarrollo como Ciudad.

**“POR UN GOBIERNO DE CONCERTACION DEMOCRATICA”**

**GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”**

**SALTILLO, COAHUILA A 6 DE NOVIEMBRE DE 2019**

**DIPUTADO**

**EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**DIPUTADA**

**ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO **QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS, DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”, CON OBJETO DE QUE SE EXHORTE ATENTAMENTE A LOS 38 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO A QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS, PONGAN EN PRÁCTICA O REANUDEN, SEGÚN SEA EL CASO, CAMPAÑAS DE DESARME DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN ARAS DE CONTRIBUIR A QUE PREVALEZCA EN EL PAÍS LA LEY Y EL ORDEN, AL TENOR DE LA SIGUIENTE...**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Por declaraciones del canciller Marcelo Ebrard, entre otras fuentes oficiales, sabemos que la necesidad de disminuir del tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos plantea, como nunca antes, una tarea compleja y titánica, luego de que, por décadas, el gobierno mexicano se rehusó a resolver, de raíz, este serio problema.

En vista de ello, y como bien lo ha expresado el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, este sería el momento menos indicado para bajar la guardia frente al reto de congelar el tráfico ilegal de armas.

Mucho menos se debe pensar hoy en abandonar los esfuerzos que, de manera paralela y bajo una labor de concientización y convencimiento, se realizan para mantener a la ciudadanía libre de armas.

Ambas estrategias son igualmente necesarias para pacificar a un pueblo que ha visto correr demasiada sangre.

Es de reconocerse, mientras tanto, el interés del gobierno de Miguel Ángel Riquelme de contribuir a la pacificación nacional, por ejemplo, a través del canje de armas denominado “Intercambio por la Paz 2019”, mismo que ahora esperamos sea de carácter permanente, hasta en tanto no se logre erradicar el tráfico ilegal de armas al país.

La situación es muy alarmante: la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló que cerca del 70% de los homicidios cometidos en México se relacionan con el uso de armas ilegales procedentes del vecino país del norte, y es que, según datos de la Sedena, cada año ingresan a México más de 200 mil armas de todo tipo, es decir, un promedio de 567 al día, lo que equivale a 22 por hora. Ochenta por ciento de estas remesas tienen su origen en Estados Unidos.

Coincido con el presidente de la república en que es inadmisible la introducción a territorio mexicano de armamento adquirido, casi en su totalidad, en negocios de la Unión Americana, particularmente de Texas, California y Arizona, con el que luego se generan aquí condiciones de criminalidad, violencia y zozobra.

“Todos los días, en compartimentos secretos de automóviles, o bien, escondidas dentro de camiones de carga, cientos de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México”, se lee en una reciente publicación de la BBC News.

Acerca de este intenso tráfico, prevalece una inquietante cuestión: ¿a dónde van a parar estos costosos cargamentos? La respuesta es: a manos del llamado crimen organizado, gracias a la complicidad de servidores públicos corruptos.

Así, por ejemplo, el sofisticado arsenal que está en manos del cártel de Sinaloa proviene precisamente de ese país. No por nada, hace días el presidente López Obrador acordó con su homólogo estadounidense Donald Trump una estrategia conjunta para congelar el tráfico.

Concuerdo con Ebrard Casaubon en que, si bien para el gobierno de Estados Unidos el fenómeno migratorio es un tema prioritario, para México también lo es el control de armas, por lo que este asunto no puede omitirse de entre los temas a ser desahogados con la administración de Donald Trump.

En este contexto, es de reconocerse la valiosa participación del gobierno de la república en un grupo binacional que recientemente se integró para analizar y cuantificar los artefactos de guerra que ingresan ilegalmente a México, y así actuar en consecuencia, de manera más efectiva.

En la referida tarea intervienen las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y la Fiscalía General de la República.

Pero debemos insistir en que esta tarea no estaría completa sin una campaña permanente de desarme ciudadano. A este respecto, en Coahuila se requiere una intervención más decidida de las autoridades estatales y municipales, es decir, en acciones conjuntas con las fuerzas armadas del país y las diferentes corporaciones de seguridad pública que operan en la Entidad.

Considero pertinente hacer también un respetuoso llamado a la Secretaría de Educación de Coahuila, así como a los 38 gobiernos municipales de la Entidad, a fin de que la cultura de la paz, en la cual se inspiran las acciones de desarme ciudadano, se haga extensiva a la población infantil y, a su vez, se restrinja la comercialización de juguetes bélicos en comercios y puestos de venta.

No deja de alarmar el hecho de que, a través de la difusión de “narco-corridos” y de videos donde, vía internet o televisión, se muestra a delincuentes (algunos de ellos menores de edad), haciendo gala de violencia, del uso ilegal de armas de alto poder, de falta de respeto al orden establecido y de desprecio por la vida.

No obstante, para algunas autoridades ha pasado desapercibida la venta de juguetes bélicos en locales comerciales, ferias y estands, entre las cuales existen réplicas a escala, casi exactas, de armas de grueso calibre, precisamente como las que suelen utilizar los cárteles de la droga y con las que luego se ve jugar a los niños: fusiles, escuadras, ametralladoras, granadas, lanzacohetes, etcétera

Conviene pues que, mediante estímulos o incentivos, los niños cambien también sus armas ficticias por juguetes inofensivos o algún otro tipo de compensación, lo cual contribuiría a prevenir o corregir comportamientos belicosos y eventuales daños psicológicos, como lo planteé en una reciente iniciativa que espero entre en vigor muy pronto, con el apoyo de este Honorable Pleno.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en apego a los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar ante este Honorable Pleno, a fin de que sea tramitada como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con...

**PUNTO DE ACUERDO**

**PRIMERO. - Exhórtese atentamente a los 38 Ayuntamientos del Estado a que, en coordinación con las fuerzas armadas y/o corporaciones de seguridad pública que operan en la Entidad, pongan en práctica o reanuden, según sea el caso, campañas de desarme de la sociedad civil, otorgando, en la medida de sus posibilidades, estímulos o recompensas, a cambio de las armas que los ciudadanos entreguen voluntariamente a la autoridad.**

**SEGUNDO. - Exhórtese respetuosamente a los 38 Ayuntamientos de la Entidad a que, en la medida de las facultades que les confieren sus respectivos marcos jurídicos, restrinjan la venta de juguetes bélicos en locales comerciales, estands de mercados sobre ruedas, fiestas cívicas o religiosas, ferias, desfiles, tianguis navideños, kermeses u otros lugares donde se pretenda comercializar este tipo de artículos, a fin de prevenir, como consecuencia de su uso, que resulten trastocados los valores, salud mental y conducta de niños y adolescentes.**

**TERCERO. - Exhórtese de manera atenta a la Secretaría de Educación de Coahuila a que, en coordinación con los 38 Ayuntamientos del Estado, las fuerzas armadas y/o las corporaciones de seguridad pública, se haga extensiva la cultura de la paz a la población infantil, de modo que los niños, niñas y adolescentes también canjeen sus juguetes bélicos por alguna clase de incentivo.**

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 06 de noviembre de 2019**

***“Por el Camino de la Cuarta Transformación”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”**

Proposición con punto de acuerdo, que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, solicitando se lleve a cabo una investigación y se sancionen una serie de irregularidades que se han ejecutado en el municipio de Parras de la Fuente Coahuila, por parte de las autoridades municipales.

**H. Pleno del Congreso del Estado**

**de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.-**

El Suscrito Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente:

**Exposición de Motivos**

Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy subimos a esta máxima tribuna a efecto de narrar una serie de acontecimientos que han sucedido en el municipio de Parras de la Fuente Coahuila, y que consideramos deben ser sancionados por las autoridades correspondientes, pues como verán son situaciones ilícitas que atentan contra los interese de los ciudadanos de ese municipio, siendo estos los siguientes:

**1.- Actos de nepotismo**. En la actual administración 2019- 2021 del municipio de Parras de la Fuente, el alcalde Ramiro Pérez Arciniega designó a **BRENDA KARINA VÉLEZ ZURITA,** como Directora General de Desarrollo Humano y Bienestar Social, quien es del conocimiento público de los habitantes de ese municipio la actual pareja sentimental de dicho funcionario público.

De igual forma, aparecen en la nómina municipal, **LAURA VIVIANA VÉLEZ ZURITA**, como Encargada de Adquisiciones, **ROBERTO RANGEL VÉLEZ**, en el departamento de SIMAS, **GILBERTO RANGEL VÉLEZ**, en el departamento de alumbrado público y **GILBERTO RANGEL**, también como parte del departamento de SIMAS, siendo estos hermana, hijos y ex esposo de **BRENDA KARINA VÉLEZ ZURITA** pareja sentimental del alcalde.

**2.-** En fecha 31 de Enero del año en curso, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de Parras de la Fuente, durante dicha sesión, se votó para aprobar el otorgamiento de un Poder General para Pleitos y Cobranzas y representación laboral a los C.C.C. Licenciados Guillermo Arrañaga Estrada, Mayra Elizabeth Posada Calderón, Sergio Luis Barrón Reyna, Luis Antonio Leija Tolentino, Gerardo Iván Mendoza Ibarra y José Rodrigo Martínez Llanas, a fin de fungir como representantes legales de la actual administración municipal.

En dicha sesión, de viva voz, el Alcalde Ramiro Pérez Arciniega, manifestó que a los abogados antes mencionados se les iba a pagar según el caso que estuvieran llevando y que no iban a estar de planta, sin embargo todos ellos, aparecen actualmente en la nómina municipal, ocupando puestos dentro de la actual administración sin acudir a laborar, tal y como se hace constar mediante el portal de Transparencia de la página del municipio.

**3.-** En el mes de mayo del presente año, tanto regidores como síndicas de mayoría y vigilancia del municipio de Parras de la Fuente, recibieron por parte de la **Lic. Mayra Elizabeth Posada Calderón,** quien funge como Secretaria Técnica del ayuntamiento, el proyecto de Reglamento de COPLADEM, dándose estos servidores públicos a la tarea de revisarlo y analizarlo tanto de manera individual como de forma grupal mediante mesas de trabajo, aprobando un proyecto de reglamento, el cual solicitaron fuera agregado en los puntos del orden del día de la sesión de cabildo que correspondiera, a fin de aprobarlo de manera definitiva para su publicación.

Cabe hacer mención, que al llevarse a cabo la Octava Sesión Ordinaria en fecha 7 de junio del presente año, misma que se citó con menos de 24 horas de anticipación, se agendó como uno de los puntos del orden del día la aprobación del reglamento del COPLADEM, el cual ya había sido analizado previamente por los regidores y sindicas del municipio, mismo que se aprobó durante el desarrollo de dicha sesión, la situación irregular es que los regidores y sindicas al verificar la publicación de dicho reglamento, se llevaron la sorpresa de que es un documento totalmente distinto al que ellos aprobaron, el cual tiene muy diversas modificaciones en las cuales no están de acuerdo, además de haber sido engañados tanto por el alcalde como por el secretario del ayuntamiento, pues es un documento totalmente distinto el que se aprobó al que fue publicado.

**4.-** En fecha 12 de junio del 2019, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria, misma que en su orden del día, venía la ratificación de los acuerdos número 572, 573, 574, 575, 576 y 577 emitidos dentro de la Décima Sexta sesión extraordinaria por el Ayuntamiento 2014-2017 en fecha 16 de noviembre del 2017, los cuales trataban lo referente a la concesión del servicio de alumbrado público municipal, acuerdos que no fueron ratificados, llegándose solo al acuerdo de que se enviara el acta del año 2017, al Congreso del Estado para que se emitiera una opinión al respecto, toda vez que se trataba de una concesión por 20 años, además el alcalde Ramiro Pérez Arciniega, comento que no contaba con las bases de la licitación que se realizó en ese año, así mismo tanto regidores como sindicas le hicieron ver al alcalde, que las necesidades en cuanto al número de lámparas era distinta en la actualidad a las del año 2017, por lo que se requería un nuevo diagnóstico, siendo dichos motivos por los que no se ratificó ninguno de los acuerdos mencionados, quedando solo como ya se mencionó con anterioridad, el acuerdo de enviar el acta al Congreso del Estado para su opinión.

Al respecto cabe señalar, que de esta segunda sesión Extraordinaria se realiza el acta correspondiente, en la cual se advierte que cuenta con 12 firmas de las 14 que deberían de aparecer, destacando que una de las firmas que están estampadas es la del Secretario del Ayuntamiento Esteban Sebastián Zul Núñez, faltando las firmas de la C. Irma Aracely Beltrán González, Síndica de Mayoría, quien no estuvo presente en dicha sesión y las de el C. Evaristo Madero Marcos, Noveno Regidor y C. Celia Avila Valenzuela, Síndica de Vigilancia, quienes se negaron a firmar por no estar de acuerdo.

Pero la grave falta realizada tanto por el alcalde Ramiro Pérez Arciniega, como por el secretario del ayuntamiento Esteban Sebastián Zul Núñez en este hecho, es que al tener acceso a la copia del acta de referencia se puede observar que no contiene lo que en realidad se acordó, es decir existe una muy delicada alteración del contenido, pues según copia de esa acta, se manifiesta que fueron aprobados por unanimidad de votos y en consecuencia se ratificaron los acuerdos con número 572, 573, 574, 575, 576 y 577, emitidos dentro de la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento 2014- 2017, referente a la concesión del servicio de Alumbrado Público Municipal por 20 años, situación que es muy grave pues existe una alteración del contenido de un acta pública de un órgano colegiado, que merece ser sancionada con todo el rigor de la ley, pues como se ha mencionado reiteradamente, lo único que se acordó por el cabildo en pleno, fue que se enviara toda la documentación al H. Congreso del Estado, para que se les emitiera una opinión respecto a la sesión de cabildo realizada en ese año 2017, así como de la licitación que avala la concesión del alumbrado público antes mencionada.

**5.-** En fecha 26 de Julio del año en curso, tanto Aracely Beltrán sindico de Mayoría como las regidoras Elia Sandra Jiménez Segura y Blanca Moreno López, se comunicaron a la Secretaria del Ayuntamiento, para preguntar la fecha de la próxima sesión de cabildo pues hasta esa fecha no se había realizado ninguna de las sesiones correspondientes a ese mes, contestándoles el Licenciado Esteban Sebastián Zul Núñez Secretario del Ayuntamiento, que no sabía la fecha, que aun el alcalde no le había avisado. Por lo que ellas le comentaron, que el día martes 30 de Julio, tenían compromisos derivados de sus comisiones, por lo que en caso de programar la sesión de cabildo ese día, no estarían presentes siete de los integrantes del cabildo, por tanto si pensaban realizar la sesión en el mes en curso, la programaran el día lunes 29.

En ese sentido, el día 29 de Julio, aproximadamente a las 15:00 horas, por medio de un grupo de whatsapp denominado “asistentes regidores”, una secretaría de nombre Diana, envió fotografía de un citatorio en el cual se comunicaba que se llevaría a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento a las 15:00 horas del día 30 de Julio del 2019 y que los puntos a tratar en el orden del día para dicha sesión serían entre los que a funciones específicas conciernen:

a) Aprobación o no de las observaciones al Presupuesto de Egresos 2019

b) Aprobación o no de los estados financieros del Municipio relativos al segundo trimestre 2019.

Al ver dicha notificación, la síndico de mayoría Aracely Beltrán se comunicó vía telefónica con el Alcalde Ramiro Pérez Arciniega, diciéndole que como era posible que iban a realizar esa sesión si ya le habían mencionado al secretario del ayuntamiento no les era posible asistir ese día a siete integrantes del cabildo, además le cometa que como se iban a revisar las cuentas si ni siquiera las habían analizado previamente función que por ley le corresponde a la síndico, comentándole el alcalde que iban a buscar la manera de cancelarla, sin embargo le llama después y le comenta que no se podía cancelar porque se iban a meter en más problemas.

Así las cosas, el día 30 de julio se llevó a cabo la sesión de cabildo y el secretario del ayuntamiento Esteban Sebastián Zul Núñez de manera ilegal desempeñolas funciones de síndico de mayoría, participando inclusive en la votación de los puntos de acuerdo del orden del día, lo cual consta en el acta de la Décima Sesión Ordinaria.

Sin lugar a dudas esta grave falta cometida por el secretario del ayuntamiento del municipio de Parras de la Fuente, debe ser tipificada como delito pues dicho funcionario público usurpo funciones que no le correspondían, participando activamente de manera indebida en una votación en una sesión de cabildo, cuando por ley es una función que no le corresponde, debiendo ser sancionado por tal hecho, máxime que se trataron y aprobaron situaciones tan delicadas como son los estados financieros y la cuenta pública del municipio.

**6.-** Por último, y no menos importante deseamos señalar el millonario desvió de recursos económicos, que realizó el alcalde Ramiro Pérez Arciniega por conducto de la tesorería municipal, pues está plenamente comprobado que dicho servidor público, ordenó a la tesorera municipal, realizar diversos traspasos económicos por la cantidad de $4,760.00 (cuatro millones setecientos sesenta mil pesos M.N.), con el pretexto de que se efectuarán esos traspasos para pagar los gastos generados por la feria internacional de la uva, a la dirección de turismo municipal de ese municipio, así se los mencionó esta funcionaria pública, tanto a regidores y sindicas con las que un servidor ha estado en contacto en los últimos días.

En efecto, me refieren tanto regidores como síndicas de dicho municipio, que dichos traspasos se hicieron a modo de préstamo, ya que el dinero salió de la cuenta de presidencia y se traspasó a esa cuenta que aparece para pagar la feria internacional de la uva, sin embargo solo regresaron a la cuenta de presidencia una pequeña parte, quedando un faltante de 4’760,000 pesos. En esta cuenta aparecen los siguientes movimientos:

12 de julio 2’000,000

16 de julio 100,000

1 de agosto 600,000

2 de agosto 250,000

8 de agosto 1’200,000

14 de agosto 1’200,000

21 de agosto 130,000

De igual forma, me refieren regidores y sindicas que el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, tiene prioridades como el bacheo, alumbrado público, entre otras cosas y en el caso de que se hubiera puesto a votación del cabildo, el traspaso de esta cantidad millonaria para pagar los gastos de la feria internacional de la uva, no se hubiera autorizado la realización de dichos movimientos por casi cinco millones de pesos, por lo que consideramos que tiene tanta responsabilidad el alcalde, como la tesorera y el director de turismo que fue el presidente del comité de la feria internacional de la uva de Parras.

Por otro lado, me refieren los funcionarios municipales, que también tienen conocimiento del pago indebido de toldos que se destinaron para el usos de los artesanos para el evento de la feria internacional de la uva, y ese pago no ha sido respaldado o justificado correctamente, decisión que también fue únicamente del alcalde, pues los compraron e hicieron que los artesanos firmaran un pagaré y lo tenían que ir pagando teniendo como fecha límite el mes de diciembre, más sin embargo los toldos salieron de muy mala calidad y los artesanos los regresaron, por lo que en la tesorería municipal les dijeron que pasaran a recoger su pagaré y que ya no adeudaban nada, el problema es que ese dinero que se gastó indebidamente por decisión unilateral del alcalde, está afectando las arcas municipales y merece ser sancionado sin lugar a dudas.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de este H. Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para su urgente y obvia resolución.

**PRIMERO.-** Que esta LXI Legislatura, envié un exhorto tanto a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, así como a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas **y al órgano de control interno del Municipio de Parras**, **para que en el ámbito de sus respectivas competencias,** inicien las denuncias así como los procedimientos administrativos, que conforme a derecho corresponden y procedan a investigar y en su caso sancionar, los actos **que pudieran considerarse como** nepotismo así como las **conductas que pudieran resultar como** irregularidades administrativas **y que se señalan** en el presente punto de acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la presente proposición con punto de acuerdo, sea turnada a la Comisión de Asuntos Municipales de este H. Congreso, para que le den el mismo seguimiento que a las otras proposiciones con punto de acuerdo, que le han sido turnadas y que tienen que ver con **presuntos** actos de nepotismo y faltas cometidas en los municipios, con el fin de que en su momento emita un dictamen con relación a este tema en particular.

**TERCERO.-** Que la presente proposición con punto de acuerdo, sea turnada a la Comisión de Auditoria Gubernamental y Cuenta Pública de este H. Congreso, a efecto de que determine si es necesario solicitarle a la Auditoria Superior del Estado, la realización de una auditoria **por situaciones excepcionales** sobre las **posibles** irregularidades financieras narradas en el presente punto de acuerdo al municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 06 de Noviembre del 2019.**

**Dip. Edgar Sánchez Garza**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), PARA LOS EFECTOS DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA SOLICITE AL LIC. JORGE ZERMEÑO INFANTE, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREÓN, INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE DOS MENORES RESULTARON ATROPELLADOS POR UNA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL, LOS HECHOS QUE DERIVARON EN LA QUEMA DE LA PATRULLA Y, EN SU CASO, LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS PARTICULARES INVOLUCRADOS EN ESTOS HECHOS.**

Compañeras y Compañeros:

La suscrita, **DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ,** del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (**MORENA**), con fundamento en las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso, comparezco para presentar Proposición con Punto de Acuerdo, para los efectos de que el Pleno del Congreso del Estado le solicite, al Lic. Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón, un informe sobre las circunstancias en que dos menores de edad resultaron atropellados por una patrulla de la policía municipal, los hechos que derivaron en la quema de la patrulla, así como sobre las responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos y los particulares involucrados en estos hechos.

Sustento mi proposición en las siguientes consideraciones:

El pasado sábado, en circunstancias que no han sido suficientemente explicadas, dos menores de edad resultaron atropellados por una patrulla de la policía municipal. Los hechos ocurrieron, según las versiones periodísticas, en la Colonia Zaragoza Sur de la ciudad de Torreón.

Para mejor comprensión del asunto, me voy a permitir reproducir una nota periodística publicada por Milenio y que puede ser consultada en la siguiente liga : <https://www.milenio.com/policia/incendian-patrulla-colonia-zaragoza-sur-torreon>

“Una patrulla de la Policía Municipal, fue incendiada por vecinos de la colonia Zaragoza Sur, luego que al parecer atropellara a dos niños. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche de este sábado, en Lago Baican y Lago Superior.

El primer reporte que entró a la línea de emergencia, indicaba que una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública, había sido baleada. Sin embargo, se reportó que la patrulla de la Policía Municipal había sido incendiada por vecinos de ese sector habitacional. Los bomberos acudieron hasta el lugar y sofocaron el incendio.

Hasta el lugar, se movilizó una ambulancia de la Cruz Roja y al arribar los paramédicos les brindaron las primeras atenciones médicas. Los niños fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Torreón donde quedaron internados en el área de urgencias. Una vez que los niños fueron atropellados los vecinos prendieron fuego a la patrulla. Hasta el momento no se ha informado si hubo personas detenidas.” (fin de la cita)

Los hechos ocurrieron a las diez de la noche y acudieron diversos medios informativos, entre ellos los periódicos El Siglo de Torreón y Milenio y se documentó con fotografías la patrulla en llamas. Sin embargo, las autoridades competentes se negaron a informar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Es condenable que los vecinos y familiares de los menores hayan incendiado la patrulla y, con independencia de la indignación que sentían, el hecho de incendiar una patrulla es un delito que debe ser perseguido y castigado.

Pero también es condenable que las autoridades competentes, ante estos lamentables hechos, guarden silencio, generando la percepción de que pudiera haber encubrimiento porque, de entrada, quién conducía la patrulla debió haber sido detenido para investigar los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades.

En virtud de que estas proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad a un acuerdo de la Junta de Gobierno, deben registrarse el día lunes a las 10 de la mañana, existe la posibilidad de que, ante la presión de los medios y de los familiares de los menores, se hayan dado a conocer algunos pormenores de los hechos.

No obstante lo anterior, considero que es indispensable que el Congreso del Estado, como representación popular, solicite respetuosamente, al Alcalde Jorge Zermeño la información de estos lamentables hechos, en primer lugar, el atropellamiento de dos menores de edad y también la destrucción de una patrulla de la policía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, solicitando que sea turnado a la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, y una vez analizado, de considerarlo procedente, apruebe lo siguiente;

**ÚNICO.** El Congreso de Coahuila de Zaragoza respetuosamente solicita al Lic. Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón, un informe sobre las circunstancias en que dos menores de edad resultaron atropellados por una patrilla de la policía municipal, los hechos que derivaron en la destrucción de la patrulla, así como las responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos y los particulares involucrados en estos hechos.

Saltillo, Coahuila, a 6 de noviembre de 2019.

**DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA JOSEFINA GARZA BARRERA, “CON OBJETO DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, PARA QUE DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA INFLUENZA Y REFORZAR LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LOS CUIDADOS REQUERIDOS EN LA TEMPORADA INVERNAL.”**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Josefina Garza Barrera, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Según la Organización Mundial de la Salud, la gripe estacional se manifiesta con síntomas como la fiebre, tos, dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal, dichos síntomas en personas con alto riesgo puede ser una enfermedad grave, e incluso mortal.

La hospitalización suele requerirse en los grupos de alto riesgo y aunque cualquiera puede verse afectado por una gripe, las personas que mayor riesgo a desarrollar una enfermedad grave son las embarazadas, los menores de 5 años, los adultos mayores y aquellos pacientes con enfermedades crónicas, ya sea cardiacas, pulmonares, renales, metabólicas, del desarrollo neurológico, hepáticas o hematológicas; así como personas con VIH/sida, en quimioterapias, etc.

Aunado a lo anterior, se sabe que la gripe estacional se propaga muy fácilmente y se transmite rápidamente en lugares de mayor afluencia, como escuelas, hospitales, guarderías, asilos, etc., debido a que al toser o estornudar las personas infectadas dispersan en el aire gotículas o gotas con virus, estas pueden alcanzar distancias de hasta un metro, otra forma de transmisión es por las manos contaminadas.

El periodo de incubación, es decir, el tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de la enfermedad es de unos 2 días, pero oscila entre 1 y 4 días.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, en los primeros meses de 2019, Coahuila ha registrado alrededor de 269 casos de influenza, 135 en mujeres y 134 en hombres, casi tres veces más de los que se registraron en el 2018, donde solamente se confirmaron 99 casos.

Ante esta situación, consideramos que es de suma importancia seguir insistiendo a la población que las vacunas son imprescindibles para todas las personas, mayormente a los grupos más vulnerables o con mayor riesgo de contagio, como los menores de 5 años y los adultos mayores, pues la falta de vacunación, o un retraso en el inicio del tratamiento antiviral en una persona con otras enfermedades, incrementan el riesgo de muerte.

Debemos tomar en cuenta que nos encontramos ante el desabasto de medicamentos para tratar enfermedades tales como el cáncer, el VIH, la diabetes y la hipertensión, y si a esto le sumamos enfermedades respiratorias como la influenza el resultado es mortal.

En ese contexto es necesario solicitar a las autoridades en materia de salud, incrementen las campañas de difusión sobre los cuidados que requieren estos grupos vulnerables en la temporada invernal, además de lograr dar cobertura con la aplicación de vacunas antivirales en aquellos lugares en los que se encuentran las personas de alto riesgo como lo son, los asilos de ancianos, las escuelas de educación preescolar, principalmente. Y además que a través de dichas campañas se concientice a la ciudadanía de la importancia que tiene la aplicación de esta vacuna.

Por lo anteriormente expuesto es que resulta necesario que la Secretaría de Salud Federal garantice el abasto de vacunas suficientes contra la influenza, con el fin de evitar posibles brotes epidemiológicos, así como fortalecer las campañas informativas sobre los peligros que puede ocasionar esta enfermedad, pues es obligación del Estado garantizar el acceso a servicios de salud más eficaces y de calidad para toda la población, en particular, para los grupos más vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, solicitando que sea turnado a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, y una vez analizado, de considerarlo procedente, apruebe lo siguiente:

**ÚNICO.- SE ENVÍE UN ATENTO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, PARA QUE DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA INFLUENZA Y REFORZAR LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LOS CUIDADOS REQUERIDOS EN LA TEMPORADA INVERNAL.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, noviembre 2019**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO “CON OBJETO DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, PARA QUE DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA INFLUENZA Y REFORZAR LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LOS CUIDADOS REQUERIDOS EN LA TEMPORADA INVERNAL.”

**PUNTO DE ACUERDO**

**Proposición con punto de acuerdo que presenta el Dip. Juan Antonio García Villa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual se solicita a esta honorable asamblea legislativa apruebe se dirija comunicación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para hacerle saber que el similar aprobado el pasado 16 de octubre de manera unánime por este Congreso a instancias del Dip. Jaime Bueno Zertuche, para que dicha Comisión legislativa al “aprobarse el Presupuesto de Egresos del 2020… considere el destino de mayores recursos” para la Universidad Autónoma de Coahuila, deja de tener el apoyo de los nueve diputados del Partido Acción Nacional, por las consideraciones que adelante se exponen.**

Juan Antonio García Villa, en mi carácter de diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por los artículos 21, fracción VI, 179, 180, 181, 182 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, me permito presentar a la consideración del honorable Pleno esta proposición con Punto de Acuerdo, a la que solicito se le dé trámite de urgente u obvia resolución, conforme a la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:**

Los veinticinco legisladores que integramos este Congreso recibimos del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Salvador Hernández Vélez, una atenta carta fechada el 26 de septiembre de 2019, en la que nos manifiesta que la UAdeC está “sufriendo grandes presiones financieras”. Concretamente, dice en su misiva, requiere con urgencia poco más de 571 millones de pesos para atender cuatro diferentes rubros, el más importante por la cantidad de 328 millones de pesos para el pago de las pensiones y el aguinaldo del presente año a los 2,129 jubilados.

Posteriormente, el pasado 16 de octubre, el Dip. Jaime Bueno Zertuche a nombre de todos los integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, presentó punto de acuerdo a efecto de que este Congreso solicitara a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020 “considere el destino de mayores recursos para la debida atención” de las urgentes presiones de gasto que está sufriendo la UAdeC.

Los diputados del Partido Acción Nacional, con espíritu de solidaridad, hicimos causa común y apoyamos tal solicitud, pues consideramos que comunicar al destinatario que tal petición recibió la aprobación unánime de este Congreso, pudiera estar en mejores condiciones de ser atendida. Votamos pues a favor la propuesta del Dip. Bueno Zertuche.

Posteriormente, en la sesión de pasado 30 de octubre, siempre con el ánimo de encontrar más vías de solución al grave problema económico que aqueja a la UAdeC, los diputados de Acción Nacional solicitamos convocar al rector Hernández Vélez a explicarnos qué tanto se han corregido las graves irregularidades y malos manejos financieros en que ha incurrido la institución, como lo ha venido señalando la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Mencionamos concretamente que en el Informe de Resultados de la Revisión a la cuenta pública del año 2017, se indica que a la UAdeC se le dieron a conocer nada menos que 576 observaciones cuyas correspondientes irregularidades fueron valorizadas en 3 mil 884 millones de pesos.

Señalamos que sólo una de tales irregularidades, consistente, según informó la ASE, en pagos que en 2017 se hicieron a “empleados que se desempeñan en dos o más plazas laborales sin acreditar la compatibilidad de horarios”, sumaron nada menos que 571 millones de pesos. Nótese que se trata de una cantidad muy parecida a la presión de gasto que dice el rector trae la UAdeC.

También dimos cuenta que en el Informe de Avance de Gestión Financiera al segundo trimestre del año en curso, 2019, el auditor externo, “Consultores Asociados, J. Rodríguez Turcato, S.C.”, hace el señalamiento de que en la UAdeC continúa el desorden en el pago de la nómina.

Por eso en la pasada sesión los diputados del PAN propusimos, por considerarlo pertinente y útil, escuchar al rector de la UAdeC para que explicara qué se ha hecho para corregir las irregularidades que en el manejo financiero le han sido detectadas tanto por la ASE como por el Auditor Externo. Pero la mayoría de este Congreso desdeñó nuestra propuesta. Consideramos por ello que al grupo mayoritario y sus aliados no les interesa resolver los problemas de fondo y menos aún combatir en serio la asfixiante corrupción que se observa no sólo en la UAdeC sino en la mayoría de las dependencias estatales.

Por ello retiramos la aprobación que dimos a Punto de Acuerdo presentado por el Dip. Bueno Zertuche en la sesión del pasado 16 de octubre, pues toda vez que a través de nuestros compañeros diputados federales estableceremos comunicación con la Comisión de Programación y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, no deseamos que se nos señale como incongruentes en las gestiones y acercamientos que llevaremos ante dicha Comisión legislativa en los ya próximos días.

Por lo expuesto y con fundamento en los preceptos ya invocados de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se solicita la aprobación, por la vía de urgente u obvia resolución, del siguiente

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO.** **Se instruye a la Oficialía Mayor comunique oficialmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional retira su apoyo a la solicitud que le fue presentada el pasado mes de octubre para que considere “el destino de mayores recursos” a la Universidad Autónoma de Coahuila, por las razones que arriba se exponen.**

Saltillo, Coahuila, a 6 de noviembre de 2019.

**ATENTAMENTE**

*“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA*

*Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”*

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL**

DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS | DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN |
| DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor del Partido Unidad Democrática de Coahuila por el que se exhorta a las autoridades educativas a ampliar el personal de psicólogos que atienden los diversos centros escolares y el presupuesto para la operación de los USAERS en todo el estado y la región carbonífera.**

**Con su venia Diputado Presidente.**

**H. Pleno del Congreso del Estado.**

**Presente.-**

La Suscrita Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, conjuntamente con quienes suscriben este punto de acuerdo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180; 181; 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Coahuila es fuerte por enfrentar de forma propositiva los problemas que se le presentan. Para nadie es desconocida la problemática a nivel estatal respecto a problemas de salud mental y los vemos en casa, en la escuela y en la comunidad.

Recientemente aprobamos una legislación para dotar de herramientas al estado y la ciudadanía en materia de prevención del suicidio.

Hoy retomo el tema de la salud mental como fundamental para el desarrollo humano de todos nosotros.

Hace algunos meses planteaba la necesidad de fortalecer la cobertura de psicólogos con especialidad educativa en todo el sistema educativo estatal, con la finalidad de atender a la comunidad escolar de Coahuila.

“¿Qué define específicamente a un psicólogo educativo respecto a otros profesionales del ámbito escolar o educativo? Ya que la Psicología es la ciencia del comportamiento, consecuentemente, el psicólogo educativo es el profesional que analiza, evalúa e interviene, desde el conocimiento de los principios y de la evidencia científica psicológica, los problemas educativos actuales. Por tanto, es el profesional que trabaja con conocimientos y modelos científicos explicativos a la hora de evaluar e intervenir. Es el especialista que ha sido formado en los procesos de desarrollo (Psicología del desarrollo) y del aprendizaje humano (Psicología del aprendizaje), así como, en los procesos de enseñanza (Psicología de la instrucción). Además, su ámbito profesional de trabajo son los contextos educativos formales (escuela), no formales (familia, organizaciones) e informales (tiempo libre, TV, cine, internet, asociaciones…) para favorecer la salud mental y el bienestar psicológico”, plasma el catedrático de Psicología Evolutiva en España, Jesús De la Fuente Arias en su artículo “Relevancia del psicólogo educativo como profesional especializado: funciones específicas”.

El artículo 7 de la Ley de Educación del Estado de Coahuila en su fracción XVII establece que se tienen como obligaciones:

X VII. Fomentar las medidas necesarias para la protección y cuidados de las y los alumnos, para preservar su integridad física, emocional, psicológica y social, propensas a detectar, prevenir y evitar conductas violentas entre ellos, que atente en contra de su desarrollo y competencias; individuales, sociales e integridad física, sobre una base de respeto y dignidad.

XVIII.- Promover, fomentar e impulsar en los educandos una cultura de paz, a través de técnicas de mediación y prácticas restaurativas para la solución de conflictos derivados del ámbito escolar.

El artículo 36 de la Ley de Educación establece: La educación básica tiene como propósito formar y desarrollar en los educandos las competencias necesarias para favorecer el desarrollo armónico e integral de su personalidad, su comprensión del medio ambiente e incorporación a la vida social.

La Secretaría de Educación del Estado diseñará las estrategias necesarias para articular pedagógicamente los niveles educativos que comprende la educación básica tomando en consideración la normatividad aplicable que en este rubro señale la autoridad federal. En el servicio educativo destinado a menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su persona y la aplicación de la disciplina escolar compatible con su edad.

Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos y la obligación que tienen al estar encargados de la custodia de los menores educandos, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.

De acuerdo con información de profesores de las Escuelas Primarias y Secundarias de la Región Carbonífera, cada vez son más los casos donde los maestros solicitan la participación de psicólogos para la valoración de los diferentes casos que se presentan en las escuelas. Entre ellos violencia, bullying, hiperactividad o déficit de atención.

Las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) es una instancia técnico operativa de apoyo a la atención de alumnos de necesidades educativas y/o discapacidad integrados a las escuelas de educación básica mediante la orientación personal y docente.

Su misión ha sido favorecer el acceso y la permanencia de las niñas, los niños y jóvenes que presentan necesidades especiales en el Sistema Educativo dando prioridad a aquellos que tienen alguna discapacidad.

El punto es que los USAER tienen una carga de trabajo excesiva, en primer lugar porque atienden a la población objetivo para quienes fueron creados y segundo porque están atendiendo problemas de salud mental comunes en los niños y jóvenes de educación básica como el hiperactividad, violencia y algunos casos esquizofrenia.

“En el mundo, los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública con un alto costo social que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socioeconómico o cultura. La enfermedad mental participa del 13% de la carga global de enfermedad, constituye una de las tres primeras causas de mortalidad de personas entre 15-35 años, esto último influido por el suicidio”, destaca el informe de Salud Mental en México

El suicidio es la segunda causa de muerte a escala mundial más común entre los jóvenes. Y de acuerdo al informe una influencia mutua entre los trastornos mentales y otras enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la infección por el VIH y el SIDA.

“Asimismo, también hay una importante aparición conjunta de los trastornos mentales y los trastornos por abuso de sustancias. Considerados en conjunto, los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias suponen un costo elevado para los resultados en materia de salud”, explica.

En el caso de niños y adolescentes según los reportes epidemiológicos en el mundo, la prevalencia de enfermedad mental es 20%, de este porcentaje, entre el 4 y 6% requiere intervención clínica, pero pocos tienen acceso a servicios, y aunque la falta de servicios especializados es un fenómeno mundial, la región de las Américas muestra una brecha del 26% en los servicios de salud mental para niños y adolescentes.

Recientemente el Gobierno Federal destacó que urgente fortalecer acciones preventivas en materia de salud mental. Si bien las instituciones de salud en todo el país están haciendo esfuerzos preventivos dando cobertura y atención psicológica, es necesario fortalecer la acción preventiva.

De acuerdo con un estudio realizado por especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, uno de cada cuatro mexicanos, entre 18 y 65 años, ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo uno de cada cinco, de los que lo padecen recibe tratamiento. Entre las enfermedades mentales más comunes está la depresión, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima.

Es importante centrarnos en lo que sucede en el mundo para tomar acciones

Locales, en Coahuila.

De acuerdo con la OMS, más de 800 mil personas se suicidan al año a nivel mundial, lo que equivale a una muerte por suicidio cada 40 segundos. Según las estadísticas de mortalidad de Inegi, durante 2016, Coahuila registró 171 casos de suicidios, cifra que posicionó al estado dentro de las 15 entidades con mayor número suicidios en el país.

Fuente: <https://newsweekespanol.com/2018/10/datos-y-retos-de-la-salud-mental-en-coahuila/> Publicado por: NWCOAHUILA.

En el caso de nuestra entidad el Sistema Educativo Estatal en Educación básica se tiene una matrícula estimada de 900 mil alumnos en 5201 planteles de acuerdo al Programa Estatal de Educación.

Los USAER que atienden en las cinco regiones de Coahuila son insuficientes para una cobertura adecuada.

Aunque el Sistema Educativo Estatal hace esfuerzos por capacitar a docentes y trabajadores de la educación en orientación tanto a alumnos y padres de familia a veces son insuficientes, de la misma manera el personal de psicólogos adscritos a las zonas escolares.

Sabemos el sistema educativo será siempre socorrido para actuar de manera proactiva en la detección y análisis de la problemática social. Sin embargo en la mayoría de los casos es en la comunidad escolar dónde se pueden detectar problemas que como autoridades podemos prevenir.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, solicitando que sea turnado a la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, y una vez analizado, de considerarlo procedente, apruebe lo siguiente:

**PRIMERO.-** Que esta H. Congreso del Estado solicite respetuosamente al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, informen sobre las acciones coordinadas que realizan para prevenir y atender problemas de salud mental en los centros escolares de educación básica en todo el Estado.

**SEGUNDO.-** Que este H. Congreso del Estado solicite de manera respetuosa al titular de la Secretaría de de Educación del Estado de Coahuila informe a esta Soberanía con qué personal especializado cuentan en toda la entidad para la atención y orientación psicológica a estudiantes y padres de familia.

**TERCERO.-** Que este H. Pleno solicite a la Secretaría de Educación del Estado la ampliación de cobertura de los USAER, así como presupuesto para su operación con personal y equipamiento, esto debido al incremento de la necesidad de atención psicológica en la región carbonífera y en todo el estado.

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**SALTILLO, COAHUILA  06 DE NOVIEMBRE DE 2019**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,** **A TRAVÉS DE LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A RECONSIDERAR LA PERTINENCIA DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN IV A LA LEY ESTATAL DE SALUD DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 21 fracciones VI y VII, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto acuerdo a través de la que se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nuevo León a reconsiderar la reciente reforma al artículo 48 fracción IV de su Ley Estatal de Salud en materia de objeción de conciencia.

**MOTIVOS DE ESTA PROPOSICIÓN.**

El derecho a la salud y el bienestar de las personas, es un derecho fundamental garantizado por nuestra constitución en su artículo 4º así como diversos tratados internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales conocido como "Protocolo de San Salvador" y la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre muchos otros.

Así el derecho a la protección de la salud constituye un elemento prioritario de cualquier sociedad, pues la sanidad se convierte en la piedra fundamental para poder ejercer muchos otros derechos. De ahí, la importancia de que este derecho esté tutelado tanto en la normativa interna como en el derecho internacional y que, quienes somos autoridades, tengamos la obligación específica de promover, proteger, respetar y garantizar este de derecho.

La anterior reflexión viene a colación porque el día 15 de octubre pasado, el Congreso del Estado de Nuevo León, aprobó una reforma a la fracción IV del artículo 48 de la Ley Estatal de Salud de esa entidad, con la finalidad de establecer que el personal médico y de enfermería pueda excusarse a prestar los servicios que establece la citada ley, por motivos de objeción de conciencia.[[24]](#footnote-24)

Tal cambio legal no sería tan controversial de no ser porque la norma no establece ni obliga a que en los centros de salud exista personal médico y de enfermería no objetor de conciencia, lo cual desde luego, es un vacío legal que puede generar discriminación hacia ciertos sectores de la población en situación de vulnerabilidad, como personas con VIH- SIDA, personas de la Comunidad LGBTTTIQ, o mujeres que deseen interrumpir un embarazo por las causales legales previstas en las normas penales del Estado de Nuevo León, pues de darse el caso no habría médicos obligados a prestar el servicio a los miembros de estos grupos.

Es importante mencionar que la objeción de conciencia es un derecho fundamental necesario para todo profesional de la salud, y una extensión indispensable de la libertad de pensamiento y conciencia, sin embargo, y como ningún derecho es absoluto, es necesario revisar los términos en que se ha planteado la citada reforma legal pues esos pueden resultar desproporcionados al no establecer que los centros de salud cuenten con personal médico no objetor con el fin de que a ninguna persona se le pueda negar la atención médica.

Desde esta tribuna, nos sumamos a la preocupación que ha generado la reciente reforma en diversas instituciones del país, como lo son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de Gobierno de esa entidad así como diversas organizaciones de la sociedad civil a nivel estatal y nacional.[[25]](#footnote-25)

De la misma forma, es importante destacar que en un mensaje ante medios de comunicación el Secretario de Gobierno de Nuevo León anunció que el Ejecutivo de la entidad vetaría la reforma, por considerarla violatoria de derechos humanos, este proceso, como todos sabemos, permitiría que el Congreso local pudiera modificar la norma a fin de que el contenido de la misma resulte conforme con la constitución y con los tratados internacionales.

En ese sentido, y siendo muy respetuosos del trabajo de las y los diputados del Congreso del Estado de Nuevo León, solicitamos a ese órgano legislativo que reconsidere la redacción del artículo en comento y de ser posible haga las adecuaciones necesarias al mismo, con el fin de garantizar el derecho a la salud para todas y todos los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, solicitando que sea turnado a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y una vez analizado, de considerarlo procedente, apruebe lo siguiente;

**ÚNICO.-** Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nuevo León a reconsiderar la redacción de la reciente reforma al artículo 48 fracción IV de su Ley Estatal de Salud en materia de objeción de conciencia, para que sea adecuada y conforme a los principios constitucionales y convencionales en materia de protección del derecho a la salud.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 6 de noviembre de 2019.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.**

**PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO POR EL IMCO SOBRE EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL, QUE COLOCA A COAHUILA ENTRE LOS MEJOR EVALUADOS DEL PAÍS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

**Compañeras y compañeros Diputados:**

El mes pasado nuestro Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para impulsar a los Ayuntamientos a seguir sumando esfuerzos conjuntos para lograr mejores prácticas, que coadyuven a lograr una mejor transparencia y rendición de cuentas que exige la ciudadanía.

Con el voto unánime de esta Soberanía, solicitamos a los Ayuntamientos del Estado a continuar elaborando su Presupuesto de Egresos, con las mejores prácticas de contabilidad gubernamental, a fin de mantener a Coahuila como líder en cumplimiento del índice de información presupuestal municipal; esto de acuerdo con los resultados obtenidos en un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) que evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental, fomenta una serie de buenas prácticas contables y tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos.

Hoy queremos hacer referencia a otro estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., que como ya lo habíamos comentado en aquella ocasión, el IMCO es un centro de investigación en política pública y acción ciudadana que brinda soluciones prácticas a los principales retos de nuestro país, mediante propuestas totalmente sustentadas con datos y argumentos técnicos debidamente analizadas de una manera apartidista.

Recientemente el IMCO presentó un documento al que nombró *Transformando la Transparencia* y en el cual revela los resultados de su análisis sobre el *Índice de Información Presupuestal Estatal 2019* [[26]](#footnote-26).

A través de este estudio, el IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas a partir de 100 criterios agrupados en 10 secciones que incluyen aspectos como:

1. El acceso a las leyes de ingresos y presupuestos de egresos.
2. La disponibilidad de datos abiertos y estructura de las leyes de ingresos.
3. El uso de clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
4. El desglose de recursos destinados a las dependencias y oficinas de gobierno.
5. Información sobre recursos que las entidades federativas transfieren a los municipios/delegaciones.
6. El desglose de recursos destinados al pago de plazas y sueldos de funcionarios públicos.
7. La información sobre las condiciones de contratación de la deuda pública.
8. Los recursos transferidos de la federación a las entidades federativas.
9. El presupuesto destinado a fideicomisos, subsidios y programas de las entidades federativas.
10. El tipo de reglas utilizadas por los gobiernos para realizar ajustes y reasignaciones del dinero público.

Como podemos apreciar es un estudio muy detallado que permite saber, cuánto, cómo y en que se esta ejerciendo los recursos públicos de una entidad federativa, lo que genera transparencia en los presupuestos, lo cual es primordial para lograr la confianza de los ciudadanos en las actuaciones gubernamentales.

Consideramos importante destacar el hecho de que este estudio, realizado por el IMCO, es totalmente apartidista y muestra los resultados de acuerdo con 100 criterios agrupados en los rubros que ya señalamos anteriormente.

Coahuila obtuvo una calificación de 97 encontrándose entre los mejor evaluados en este tema, por lo que es necesario seguir avanzando hasta alcanzar la excelencia en materia de transparencia presupuestal estatal, en la cual participamos de manera conjunta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo cada uno en su ámbito de competencia, pues como lo pudimos advertir en las 10 secciones de aspectos a evaluar, algunos están basados en la legislación y otros en buenas prácticas.

Hago esta aclaración, porque en algunas ocasiones tal pareciera que nos queremos desligar de las acciones gubernamentales cuando va de la mano del marco de actuación, pues a nosotros nos corresponde brindar de una legislación que permita ejercer de manera eficiente la actuación de las autoridades y regir las normas a la que deban sujetarse los ciudadanos, y a ellos acatar las disposiciones legales vigentes, propiciando mejores prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas que requiere la ciudadanía.

Este estudio es importante, pues coincidimos con el IMCO en que *el primer eslabón para alinear los intereses de los ciudadanos con el Gobierno es el Presupuesto de Egresos* y de ahí la importancia de que este documento sea elaborado conforme a las necesidades reales de la población.

Esta evaluación constituye una herramienta de rendición de cuentas para los ciudadanos, y los resultados nos refleja cómo va el rumbo de nuestro Estado y en lo que debemos mejorar.

Hoy los invito, compañeras y compañeros Diputados a participar activamente en la construcción de herramientas legislativas, que propicien un mejor ejercicio del gasto público. Involucrémonos en esta tarea legislativa.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, noviembre de 2019.**

**LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** | | |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PRONUNCIAMIENTO, SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO POR EL IMCO SOBRE EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL, QUE COLOCA A COAHUILA ENTRE LOS MEJOR EVALUADOS DEL PAÍS.

1. García-Alba Iduñate, Pascual (2006). La estructura del IVA en México. Revista de Análisis Económico. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/413/41304807.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Gerardo Gil Valdivia (SF). Notas sobre la Introducción al Impuesto al Valor Agregado en México. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2338/9.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. Comunicación Social del Senado de la República. (2019). Plantean Reducir 50% el IVA en Región el Pacifico Sur. Disponible en: <http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46142-plantean-reducir-50-por-ciento-el-iva-en-estados-de-la-region-del-pacifico-sur.html> [↑](#footnote-ref-3)
4. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43805/9789243547305\_spa.pdf;jsessionid=B649829EB72CF3FB86F48D639AB4F0A2?sequence=1 [↑](#footnote-ref-4)
5. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63977/Documento\_Metodologico\_Proyecciones\_Mexico\_2010\_2050.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. Philippa Lysaght (2018). La menstruación es importante. Es reglamentaria. Disponible en: <https://blogs.unicef.org/es/blog/la-menstruacion-es-importante/> [↑](#footnote-ref-6)
7. Expansión MX (2016). Estos países dan días de descanso por cólicos menstruales. Disponible en: <https://expansion.mx/mi-carrera/2016/02/16/estos-paises-dan-dias-de-descanso-por-colicos-menstruales> [↑](#footnote-ref-7)
8. En este país está el proyecto de ley: S-1959/18. [↑](#footnote-ref-8)
9. UNICEF- CONEVAL Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México [↑](#footnote-ref-9)
10. UNICEF México [↑](#footnote-ref-10)
11. Informe anual 2017, México: Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México. [↑](#footnote-ref-11)
12. Parra Maria Luisa (2017). Acoso de padres a profesores: “La docencia se está convirtiendo en una profesión muy complicada”. Disponible en: <https://otroperiodismo.com/acoso-de-padres-a-profesores-la-docencia-se-esta-convirtiendo-en-una-profesion-muy-complicada>. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ipai, Alejandra. (2017). La difícil relación entre padres y profesores. Disponible en: <https://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2017/03/14/58c26a7fca47414e638b45ef.html>. [↑](#footnote-ref-13)
14. Síntesis del informe y de las recomendaciones en materia de justicia cotidiana, disponible en [*https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/90289/Informe\_Justicia\_Cotidiana\_-\_CIDE.pdf*](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/90289/Informe_Justicia_Cotidiana_-_CIDE.pdf) p.6 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Idem,* p. 16. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibidem* nota 1. P. 27. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ministerio de Educación y Formanción Profesional. (2018). La Dimensión Moral del Ser humano, Disponible en: <http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena2/quincena2_contenidos_4b.htm> [↑](#footnote-ref-17)
18. Pele, Antonio. (2015). La dignidad humana; el modelo contemporáneo y el modelo antiguo. Revista Brasileña de Derecho. Disponible en: <https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/892/944#footnote-40434-39> [↑](#footnote-ref-18)
19. Quintero, Lucero. (2017). La dignidad humana en el artículo 1º constitucional. Disponible en: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/11260/13225> [↑](#footnote-ref-19)
20. Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2009) Rubro. DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. Disponible en: <http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/165/165813.pdf> [↑](#footnote-ref-20)
21. Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Rubro. DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. [↑](#footnote-ref-21)
22. Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2009) Rubro. DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. Disponible en: <http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/165/165813.pdf> [↑](#footnote-ref-22)
23. Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer   
    Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. [↑](#footnote-ref-23)
24. Comisión de Salud y Grupos Vulnerables. (2019). Expediente Legislativo 12602/LXXV. Disponible en: <http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/pdf/lxxv/Dictamen%20Exp.%2012602%20Objecion%20de%20Conciencia.pdf> [↑](#footnote-ref-24)
25. Redacción de Animal Político. (2019). Médicos en Nuevo León podrán negar servicios de salud por supuestos principios morales. Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2019/10/objecion-conciencia-congreso-nuevo-leon/> [↑](#footnote-ref-25)
26. http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal/resultados [↑](#footnote-ref-26)